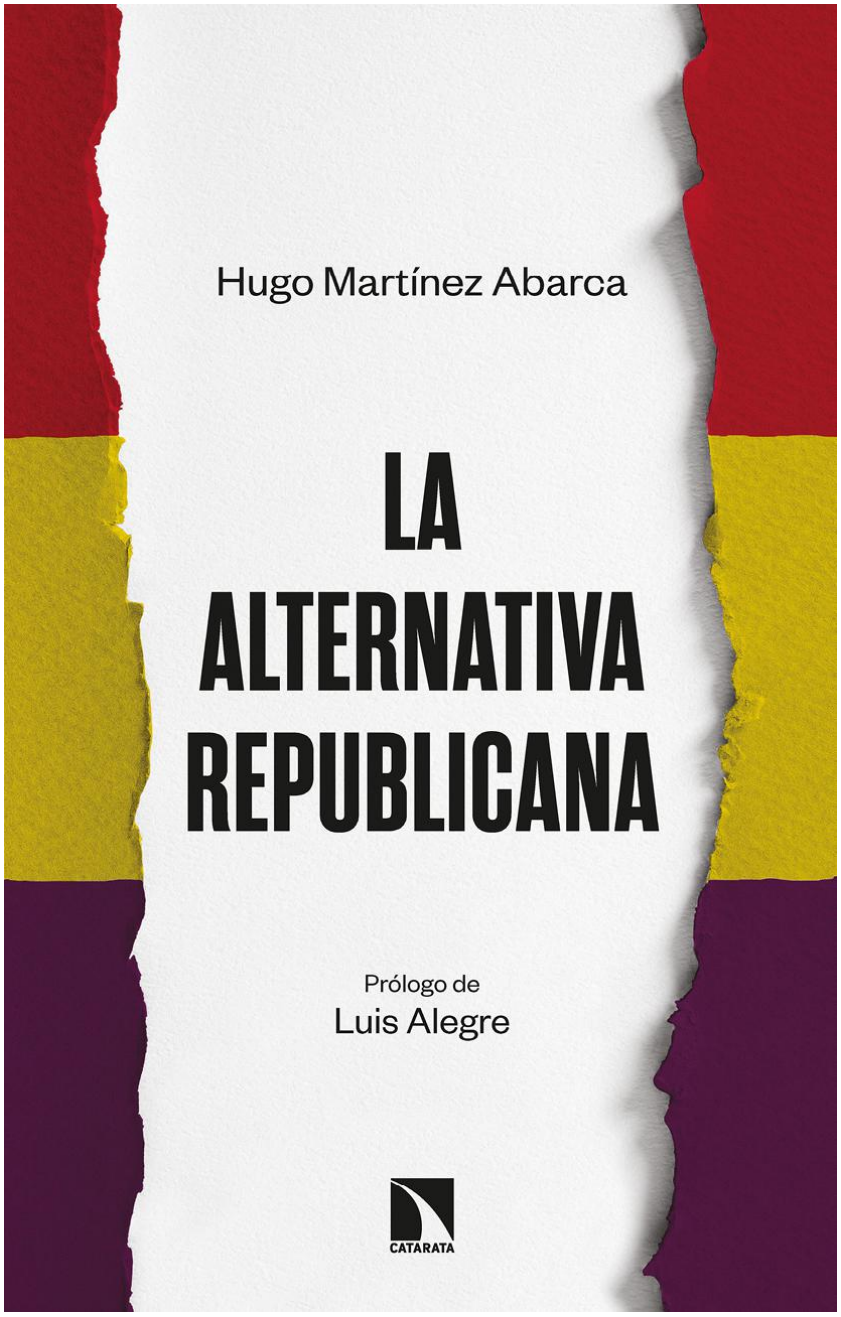
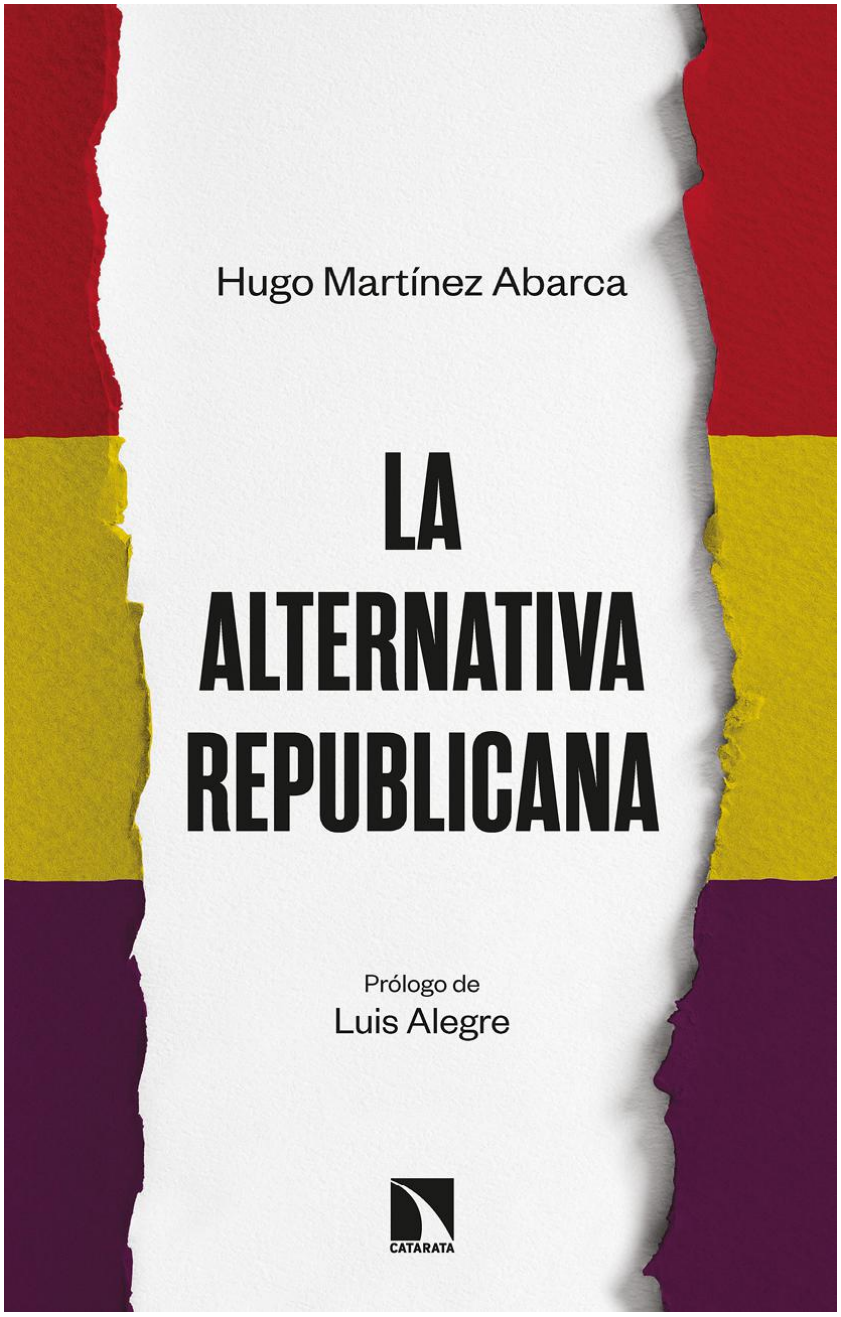
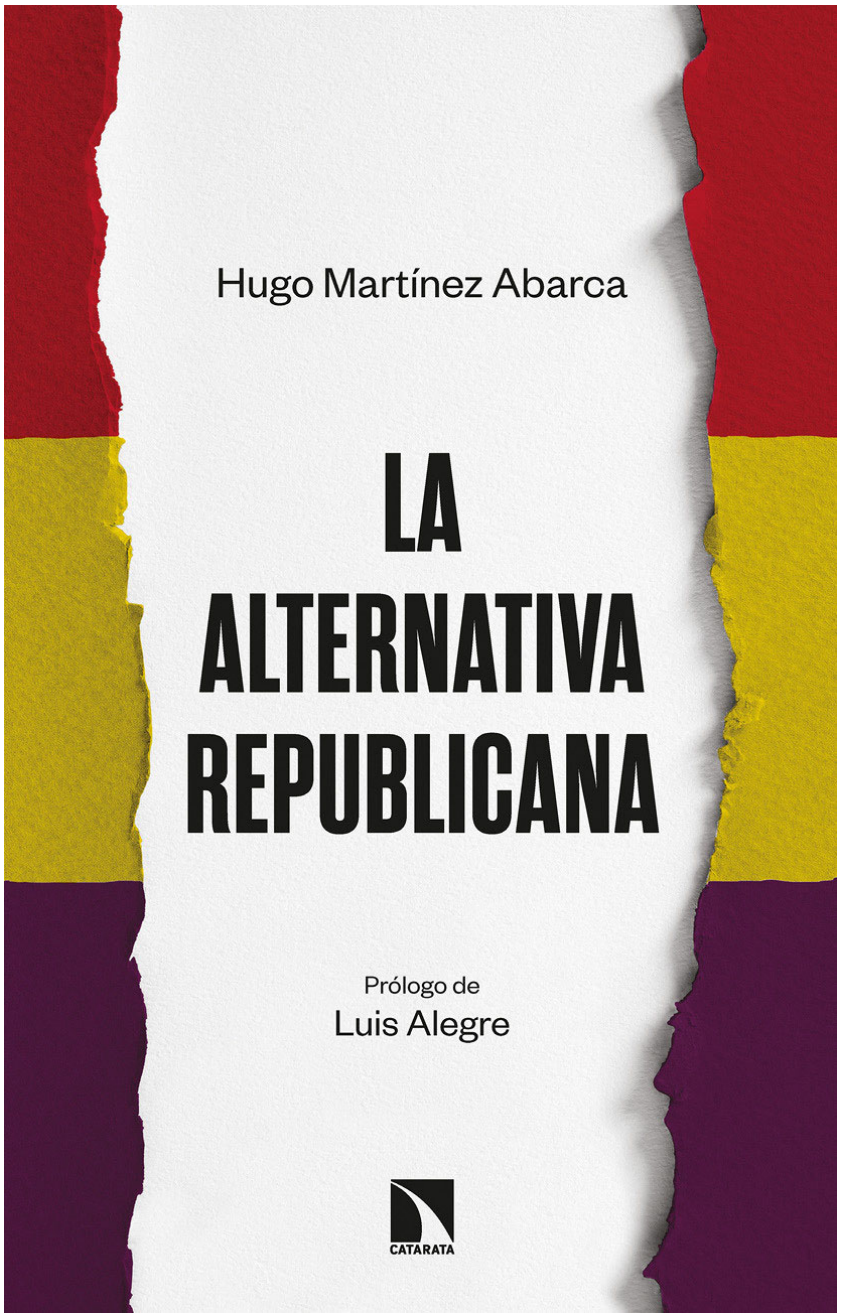

Hugo Martínez Abarca
LA ALTERNATIVA REPUBLICANA
Prólogo de
Luis Alegre
CATARATA


Hugo Martínez Abarca
LA ALTERNATIVA REPUBLICANA
Prólogo de
Luis Alegre
CATARATA


Hugo Martínez Abarca
LA ALTERNATIVA REPUBLICANA
Prólogo de
Luis Alegre
CATARATA

Hugo Martínez Abarca

Licenciado en Filosofía y en Ciencias Políticas, militó desde la juventud en la izquierda madrileña. Ha publicado múltiples artículos de opinión y análisis político en diversos medios (eldiario.es, Cuarto Poder, El País, etc.) y en su blog "Quien mucho abarca". En la actualidad es diputado en la Asamblea de Madrid por Más Madrid, donde ha sido portavoz en la Comisión de Justicia y en la de Telemadrid, ocupándose además de asuntos relacionados con la corrupción política y con la memoria democrática.

Hugo Martínez Abarca

La alternativa republicana

Prólogo de Luis Alegre

DISEÑO DE CUBIERTA: MARTA GARCÍA

© Hugo Martínez Abarca, 2021

© Los libros de la Catarata, 2021

Fuencarral, 70

28004 Madrid

Tel. 91 532 20 77

www.catarata.org

La alternativa republicana

isbne: 978-84-1352-280-7

ISBN: 978-84-1352-254-8

DEPÓSITO LEGAL: M-16.409-2021

thema: JP/3MPQ-ES

impreso en artes gráficas coyve

este libro ha sido editado para ser distribuido. La intención de los editores es que sea utilizado lo más ampliamente posible, que sean adquiridos originales para permitir la edición de

otros nuevos y que, de reproducir partes, se haga constar el título y la autoría.

Para Mateo, con el ánimo de que veamos juntos una España más alegre, justa y democrática; con la esperanza de que la llamemos república.

PRÓLOGO

Decía Chesterton en su célebre Ortodoxia que, para hacer de nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país o el mundo un lugar mejor, la clave está en no mantener una actitud ni optimista ni pesimista, sino patriótica. Una actitud simplemente optimista, de mera aprobación o exaltación de lo dado, lleva inevitablemente a dejar las cosas como están y a desaprovechar las posibilidades de mejora que siempre están abiertas. Sostener que todo está bien es siempre un modo de cercenar dimensiones de lo posible que permitirían hacer de cualquier lugar un sitio más justo, más bello y más libre. Por el contrario, una actitud de mero rechazo y desaprobación no puede producir más que un desaliento y abandono que nos lleven a querer cambiar de barrio, de país o a huir del mundo, pero no a implicarnos en la tarea de mejorarlo. La única opción de progreso pasa necesariamente por amar los sitios que nos han tocado en suerte. Amarlos de un modo un poco arbitrario, simplemente porque son los nuestros, de un modo semejante a como los padres o las madres aman a sus hijas e hijos o como se ama a las personas amadas. “Una madre no le pone un lazo azul a su bebé porque sin él estaría feo. Un enamorado no le regala un collar a su amada para ocultar su cuello”, nos recuerda Chesterton. Este modo de amar un lugar por el hecho un tanto absurdo de que es el nuestro, este patriotismo cósmico, nacional o de barrio, está tan lejos de la mera aprobación como del mero rechazo. Cuando amamos algo, “sus alegrías se convierten en una razón para amarlo y sus tristezas en una razón para amarlo más aún”.

El problema es que nos hemos acostumbrado a llamar “patriotismo” a una actitud que no es ni optimista ni pesimista, y mucho menos patriótica. Una actitud que odia a nuestras y nuestros artistas, nuestro cine, nuestro teatro; que odia a todas las naciones de las que nos componemos; que odia a las mujeres feministas; una actitud a la que cualquier cosa le parece un rojo, y que odia por supuesto a los rojos; que odia a inmigrantes y a pobres, a los maricones, a las

lesbianas, a trans, a ecologistas, a millennials, a Z y siguientes…; que odia un poco sin orden ni concierto pero que, en todo caso, odia a España (basta echar las cuentas aunque sea solo así un poco por encima). Y, por supuesto, odia pagar impuestos y odia a las instituciones que nos hemos dado para cuidarnos entre todas y todos.

Realmente hace falta forzar mucho el uso de las palabras para llamar "patriotismo" a ese odio de racimo. Quienes amamos el lugar en el que hemos nacido, y lo hacemos además sabiendo que se trata de algo bastante arbitrario, sencillamente porque es el nuestro, no podemos evitar querer que sea más amable, más amplio, más rico, aún más diverso, más acogedor y hospitalario, más justo, más limpio, más bello y más digno.

La violencia machista nos concierne de un modo más cercano cuanto más sentimos que podría estar en nuestra mano evitarla, y esto no se refiere solo los casos de amigas, familiares o vecinas, sino también a las mujeres con las que compartimos instituciones y nos damos normas en común que podrían evitarla. Con la desigualdad, la pobreza y la injusticia en el mundo podemos sentirnos indignados, pero con la que ocurre en el sitio donde pagamos impuestos y elegimos gobiernos somos en parte cómplices; y ya no se trata solo de empatía hacia el resto, sino de respeto a una y uno mismos. Querer a nuestro país es también saber que no va a desaparecer cuando ya no estemos, y que las generaciones más jóvenes van a seguir necesitando un sitio donde habitar, salubre y respirable. Moverse con la vista puesta en quienes vendrán después es también saber que nuestros gastos hay que pagarlos con impuestos y no tirando de una deuda que les deje una factura imposible de pagar. Por mucho que se retuerza el uso de las palabras, patriotismo es eso y no moverse con la vista puesta en la corte de Carlos V.

En nuestro panorama político, o simplemente charlando con nuestras amistades, no es tan difícil identificar a quienes confían en que es posible (incluso un deber) darnos entre todas y todos un futuro mejor, sostenible, responsable con las generaciones futuras; más igualitario y más diverso, capaz de respirar aire limpio si se lo propone y capaz de aprender a divertirse sin torturar animales. Lo

que no es tan fácil de ver, o al menos con claridad en sus detalles, es hasta qué punto la monarquía implica un baluarte del inmovilismo y un obstáculo para cualquier mejora. Esto es algo que, como mucho, se intuye vagamente, por una especie de olfato que nos lleva a tomar posición pero que no es fácil concretar exactamente el porqué. En realidad, siendo honestos, lo más probable es que tampoco los defensores de la monarquía fueran capaces de explicitar en qué medida se trata de una institución en la que se juegan tanto, pero también el instinto les dice que ahí se juega algo importante. Creo que tiene razón Fernando Oliván cuando afirma que "para determinados poderes, y no solamente para los que provienen del anterior régimen, la figura del rey es la baliza que nos informa de la estabilidad del sistema. Funciona como el pájaro que acompañaba a los mineros en los enclaves más arriesgados de la mina. Mientras el pájaro se mantenía vivo podían estar tranquilos. Por el contrario, su muerte era la señal de alarma que avisaba de la presencia del gas grisú"[1].

No deja en todo caso de resultar sospechoso que las discusiones en torno a la Corona sean, en general, bastante enconadas y, sin embargo, parezcan siempre desarrollarse sobre el supuesto compartido de que "no es que sirva para gran cosa", "en definitiva no tiene ningún poder", "tampoco molesta tanto…". Y, a partir de ahí, se esgriman argumentos tan absolutamente ajenos a la legitimidad dinástica como la campechanía o el precio, o tan ridículamente pobres como "igual es que no somos capaces de nada mejor".

Pero ¿y si la monarquía tuviese más poder del que nos imaginamos? (pero lo tuviera, claro está, por canales implícitos y paralelos a los reconocidos formalmente en las leyes). ¿Y si fuera realmente la piedra angular desde la que se articula y construye la arquitectura de élites de España? No de las élites intelectuales, por supuesto (tampoco vayamos a exagerar con "el Preparado"), pero sí esa especie de gran familia que integra a las altas jerarquías judiciales, la aristocracia del ladrillo y la construcción, los guardianes de la moral, las buenas costumbres y la religión, los siempre policondecorados garantes de la unidad de la patria… En fin, esa gran familia a la que, si perteneces, te afina las cosas cuando te hace falta, que siempre tiene un wasap de apoyo y cariño en los

momentos difíciles, que no se olvida de llamarte si sale un contrato que te pueda interesar o incluso que lo saca pensando en ti; a los que siempre puedes pedir que te recomienden alguna gestoría de confianza en Panamá; la gente de tu cuadrilla, con los que compartiste las horas felices del cole, el instituto y la universidad y que, aunque quizá a algunos de ellos hace tiempo que no ves, siempre coincides de vez en cuando en alguna boda (en El Escorial), en los toros o en cualquier espacio un poco distendido con un vinete y unos canapés, donde te puedes incluso echar alguna risotada con un chiste de feminazis y saber qué es de la vida de esos más golfetes que celebran los buenos negocios con volquetes de putas. Esa atmósfera, familiar y cercana, en la que es casi un deber decirle a tu yerno que jugar a la pelota está bien para un muchacho, pero que tiene ya que hacerse un hombre. Tu gente, vamos, a la que cuidas y la que se preocupa por ti y por los tuyos. El grupete con el que estás a gusto y en el que (sin desmerecer a nadie, o sí) la verdad es que desentonaría un profe de matemáticas, una investigadora precaria, un ama de casa con michelines, una cajera de supermercado, una señora de la limpieza o un inmigrante sin papeles. No por nada, ni porque se tenga nada en contra, sino porque los intereses e inquietudes son distintos y no sería fácil encontrar siquiera un tema del que hablar. A unos no les interesa mucho el tema de la licitación de las grandes infraestructuras y a los otros les aburre que alguien les venga todo el día con la matraca de cómo van a pagar el alquiler.

Y, como en cualquier cuadrilla, siempre hay alguien que es el que más admiración genera, el que tiene más contactos o las mejores ideas de cosas para hacer, el que tiene más autoridad o transmite más seguridad y confianza; al que todo el mundo escucha, y no porque sea necesariamente el más listo, sino porque tiene cierto respeto tanto dentro como fuera. En definitiva, el que imprime dinámica al grupo y es en cierto modo garante de su unidad.

El libro de La alternativa republicana es, para empezar, una extraordinaria crónica de este grupo de colegas cuya manía más tenaz es imaginarse que ellos son España. Pero tampoco es que estén locos, porque la crónica de esta pandilla resulta que nos proporciona, al mismo tiempo, una fascinante crónica de la historia reciente de España. Este libro está, desde luego, en las antípodas de

una actitud conspirativa o paranoide. Incluso allí donde las más elementales reglas de la verosimilitud (y la inalterable consistencia de los Borbones) nos invitan a imaginar fabulosas intrigas, el libro de Hugo Martínez Abarca se mantiene sobrio con los hechos y riguroso con los datos. Tampoco pretende aportar grandes hallazgos ni asombrosos descubrimientos. Pero el ejercicio de ordenarlos tiene un efecto iluminador muy sorprendente. Si, durante años, todos los días nos enseñaran unas cuantas células de un ratón, pasado el tiempo alguien podría decir que nos han enseñado el ratón entero sin ocultarnos nada. Y en cierto sentido sería verdad, pero en otro sería una mentira flagrante porque, de hecho, en ningún momento habríamos visto nada ni remotamente parecido a un ratón. Esto es lo que nos ocurre a mucha gente incluso si intentamos estar razonablemente informadas e informados de la actualidad. Y ocurre de un modo bastante inevitable, porque es así como funciona con carácter general la lógica de "la actualidad" (más allá incluso de la seriedad o deshonestidad de este o de aquel medio). Un mérito indudable de este libro es que, tras leerlo, podemos (pongamos por caso) volver a revisar la lista de invitados a la boda de la hija de Aznar y ver con toda nitidez al ratón.

En mi opinión, este sería por sí solo un motivo más que suficiente por el que merece leer el libro de La alternativa republicana. Sin embargo, creo que no es en absoluto la dimensión más importante del libro. Sus principales méritos consisten, por un lado, en hacer un diagnóstico claro del momento político en el que nos encontramos (más aún según vaya avanzando el deterioro inevitable de la institución monárquica) y hasta qué punto resulta decisiva la palabra república para impulsar cualquier opción de progreso viable en España. Y, por otro lado, en explicarle a la izquierda republicana más comprometida una verdad cierta pero incómoda: hay modos de defender la república que, paradójicamente, constituyen uno de los pocos puntales que sostienen hoy a la monarquía.

Para empezar, resulta cada vez más evidente la crisis en la que se encuentra la Corona. No solo por los escándalos de corrupción que han venido saltando de un modo reciente y que prometen primicias constantes durante una buena temporada. Es verdad que este nivel de desenfreno y corrupción obscena (que por otro lado es marca de

la casa desde tiempo inmemorial) no es fácil de sostener para una institución que no tiene margen para introducir otro cortafuegos que nombrar al heredero en todos los sentidos (heredero de los genes, de las cuentas, del trono, de los amigos…). Puede incluso empezarse a preparar el siguiente cortafuegos, pero el Toisón de Oro no es mucho más eficaz que el pino seco a estos efectos.

Sin embargo, la quiebra definitiva (aunque no inmediata) de la legitimidad monárquica no vino el día en que a Juan Carlos I se le empezaron a caer en público de los bolsillos fajos de billetes atados con una goma, sino el día en que algún lumbreras decidió que Felipe VI tenía que saltar a la arena de un problema político en España, renunciando así a su función moderadora y arbitral (que, en definitiva, es su único papel constitucionalmente reconocido que tiene un fondo de sentido en el marco de un Estado moderno). Con el discurso de octubre, al tomar partido de una forma tan contundente y teatral por una de las posiciones políticas en conflicto, firmó el fin de la monarquía. A partir de ese momento, cuando calla, otorga. Podría haber decidido no bajar al barro de los conflictos políticos absolutamente en ningún asunto y seguir limitándose a una intervención anual 100% sin contenido. Es decir, podría haber optado por mantenerse en un silencio apacible. Pero una vez intervino, las cosas sobre las que calla introducen ahora un silencio atronador.

¿La crisis de organización territorial implicaba un problema político grave? Sin lugar a dudas. Pero no menos grave es el problema que tiene España con la corrupción, que está a la base de una distribución delirante de los recursos. En todas las partidas de justicia, sanidad, educación, investigación, infraestructuras… se esconden montañas de dinero inútil inyectado a la aristocracia del ladrillo y la construcción (y así nos encontramos con aeropuertos sin aviones, autopistas sin coches, hospitales sin médicos, ciudades de la justicia sin jueces…). Y, en paralelo, una situación dramática de falta de medios en la sanidad, la educación o la administración de justicia. A partir del 3 de octubre, cuando calla sobre la corrupción que está en la base del desmantelamiento de las instituciones con las que nos cuidamos, la imaginación se nos va sola a Urdangarin, al “compiyogui” y al marqués de Villar Mir. Cuando calla sobre la emergencia climática (un problema al menos

tan grave como la unidad de España), se hace un silencio ensordecedor que dice a las generaciones futuras: “No es asunto mío que vayáis a necesitar un planeta habitable”. Con esto, renuncia a ser una institución capaz de representar a las generaciones más directamente concernidas por el colapso ecológico. Y, desde luego, tampoco ayuda que una imaginación un poco maliciosa pueda incluso sospechar que su Casa tiene, por lo que sea, alguna predilección por los combustibles fósiles. Cuando calla sobre la violencia machista y la opresión de género, e incluso coquetea con quienes hacen del antifeminismo su bandera (que en definitiva van siendo cada vez más “los suyos”), se escucha el bramido de la norma sucesoria que subordina a las mujeres. Cuando calla sobre la precariedad, que envía a miles de personas al exilio en impide a muchos de los que se quedan planificar un poco su propia vida, asumimos con resentimiento que, en cuanto a uno le enchufa su padre, se olvida de los problemas del resto.

Ante este panorama, Hugo Martínez Abarca desarrolla en este libro una propuesta política concreta, una propuesta nítida y simple y, precisamente por eso, una propuesta de una eficacia potencialmente enorme: “La propuesta republicana que hacemos pasa por hacer de la república una imagen de un proyecto popular y democrático para España, un nombre que, de alguna forma, represente una ruptura con el pasado, un nombre que pueda representar (pero que aún no lo hace) en millones de españoles un futuro democrático, moderno, avanzado, justo, ecologista, feminista y europeo”.

Escrito desde un sólido marco teórico, no necesita en absoluto emponzoñar el texto con referencias a “cadenas equivalenciales” ni “significantes vacíos”. Para empezar, porque tiene obviamente razón cuando sostiene que “no hay nada menos populista que declararse populista (quizás solo sea menos populista el lenguaje alambicado y muchas veces indescifrable de los teóricos del populismo que se pusieron de moda)”. Y, en segundo lugar, porque cuando hay una propuesta nítida, fácilmente comprensible y potencialmente eficaz, no hay necesidad ninguna de encriptar los textos con ese tipo de pedanterías. Y en este caso, hay esa tesis y se enuncia con claridad desde el principio: “Que no hay cambio si el cambio no tiene un nombre. Que no tenemos otro nombre disponible para el cambio que república. Y que para que sea el

nombre del cambio es imprescindible eliminar muchísimas connotaciones hoy asociadas en España a la República y enriquecerla con connotaciones mucho más compartidas, modernas y esperanzadoras".

Resulta bastante indiscutible que cualquier proceso de cambio necesita un nombre para hacerse reconocible y políticamente operativo. Un malestar sin nombre es más probable que te lleve al psicólogo que a las calles o a las urnas. Solo cuando se encuentra un modo de nombrar la apertura de un horizonte es posible señalarlo y andar en una dirección que todas y todos sabemos compartida. En ausencia de ese nombre es perfectamente posible que las reivindicaciones de justicia social, de igualdad de género, de sostenibilidad ecológica, de modernidad, transparencia, regeneración democrática, libertades civiles y diversidad tengan dificultades para articularse en un proyecto común. O que, como mucho, se articulen como proyecto de partido, pero no como proyecto de país.

En segundo lugar, creo que también acierta Hugo Martínez Abarca cuando señala que no tenemos otro nombre disponible para el cambio más que el de república. Y no lo tenemos por una sencilla razón: cada vez se hace visible con mayor claridad que la Corona es símbolo de la unidad y permanencia de una arquitectura de élites dispuesta a bloquear cualquier opción de progreso allí donde despunte en lo más mínimo.

Sin embargo, creo que es la tercera parte de la tesis la que resulta, al mismo tiempo, más importante y más dolorosa para quienes nos identificamos como republicanos. Nos encontramos a día de hoy en la situación paradójica de que, quienes pretenden estar defendiendo la monarquía son quienes más la erosionan, pero, por otro lado, el modo de defender la república al que estamos acostumbrados (y que llevamos grabado en el corazón) supone a nuestro pesar un balón de oxígeno para Felipe VI. Cada paso que da la monarquía hacia convertirse en una opción meramente de parte, es un paso que da hacia su propia ruina. Cada vez que en la calle, en el Congreso o en un acto oficial de la judicatura se lanza un "¡Viva el rey!" como quien lanza una pedrada a la cabeza de millones de españoles (más o menos como hacen con la bandera), están en

realidad empujando al rey al borde del abismo. Es posible que no lo sepan, o es posible que sí pero que, de todos modos, el goce que les produzcan sus propias exhibiciones de súbditos leales les importe más que el futuro de la propia monarquía. En cualquier caso, si hubiese alguien con dos dedos de frente a los mandos (algo que resulta cada vez más dudoso), harían bien tratando de evitarlo. Pero ellos sabrán. Este no es nuestro problema. Lo que sí nos concierne es que también nos enfrentamos a una alternativa parecida: trabajar por una España republicana o elegirnos como republicanos. Llevamos la II República en el corazón, las heridas de la derrota y la nostalgia del presente que podríamos haber tenido (y no tenemos). Pero no lograremos una III si no respetamos su tiempo histórico, su autonomía, su propia dignidad, los anhelos específicos del presente, las formas de identidad que construyen nuestra época, los ojos con los que se mira hoy al futuro. Si lo que queremos es una segunda oportunidad para la segunda, no haremos posible la tercera más que en salón de nuestras casas. Creo que este libro resulta fundamental para ayudarnos a trabajar por la I República española del siglo XXI (pero que nadie se inquiete por el nombre; esto no hará que deje de ser la III).

Luis Alegre Zahonero

INTRODUCCIÓN

Lo de la monarquía os importa un huevo, ¿no?

Luis Alegre Zahonero,

filósofo

El domingo 15 de marzo de 2020 a las 20:00 horas la Casa Real emitió un comunicado[2] en el que venía a reconocer que el titular de la monarquía española durante 39 años había sido un corrupto.

El momento elegido para tal comunicado no podía ser peor. Evidentemente, cualquier institución que emita un comunicado un domingo a las 20:00 horas lo que pretende es que pase lo más desapercibido posible. Pero además no era un domingo cualquiera. El sábado 14 de marzo el Consejo de Ministros había decretado el estado de alarma en toda España ante la expansión del virus SARS-CoV-2, el causante de la COVID-19. Ese domingo era el primer día en el que los españoles estábamos encerrados en nuestras casas intentando poner freno a un virus que causaría la muerte a decenas de miles de españoles; empezaban al menos dos semanas (serían prácticamente tres meses) de estricto confinamiento que obligaba al cierre de miles de negocios y hacía previsible la ruina de millones de españoles.

El objetivo de publicarlo en aquel momento tan raro era, evidentemente, camuflar un comunicado histórico y demoledor para la causa monárquica. Un rey trataba de huir de los gravísimos problemas que le suponían la conducta de su Casa parapetándose en una gigantesca crisis sanitaria y económica que estaba estallándole a su pueblo. Una cobardía escasamente coherente con los supuestos valores monárquicos, que ven en el monarca un valeroso liderazgo de la nación.

El gesto, feísimo, tuvo lógicamente mucha menos repercusión que el propio comunicado. En él Felipe VI anunciaba que, dado que se había comprometido a regir una institución con una conducta "íntegra, honesta y transparente, como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social", renunciaba —retóricamente— a la herencia de Juan Carlos I, a las fundaciones ilegales de las que fuera beneficiario el propio Felipe VI y retiraba a su padre la asignación económica que le venía pagando la Casa Real (194.232 euros al año). Asimismo, afirmaba no haber sabido nada de dos fundaciones en concreto (Zagatka y Lucum), algo que, según el comunicado, ratificaba el propio Juan Carlos I.

El comunicado venía a reconocer los documentos que estaba publicando el diario británico The Telegraph[3] y que estaba investigando la fiscalía suiza. Juan Carlos I, rey de España entre 1975 y 2014, había cobrado comisiones ilegales por la construcción del AVE a La Meca en Arabia Saudí. Con ellas había constituido al menos una fundación ilegal en Suiza de la que sería beneficiario su hijo, el rey Felipe VI.

La reacción al comunicado fue unánime: desgraciadamente el pueblo español no estaba en condiciones de pararse a debatir sobre el asunto por extremadamente grave que fuera. Ahora tocaba superar una crisis radical cuyas consecuencias sanitarias y económicas aún eran imprevisibles pero se sabían demoledoras: el día anterior se habían notificado 151 fallecidos en España en las últimas 24 horas.

Conforme se iba recuperando algo parecido a una normalidad, los monárquicos intentarían señalar una suerte de conjura republicana que querría atacar a la Corona, por un lado, y resucitar en Corinna Larssen el mito machista de Yoko Ono. Juan Carlos I habría sido un hombre de bien, un magnífico rey español, hasta que una mala mujer le ofreció una tentadora manzana, que mordió ingenuamente.

El lunes 3 de agosto la Casa Real volvía a emitir un comunicado. Informaba de que el rey Juan Carlos I se iba de España "ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada"[4].

La supuesta disculpa de Juan Carlos I que pretendían instalar los

monárquicos era que no es que fuera corrupto, sino que era un hombre de mente tan frágil como para meterse en operaciones delictivas de millones de euros procedentes de la dictadura más cruel del planeta solo por la seducción de una mujer perversa. Juan Carlos no era fundamentalmente corrupto; era fundamentalmente imbécil. Y era la imbecilidad la que le había conducido hacia la corrupción.

Convendremos en que caben defensas más favorecedoras.

El otro empeño de los monárquicos fue distinguir el devenir corrupto del individuo Juan Carlos de Borbón del rey Juan Carlos I, artífice de la Transición[5]. Las dos líneas de defensa resultaban ciertamente contradictorias. El hombre que en solitario había planeado y conseguido el derribo de una dictadura desde dentro, el hombre en cuya cabeza cabía el diseño del tránsito a la democracia admirado en todo el mundo, el hombre que detuvo en solitario desde su despacho el 23F (lo que Platón no habría logrado en Siracusa, lo habría logrado Juan Carlos I en España), etc., tenía tal fragilidad mental que era arrastrado a la corrupción por los simples encantos de una atractiva mujer.

Como la defensa de la monarquía nunca ha descansado especialmente en la racionalidad, el principio de no contradicción no suponía un obstáculo inasumible para el argumentario monárquico.

De la mano de una enorme crisis mundial por la COVID-19, agravada en España por la virulencia con la que había atacado la enfermedad y la dependencia económica del sector servicios y especialmente del turismo, se agigantaba la crisis de la monarquía que había parecido aparcada desde hacía algo más de un año.

La mayor parte de este libro se escribió en verano de 2018. Durante 2019 pensé que la hipótesis que planteaba había decaído y lo aparqué en un disco duro. Durante el confinamiento de 2020 fui consciente de la solidez de la hipótesis, lo recuperé y entre ese verano y enero de 2021 terminé de escribir estas páginas.

El 31 de mayo de 2018 en el Congreso de los Diputados se debatía la moción de censura contra Rajoy: una moción histórica (la

primera que saldría adelante) y emocionante (comenzó su debate sin que se supiera el resultado). En los chats también se debatía. En uno de ellos, que compartimos unos cuantos amigos, Luis Alegre comentaba: “Al ritmo al que van las cosas, ¿os parece imposible que se termine poniendo en cuestión la monarquía?”. Como nadie contestaba, siguiendo la tradición mayéutica de los filósofos, Luis insistió: “Lo de la monarquía os importa un huevo, ¿no?”. Una de las primeras respuestas fue de David Campo, amigo y compañero de aventuras políticas desde hace muchos años, que explicó: “Hugo y yo estábamos todo el día hablando de república en IU. Pero en Podemos parecía que no tocaba”. Comenzamos a debatir sobre el tema, las potencialidades y debilidades del asunto. David llevaba razón: la idea que entonces manejábamos la llevaba recuperando desde hacía unos meses y aproveché la conversación para compartirla: “Yo sigo creyendo que no hay proyecto de cambio viable sin poner nombre al nuevo país. Los catalanes tienen independencia. Nosotros no tenemos nada. Y a nadie se le ha ocurrido un nombre mejor que república. Otra cosa es que haya que mimarlo para que sea futuro y no pasado, democracia y no izquierda. Pero no hay otro nombre”.

Esa es la tesis de este libro. Que no hay cambio si el cambio no tiene un nombre. Que no tenemos otro nombre disponible para el cambio que república. Y que para que sea el nombre del cambio es imprescindible eliminar muchísimas connotaciones hoy asociadas en España a la república y enriquecerla con connotaciones mucho más compartidas, modernas y esperanzadoras.

2019 fue, como todos los años de la última década en España, un año histórico. A finales de 2018 la extrema derecha irrumpía por primera vez con fuerza en las instituciones españolas logrando, de paso, que la derecha gobernara por primera vez en democracia en Andalucía. Las elecciones generales del 28 de abril de 2020 se celebraron bajo el miedo real de los votantes progresistas a un posible Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos controlado por Vox como el andaluz. El 26 de mayo cayeron casi todos los ayuntamientos del cambio. Pese al alivio del resultado de las elecciones de abril, PSOE y Podemos se enrocaron y nos llevaron a unas nuevas elecciones generales. En septiembre cayeron durísimas condenas a los líderes independentistas catalanes que fueron

respondidas por primera vez con incidentes violentos en Cataluña, generando un ambiente propicio para Vox. El 12 de noviembre, dos días después de las elecciones a las que nos habían llevado por no ponerse de acuerdo, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias anunciaban un acuerdo para formar el primer Gobierno de coalición desde la restauración de la democracia. En noviembre, Vox aprovechó la repetición de las elecciones para convertirse en tercera fuerza española empujada por la sentencia contra los líderes independentistas y la respuesta en Cataluña.

El curso de lo ocurrido desde las elecciones andaluzas (2 de diciembre de 2018) hasta la formación del Gobierno de coalición (enero de 2020) fue lo que me hizo pensar que no era válida la hipótesis republicana sobre la que estaba escribiendo. Entraban en el Gobierno ministros de Podemos (incluido su secretario general, Pablo Iglesias) y de Izquierda Unida (su coordinador, Alberto Garzón). Pero además las distintas elecciones habían lanzado un mensaje conservador para las fuerzas progresistas. Se constataba el fin del ciclo del 15M: el miedo de los votantes progresistas, la irresponsabilidad de sus principales líderes políticos y la fuerza con la que la extrema derecha se asentaba en España llevaba al cierre del momento populista y el paso a un momento cívico-republicano en el que primase una reconstrucción institucional, democrática, social y también territorial, y se castigara la polarización.

En ese contexto era francamente complejo plantear una propuesta de cambio político-institucional para España que comenzara por su vértice.

Paradójicamente el momento republicano complicaba la propuesta republicana. En el fondo no había tal paradoja o, al menos, la paradoja era solo una verdad cabeza abajo, como decía Hegel. Porque la propuesta republicana que hacemos pasa por hacer de la república una imagen de un proyecto popular y democrático para España, un nombre que, de alguna forma, represente una ruptura con el pasado, un nombre que pueda representar (pero que aún no lo hace) en millones de españoles un futuro democrático, moderno, avanzado, justo, ecologista, feminista y europeo. No es lo que representa ahora, pero lo que planteo es que puede representarlo… y que no hay otra imagen que pueda representarlo.

Desde el 15 de marzo de 2020 la hipótesis volvió a parecer plausible hasta el punto de resultar incluso obvia. Los enormes escándalos que salpicaban a la monarquía ya no eran disimulables e iban de la mano de la gravísima crisis generada por la COVID-19, más dramática y radical aún que la crisis de 2010. La representación política de apenas un par de meses antes saltaba por los aires y la podredumbre de la Casa Real colocaba a la monarquía en una situación insostenible.

De repente una hipótesis abandonada tenía más vigencia que en el momento en que la elaboraba. Lejos de ser una propuesta histriónica, la hipótesis aparecía casi como oportunista. Pero cuando una propuesta puede resultar oportunista tantas veces en momentos tan distintos… uno empieza a creer que es más oportuna que oportunista.

Esta propuesta republicana es una tesis de la que no estoy seguro. Estoy dispuesto a dejarme convencer de que hay otros nombres posibles, aunque ni se me ha ocurrido ninguno ni nadie es capaz de decirme uno que no sea tremendamente genérico (“democracia”). Creo interesante desarrollar la propuesta brevemente para exponer los porqués, los problemas, las dificultades, y discutirlos. Por eso este libro no pretende ser nada parecido a una tesis académica, sino que anda más bien a camino entre el ensayo periodístico y el panfleto político (en el sentido de que tengo posición, no la escondo y la defiendo para que pueda ser sometida a crítica y contraste). La propia escritura del libro me ha servido para debatir con gente muy valiosa los aspectos más dudosos que planteo y espero que su publicación sirva sobre todo para eso: para abrir un debate que hoy aún no estamos teniendo y trazar una suerte de línea política si de ese debate emergen posiciones más o menos parecidas a la que plantea el libro. Lo que sí ha habido desde el 15 de marzo de 2020 es una ofensiva escasamente agazapada contra la Casa Real por parte fundamentalmente del grupo parlamentario de Unidas Podemos (no de sus ministros), pero esta parece ser más bien un factor de cohesión de la izquierda (y también de la derecha monárquica) que un plan para republicanizar España.

Es interesante lo que en aquella conversación planteaba David Campo y es algo sobre lo que una introducción a este libro

necesariamente tiene que llamar la atención. Efectivamente, en los primeros años de la crisis (del país y de la izquierda) alguna gente pensamos en la república como reclamo del cambio. Muchos de los elementos que entonces planteábamos están en este libro: especialmente la necesidad de construir un relato histórico de España que trascienda la II República e incluso la I República y establezca una suerte de hilo emancipador en la historia de España.

Pero creo que lo más interesante no es qué planteábamos entonces sino por qué dejamos de defenderlo.

Ningún otro nombre como el de república tiene su potencial transformador ni, en abstracto, transversalizable. Sin embargo, su principal obstáculo para convertirse en el nombre del cambio en España es su clara vinculación simbólica y emocional con la izquierda clásica y el pasado, y ello, en general, viene empujado con entusiasmo y emoción por los propios republicanos. Nada ayuda más al deterioro de la monarquía que los monárquicos; pero nada frena tanto una república como (nosotros) los republicanos.

Justo antes del primer aniversario del 15M, el 14 de abril de 2012, la asamblea del 15M de mi barrio, Chamberí, me propuso que hablara sobre monarquía y república. El día no pudo ser más oportuno, no solo por la efeméride sino porque fue el día en que empezó a finiquitarse el reinado de Juan Carlos I. Por la mañana supimos que el rey de España había tenido un accidente en Botsuana, adonde había ido a cazar elefantes acompañado de una tal Corinna Larsen (princesa de tal, zu Sayn-Wittgenstein… la sucesión de distintos nombres o alias no podía llevar a nada bueno). El accidente arrancó definitivamente el manto de silencio que había cubierto a la Casa Real al menos hasta el caso Noos.

Desde entonces y hasta la abdicación de Juan Carlos I la monarquía empezó a aparecer como tema de conversación chusco. No se planteaba explícitamente el debate entre monarquía y república, pero el deterioro de la institución era evidente y los monárquicos más lúcidos diagnosticaban que o Juan Carlos abdicaba o la monarquía corría serios riesgos en España[6].

Cuando hablamos de una alternativa republicana, no se trata solo de proponer una alternativa para España llamada república, sino

que para que haya cambio necesitamos una alternativa al tipo de republicanismo que quienes venimos de la izquierda española hemos propuesto durante tanto tiempo. La pregunta por una alternativa republicana es también por una alternativa a nuestro republicanismo: y ello como revisión de los planteamientos propios no es una enmienda a otros republicanos, sino a los republicanos que hemos sido y que no hemos conseguido que la república aparezca como alternativa de país sino solo como símbolos identitarios (y enormemente queridos) de una izquierda minoritaria.

He intentado evitar cualquier pretensión academicista, sortear debates teóricos (que, aun así, se pueden percibir sin excesiva audacia) y huir de tecnicismos. He preferido pecar de simple que de pedante (intentando evitar las dos cosas, obviamente). Ello hace que en muchas ocasiones se den cosas por supuestas: intento exponer propuestas políticas sin necesidad de explayarme, mostrando los gigantes sobre los que andamos, los puntos de partida teóricos o ideológicos con los que construyo tal propuesta. Esto no quiere decir que, si cito una idea concreta o mucho más un texto ajeno, no lo cite, por supuesto. Simplemente, dada la pretensión de este libro de ser mucho más un ensayo que un estudio, el debate lo quiero centrar en las propuestas, no en esos presupuestos.

La filosofía es imprescindible especialmente en esta época; también lo es el análisis politológico. Y también lo es la claridad y la honestidad: disfrazar todo de elevada reflexión filosófica o de complejo e inaccesible análisis politológico solo ayuda a embarrar el debate. Del mismo modo que durante muchos años ha habido un fuerte complejo en el pensamiento humanístico y social con respecto a las “ciencias duras” y se ha tratado de equiparar a ellas los conocimientos más variados (asumiendo el error según el cual lo que no es ciencia no es conocimiento), parece ahora que quien analice la relación entre Sofía de Grecia y Letizia Ortiz sin partir de Heráclito y Hegel está haciendo algo poco riguroso. En la última década tenemos muchos más analistas de Gramsci que lectores de Gramsci. Así que lo último que he hecho en la elaboración de este libro es buscar en él la palabra hegemonía para asegurarme de que solo aparece una vez y es la que el lector acaba de ver en cursiva.

Se puede llegar al mismo punto desde distintos lugares y por caminos diversos. Una propuesta política es un punto de partida colectivo al que cada uno habrá llegado como haya podido, pero lo relevante es compartir ese punto desde el que empezar a caminar juntos. Por supuesto no reniego de los debates teóricos y académicos, que son fundamentales para la vida en común, para la emancipación intelectual y para la política. De lo que intento huir es de una de las peores tradiciones de la izquierda, su vocación de empantanarse debatiendo sobre el sexo de los ángeles en vez de intentar ser tan pragmáticos como se presupone a quien se considera materialista: igual que a los libros teóricos no se les exige que hagan una propuesta política, solicito humildemente para este pobre panfleto la eximente teórica, al menos una eximente incompleta.

Si de este libro surgen debates bizantinos me declararé tan fracasado como si de este libro no surge debate o acción algunos.

PRIMERA PARTE

FORMACIÓN DEL ESPÍRITU DE LA TRANSICIÓN

A mí nadie me dice a la cara “derechita cobarde”.

José María Aznar

Régimen

Los últimos cuarenta y cinco años de la historia de España han tenido distintas etapas, algunas muy diferenciadas y cada una con sus características y su legado. Es difícil saber en cuál estamos ahora, aunque sin duda viene marcada por los acontecimientos de 2020: el primer Gobierno de coalición democrático y, sobre todo, la crisis sanitaria y sus terribles consecuencias políticas y sociales.

Bastante antes de 2020 ya había concluido un ciclo que cambió la perspectiva política con la que miramos la Transición y, por tanto, la monarquía española. Ese ciclo, lo que vinimos a llamar "el 15M", introdujo cambios sustanciales en la cultura política española. En España no se produjo una revolución clásica. Nadie del 15M tomó Palacio de Invierno alguno; no hubo "asalto a los cielos" más que como lema autocomplaciente. Sin embargo, del 15M surgió un cambio irreversible en la cultura política de los españoles y fundamentalmente de las generaciones de españoles que no protagonizaron la Transición, españoles que heredaron la Constitución de 1978 con todo su peso político institucional y cultural.

Cabría definir el 15M como un clima social que impugnaba la vigencia del régimen del 78. Esta expresión, "régimen del 78", se popularizaba por primera vez, para disgusto de toda una generación de intelectuales, periodistas y políticos desconcertados ante un nuevo sentido común que no comprendían.

Nos explicaron que régimen es una expresión reservada a dictaduras, a la dictadura franquista que ellos habían sufrido y que en España parece que solo debe ser recordada para silenciar a quienes no vivieran la dictadura porque solo quienes la conocieron (los artífices de la Transición) tienen legitimidad para discutir y diseñar la política española.

El diccionario de la Real Academia Española define régimen como

“sistema político por el que se rige una nación”, por lo que objetivamente no habría ningún problema en hablar del régimen del 78 si no fuera por una de las carencias de la democracia española: el pudor que se impuso para hablar de la dictadura franquista. Esto ha provocado que, en vez de utilizar la decena de sustantivos precisos con los que podríamos referirnos a lo que sucedió en España al menos entre 1939 y 1975, hayamos hablado de “régimen franquista”. Tan natural ha sido el uso del eufemismo régimen en lugar de dictadura que, cuando se empezó a hablar de régimen político con rigor, como el sistema político por el que se rige España, nos regañaron explicándonos que esto no era un régimen sino una democracia. Tampoco se puede negar con falsa ingenuidad que usábamos la expresión “régimen del 78” aprovechando la connotación que acompaña a la palabra en la España de la Transición.

Lo importante de esta impugnación de la expresión “régimen del 78” no era tanto la meramente nominal. Lo que revelaba la incendiada indignación que generó la crítica al régimen del 78 fueron sobre todo tres aspectos, obviamente nunca afirmados expresamente:

Que se consideraba la existencia de dos categorías políticas dicotómicas, cerradas y excluyentes: los países son dictaduras o democracias. Con fronteras rígidas entre ambas formas políticas y sin matices relevantes en el seno de cada una de ellas.

Que, dentro de esa concepción dicotómica, el sistema político surgido de la Transición es una democracia y que, al ser todas las democracias esencialmente iguales, cualquier crítica sustantiva o la mera manifestación de la necesidad de superarla esconde un ataque a la democracia (a toda democracia posible), ya sea consciente o fruto de la ignorancia.

Que existe una especie de reserva de intelectuales rigurosos y sabios, viejos políticos, columnistas y tertulianos con autoridad para distinguir los juicios razonables de la demagogia iletrada e inexperta.

¡Manos arriba! ¡Esto es un consenso!

Solíamos llamar intuitivamente "Transición" a un grupito de años (la segunda mitad de los años setenta y, en todo caso, primeros años ochenta) en el que se pasó de una decrépita dictadura de corte fascista cañí a un régimen constitucional democrático, con todas las peculiaridades y límites que se quiera. No tiene mucho sentido político (sin duda sí académico e intelectual) discutir sobre lo que efectivamente se hizo en aquellos años, si fue un éxito, un fracaso, una rendición o una victoria… Sobre todo, no tenemos mucho derecho los nacidos en esos años o después a pasar una factura a quienes venían de luchar contra una dictadura, de sufrir cárcel, muerte, torturas… a quienes en aquellos años vieron la posibilidad de que su país fuera habitable y se agarraron a ella. No fue algo unívoco, por supuesto que hubo demócratas que se oponían a tal o cual cesión; tampoco se puede negar que algunas de las cosas que después nos han contado como cesiones fueron conquistas (la Ley de Amnistía, por ejemplo, que después se ha usado para defender la impunidad de los crímenes franquistas, fue vista entonces como una conquista para los presos políticos). Quizás deberíamos perder menos tiempo en discutir sobre si aquello fue lo mejor posible y centrarnos en dos aspectos:

Por un lado, señalar que tanto si en los años setenta se hizo un camino heroico ejemplar para el mundo como si lo que hubo fue una operación poco menos que lampedusiana, cuarenta años después los elementos institucionales y constitucionales de 1978 no son los del futuro, que han cubierto su ciclo, que están agotados.

Por el otro lado, identificar y desmontar los elementos políticos y culturales de estos años más conservadores (en el sentido de freno de todo cambio), los más hostiles a las ideas democráticas y emancipadoras. Fundamentalmente, la exigencia de consenso se ha transformado en una suerte de derecho de veto a cualquier cambio tanto para mejorar la democracia como para "elevar a la categoría

política de normal, lo que a nivel de calle es plenamente normal". Curiosamente esa frase de Adolfo Suárez de 1976 hoy choca con la retórica que nos dice que cualquier coma que corrijamos de lo que se hizo en la Transición debe contar con consenso parlamentario… por muy normal que sea a nivel de calle.

Un ejemplo notable, y perverso, es la ley electoral, diseñada en aquellos años para generar un mapa político estable, potenciando dos partidos centrales (Unión de Centro Democrático, UCD, y, algo menos, Partido Socialista Obrero Español, PSOE) con dos partidos menores a su derecha (Alianza Popular, AP) y a su izquierda (Partido Comunista de España, PCE). No tiene mucho sentido discutir, insisto, si en aquel momento era conveniente o no condicionar el mapa electoral. Parece haber un amplio consenso en que hoy no tiene ningún sentido premiar a partidos solo porque son más fuertes en las provincias menos pobladas. Pero cada vez que se ha planteado la posibilidad de reforma de la ley electoral para hacerla más proporcional, los partidos sobrerrepresentados (PP y PSOE, al menos hasta ahora) se niegan con el argumento de que una reforma de la ley electoral exige consenso, es decir, que cualquiera de ambos tenga derecho de veto. ¿Cómo va a dejar de ejercer tal veto un partido que obtiene una representación extra inmerecida? ¿Alguien se imagina que un partido que no ha dudado en saquear las cuentas del Estado para que los constructores financiaran irregularmente sus campañas electorales accediera a apoyar una ley electoral que no le beneficiara tanto solo porque sea más democrática? La perversión es que esa reforma no solo generaría un natural consenso popular, sino que haría que las instituciones se parecieran más al país, por lo que los ingredientes de futuros consensos estarían mucho más equilibrados y por tanto habría menos capacidad de vetar[7].

La apelación al consenso no conduce a rebajar la conflictividad política sino, sobre todo, a dificultar todo cambio. La justicia nunca se conquistará por gracioso acuerdo con quien se beneficia de la injusticia. Y la democracia no es el sistema de los consensos sino todo lo contrario: un sistema que reconoce los disensos y los gestiona para que el conflicto inherente a una sociedad plural no se resuelva mediante la violencia, sino de forma pacífica traduciendo a una sola la multiplicidad de voces, construyendo mayorías y

limitando la acción de estas sobre las minorías garantizando un catálogo de derechos intocables.

Más allá de eso, es evidente que los relatos que se han impuesto sobre qué fue esa Transición a la que le debemos todo incluyen mimbres profundamente conservadores que se oponen a la normalidad democrática, que es siempre dinámica.

¡Es la cultura, idiotas!

Con todo, es importante añadir que, pese a la intuición a la que hacía referencia arriba, cuando hablamos de la Transición (con mayúsculas) en realidad hablamos de un relato a medio camino entre lo místico y lo épico que se construyó muchísimo después, básicamente entre 1995 y 2002: los años de la formación del espíritu de la Transición. Ello puede tener su importancia a la hora de reducir la épica del conservadurismo que se opone a todo cambio: no estamos refutando lo que se hizo en el paso de la dictadura a la democracia, sino lo que nos contaron que fue el paso del felipismo al aznarismo, lo cual, sin duda, impresiona mucho menos.

Antes del surgimiento del 15M ya se discutía sobre el régimen del 78 o "régimen de la Transición". Entonces, la Transición aparecía en el ámbito político-mediático como un fenómeno ante el cual solo cabía hacer reverencias. Únicamente en los márgenes se podía criticar tal o cual aspecto, y dentro de los cauces de orden se podía discutir sobre la necesidad de reformar el Senado o si la sucesión a la Corona debía eliminar la discriminación (también) por género. Sin embargo, su impugnación tras el 15M fue más cultural que institucional: se elaboró mucho más la crítica a la cultura de la Transición (cuyas siglas, CT, no generaban problemas de comprensión), sobre todo a partir de las reflexiones de periodistas como Guillem Martínez y filósofos como Amador Fernández-Savater.

Existía una suerte de debate entre académico y bizantino sobre cuándo terminó la Transición: si en 1977 (con la Ley para la Reforma Política o las primeras elecciones desde la República), si en 1978 con la Constitución, si en 1981 con el 23F, en 1982 con la victoria del PSOE… también hubo quien dijo que en 1996 con la vuelta al poder mediante elecciones de la derecha y quien afirmó que la Transición se cerró el 13 de marzo de 2004 con las

movilizaciones en las sedes del PP (tras las mentiras del 11M) en las que apareció el pueblo adoptando el protagonismo político que la Constitución otorgaba solo a los partidos.

Ese debate se disolvió como un azucarillo tras el 15M, pero sin duda habrían aparecido nuevas fechas candidatas a ser el cierre de la Transición: el propio 15M, la abdicación del rey Juan Carlos I, el 1 de octubre de 2017 en Cataluña o incluso quién sabe si con el 1 de junio de 2018 con la moción de censura que tumbó al Gobierno de Rajoy o el día que entró en prisión Iñaki Urdangarin. Quizás el 15 de marzo de 2020 con el comunicado de Felipe VI desmarcándose de su padre, por qué no, o unos meses después con el ostracismo de Juan Carlos I.

Era un debate meramente retórico, pero su propio planteamiento, la imposibilidad de darle una respuesta y el hecho mismo de que sea un debate que se diluye cuando el régimen del 78 entra en crisis muestran que la Transición no fue un periodo histórico ubicable más o menos entre la muerte de Franco y la consolidación de la democracia del 78, sino que la Transición es la democracia del 78.

En el siglo XIX la restauración propiamente dicha de la monarquía de los Borbones se produjo solo entre el golpe de Estado de Martínez Campos en 1874 y la constitución de Cánovas de 1876, y aun así hablamos de la Restauración como el régimen que abarca de 1874 a 1931 (o, al menos, hasta 1923). Del mismo modo se planteó hablar del presente modelo político como del régimen de la Transición, pues es esta la que lo vertebra, la que limita las decisiones políticas y la que constituye una auténtica religión política en nuestro país.

Obviamente, lo que acabó por popularizarse como nombre del régimen actual es el de “régimen del 78”. Resulta llamativo que a la cultura política del régimen se la llame cultura de la Transición, mientras que al aparato político institucional lo hemos acabado vinculando con la fecha concreta de la Constitución. Quizás esa disociación entre lo cultural y lo político-institucional sea el principal problema con el que nos encontramos para la hipótesis republicana que más adelante abordaremos: mientras el 15M es un gran movimiento transformador de la cultura política, sus hijos tangibles remitieron a la política partidaria e institucional: Podemos

y los “ayuntamientos del cambio” conquistados en 2015. Y el cambio acabó no siendo de régimen sino de gobiernos (que no es poco).

Seguramente muchos de los aspectos de la cultura de la Transición han sido derrotados del 15M para acá; pero en cambio, los aspectos objetivo-institucionales del régimen del 78 están intactos salvo acaso en Cataluña, donde han sufrido un ataque más serio.

Hubo un tiempo en que los sectores políticos emancipadores despreciaban los cambios institucionales simulando que los únicos relevantes eran los cambios culturales y sociales. Felizmente Podemos vino a rectificar eso, concretando en lo institucional el conflicto abierto por el 15M. En la propia Puerta del Sol durante el 15M se coreaba a menudo “Hay que cambiar la ley electoral”, haciendo evidente la importancia de lo institucional. Pero hasta ahora ni el 15M ni Podemos han sido capaces de generar ese cambio.

Transición, tú antes molabas

La Transición ha tenido en las últimas décadas un carácter místico-religioso como epopeya fundacional que define el país que pudo ser y del que nadie debe moverse. Pero no siempre fue así.

En los primeros años de la Transición algunos de sus cimientos adquirieron un papel protagonista. En 1977 se impuso la bandera rojigualda y la aceptación por la monarquía del PCE para su legalización: otros partidos que no renunciaron a la aspiración republicana no fueron legalizados y, por tanto, no concurrieron a las elecciones y se quedaron fuera de los debates constituyentes. La monarquía y su bandera eran elementos irrenunciables del régimen a construir.

La monarquía apareció entre 1975 y 1978 como incuestionable por la fuerza, pero el 23F brindó la posibilidad de dar un paso de muchísima mayor eficacia: la aparición de Juan Carlos I en TVE la noche del golpe de Estado permitió hacer de este el garante de la Constitución, esto es, de la democracia.

Como respuesta al 23F se colgó en miles de balcones la bandera constitucional de España por primera vez. Y no lo hacía la derecha nacionalista sino precisamente muchos demócratas que la contraponían al golpismo ultraderechista: era el símbolo de la Constitución y la Constitución era sinónimo de la democracia.

El rey, garante de la Constitución; la Constitución, sinónimo de democracia. Pero aún no había ese relato épico de la Transición como odisea fundacional de la España democrática. Ni, desde luego, "la Transición" era el nombre del régimen democrático.

Es muy revelador el editorial del 24 de febrero de 1981 de El País, primer periódico que decidió enfrentarse contundentemente al golpe de Estado[8]. Con el Congreso aún secuestrado, anteponía la lealtad a la Constitución en su mismo título: "Con la Constitución"

(la portada del número de urgencia encabezaba con: “El País con la Constitución”). En él lo asaltado el 23F era la Constitución de 1978, cuya legitimidad no era histórica sino democrática: era legítima porque la votó el pueblo español (“una criminal violación de la Constitución, aprobada en referéndum popular en diciembre de 1978”, “suceda lo que suceda a quienes nos mantenemos fieles a la Constitución y a la legalidad vigente, nacidas ambas de elecciones libres y de la voluntad del pueblo español”). El rey Juan Carlos I adquiría ya el carácter de salvador de la democracia con un aire claramente mesiánico: “La defensa de la Constitución y de la legalidad vigente ha tenido en el rey su más resuelto y admirable combatiente. Este país nunca podrá olvidar que […] don Juan Carlos asumió la responsabilidad de la situación y encomendó a los secretarios y subsecretarios no aprehendidos por los secuestradores el ejercicio del poder civil”. Y, sobre todo, adquirió ya el carácter de símbolo de la democracia: “La actitud del jefe del Estado en las tensas horas de ayer es símbolo de la legitimidad constitucional y democrática”.

La única mención expresa (ni siquiera con mayúscula) a la etapa de transición es profundamente crítica: “El golpe de Estado ilumina, por lo demás, buena parte de los acontecimientos de la etapa de transición y los sitúa en su adecuada perspectiva”. Esa adecuada perspectiva permite al editorialista de El País denunciar las “debilidades, complicidades y cobardías” a la hora de limpiar de golpistas las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad y señalar las conspiraciones de los dirigentes de UCD como responsables de la desestabilización: “Hasta la dimisión de Adolfo Suárez adquiere, a esta luz, un nuevo significado, lo mismo que la irresponsabilidad de numerosos miembros de su partido. Todos aquellos que han jugado a aprendices de brujos conjurando a fuerzas y presiones extraparlamentarias para promover sus intereses podrán comprender ahora lo fácil que es provocar tormentas enormemente más graves y peligrosas que las que deseaban poner al servicio de sus objetivos”. Junto a ellos, se responsabiliza a “los ideólogos de las bandas armadas y los terroristas” que “habrán tenido ocasión de comprobar cómo un golpe de Estado, que convertiría al País Vasco y al resto de España en un gigantesco campo de concentración o de exterminio, es la única consecuencia política a la que llevan sus acciones criminales”.

La Transición ha muerto, viva 1992

Tardó mucho en concebirse la Transición como algo exitoso y mucho más en pensar que debía de ser el punto de orgullo nacional sobre el que construir el país. Tanto que lo que se intentó fue darle carpetazo en 1992 y decirnos que aquel proceso había terminado y que la España del momento ya no tenía nada que ver, que la España de la que había que sentirse orgullosos no era la de quince años antes sino la de un futuro representado por los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla; un país moderno que se construía con ese futuro rey que caminaba ante el mundo con la bandera de todos nosotros en Barcelona. No se renegaba de la Transición, simplemente se tomaba como una época superada. Solo el fracaso de aquel relato por la crisis económica y política de 1993 a 1996 hizo necesario otro relato fundacional y legitimador, y ahí encontró su hueco una narración épica de la Transición.

En 1992 España estaba de fiesta. Era, en el fondo, la culminación del cambio del país: de la España cutre, gris, mugrienta, de la conciencia (xenófoba y reaccionaria) de que África empezaba en los Pirineos, se pasaba a una fiesta continua con la Expo de Sevilla, los Juegos Olímpicos de Barcelona y hasta una discreta capitalidad cultural europea de Madrid. Incluso España empezaba a liderar éxitos deportivos en diversas disciplinas (Induráin, Arantxa Sánchez Vicario, el Barça de Johan Cruyff, el éxito en el medallero de Barcelona 92) y comenzaba una cierta edad de oro del cine español. Y, por supuesto, el AVE.

Llama la atención Eduardo Maura[9], con acierto, sobre el papel adquirido por el entonces príncipe Felipe en la ceremonia de inauguración de los Juegos. Fue el abanderado de una delegación española que generó emoción en todo el país. Las lágrimas de Elena de Borbón quedaron para la historia iconográfica seguramente porque eran lágrimas de emoción con las que se identificaba buena parte de los españoles.

Dice Maura que aquel desfile pudo tener el papel de discurso del 23F de Felipe de Borbón; la imagen que lo respaldaba para estar al frente de la España moderna, europea, democrática, normalizada y exitosa del futuro. Juan Carlos I necesitaba una legitimación democrática y, para ello, la idea de que nos había salvado de otro golpe de Estado era perfecta. El 92 nos contaba una España distinta, y la imagen del abanderado olímpico representaba inmejorablemente el nuevo liderazgo sobre esa nueva España.

Esa imagen del príncipe Felipe, más prosaica, como primus inter pares de ese nuevo país, es perfectamente coherente con la construcción de un personaje serio, poco carismático pero cosmopolita, políglota y sobre todo muy preparado. Ello se contrapone con la imagen de su padre campechano, deportista y taurino, en absoluto cultivado, extraordinariamente espontáneo, indisimuladamente mujeriego y discretamente pesetero (la corrupción de Juan Carlos siempre fue conocida, pero en el fondo formaba parte de ese personaje y se dejaba pasar con un discreto silencio sin siquiera negarla). La España posfranquista dejaba paso a la España del siglo XXI. Un rey de la España landista daba lugar al rey de “la generación mejor preparada de la historia”.

Los Juegos Olímpicos eran en Barcelona y ello sirvió además para una reconversión de los afectos simbólicos. Por primera vez en medio siglo, la bandera rojigualda aparecía de una forma espontánea y no impuesta como símbolo de alegrías compartidas. Algo que volvería ocurrir con el gol de Iniesta en el Mundial de Sudáfrica en 2010. La cuestión simbólica es evidentemente relevante en un país como España, y más si abordamos la cuestión republicana.

Hay un factor político muy revelador sobre el que pone el acento Eduardo Maura y que nos ayudará a entender el giro aznarista. En 1991 esta España moderna se sitúa como centro mundial de la paz (eso sí, tras haber participado en la guerra del Golfo unos meses antes) con la organización a instancias de la Unión Soviética y Estados Unidos de la Conferencia de Paz de Madrid para Oriente Medio.

En definitiva, los fastos del 92 y todo lo que les rodeaba arrojaban con notable éxito un punto de inflexión en el imaginario nacional e

internacional de España. Nuestro país no necesitaba cimientos de legitimación nostálgicos, sino que miraba al futuro con la sensación de que lo mejor de nuestra historia estaba empezando.

El futuro ha muerto, viva la Transición

En 1993 toda España era consciente de la crisis económica, el paro alcanzaba los tres millones de españoles y el goteo de casos de corrupción al más alto nivel devolvía a España a ese imaginario mugriento que pretendíamos haber abandonado. En plena crisis económica, además, España se amarraba a los criterios de Maastricht para entrar en el euro y ello imponía restricciones económicas (reducción del déficit, de la deuda pública, control de los salarios para que no subiera el IPC, etc.), por lo que el malestar de los españoles contrastaba de forma durísima con la ilusión (reducida a ilusionismo) de 1992.

El hecho de que algunos de los personajes más notables de esa nueva España exitosa se revelaran delincuentes económicos que se habían enriquecido a costa de los españoles mientras estos iban perdiendo sus empleos acentuaba la conciencia de que 1992 había sido algo peor que un espejismo, una farsa carísima. La caída fue tan repentina que convirtió al 92 en un bumerán. No solo no era el símbolo del futuro, sino que parecía darnos un bofetón de realidad: españoles, no os hagáis ilusiones, bastante bien estáis como estáis.

A la conciencia de que en el fondo no habíamos cambiado tanto ayudaba que uno de los escándalos del momento remitiera a la cultura de la dictadura militar: los GAL, la cal viva, el coronel Galindo, Amedo, Barrionuevo, Rafael Vera, Corcuera y su patada en la puerta, las escuchas ilegales del CESID…

La euforia por el éxito tan reciente acompañaba a la melancolía por la sensación de fracaso eterno. La exaltación de la amistad fruto de una enorme borrachera nacional dejaba paso a una resaca que aconseja no levantarse de la cama. El fracaso del intento de construir un futuro nacional es el caldo de cultivo sobre el que se construye la idealización del pasado, de la Transición.

La serie sobre la Transición que firmó Victoria Prego para TVE[10]

supuso un punto de inflexión en la percepción popular de aquel periodo: una serie de 13 capítulos que después se regaló con periódicos, se vendió en quioscos… fue la que más hizo por popularizar el relato hagiográfico compacto oficial de la Transición, con su completo santoral y sus onomásticas, como si la Transición, más que un régimen político, fuera una religión.

Es imposible saber en qué medida fue analizado así y si alguien decidió que la televisión pública combatiera la ausencia de cimientos legitimadores institucionales en plena crisis política y económica, pero desde luego la serie de Victoria Prego llegó en el momento en que los españoles necesitábamos argumentos para mantener el presente si queríamos evitar la tentación de una ruptura política.

No es relevante si hubo un plan o simplemente sucedió, pero lo cierto es que hasta 1995 no se construye la Transición con mayúsculas, el Génesis de la democracia española. La Transición se emitió en La 2 a partir del 23 de julio de 1995. Pese a la fecha y la cadena, la serie cuajó: obtuvo unas audiencias buenísimas (el primer capítulo de una serie documental de historia política emitida por La 2 tuvo un 23% de share, dos millones de espectadores) y después se usó como un instrumento de propaganda crucial.

Además de su venta en quioscos y su emisión en facultades, se prepararon spin-offs sobre Suárez o el rey Juan Carlos. Victoria Prego emergió como voz oficial del legado de la Transición y como tal se le daba el micro para que hablara en concentraciones contra el terrorismo como voz de España[11].

Todo parece indicar que probablemente había más demanda popular de un relato exitoso de país que un plan. Y lo normal es pensar que esa demanda popular viene de la orfandad que dejó el 92, cuando sí que hubo un relato planificado que voló por los aires con la crisis económica y política de 1993 en adelante.

La Transición comienza hoy

El día en que se emitía el último capítulo de la serie, El País publicó una entrevista a Victoria Prego cuya primera frase era: “La Transición termina hoy”[12]. En ella se cuenta que la serie se había empezado a producir seis años antes y que había finalizado dos años antes de su emisión, tiempo durante el cual estuvo en la nevera de TVE. Desde luego, no se planificó como respuesta al fracaso del relato del 92. En todo caso, es ciertamente irrelevante qué buscaron con aquel documental; lo importante es qué encontraron.

En aquella entrevista decía Victoria Prego sobre los propósitos de la serie: “Lo primero, nos planteamos no invadir la conciencia del espectador y no dar la historia digerida y coloreada. Queríamos estar en una posición de respeto intelectual al espectador, partiendo de que no es un ser manipulable sino un individuo capacitado para llegar a sus propias conclusiones”. De nuevo da igual que ella se lo crea o no. Vista la serie casi un cuarto de siglo después es evidente que lo que cuenta es un relato de parte, que es una serie propagandística, de propaganda oficial para la construcción de un sentido común de época.

Es irrelevante si Victoria Prego era conscientemente artífice de un plan maléfico de adoctrinamiento de las masas en la cultura de la Transición o si simplemente hizo un honesto trabajo documental desde el punto de vista que ella consideraba que era el relato real de la construcción de la democracia del 78. Lo importante es que durante mucho tiempo los españoles asumimos como verdad incuestionable ese relato épico repleto de héroes liderados por el rey Juan Carlos I y Adolfo Suárez en segunda posición.

Si había un plan, no parece precisamente un “plan de régimen”. Además del largo periodo entre el comienzo de su elaboración y su emisión, hay que destacar que estuvo rodeada de cierta polémica no precisamente desde sectores políticamente marginales. Se criticó su

coste (“unos ochenta millones [de pesetas]”, según Victoria Prego), el tiempo de elaboración… La recepción por parte de ABC no fue precisamente favorable[13]: “Algo de andar por casa que, por el momento, no justifica la polémica que arrastra”, pero no la justifica por ser superficial; “un documental de consumo donde se dejan a un lado la investigación y las polémicas”; “vemos en ‘La Transición’ casi las mismas imágenes que vio en los telediarios la audiencia de los setenta”. Quién sabe si lo que molestó fue que una de las imágenes que rescató la serie fue un artículo de mayo de 1975 en ABC de Luis María Ansón (en 1995 director del medio) titulado “La cobardía moral” en el que arremetía contra los políticos “aperturistas” por no mantenerse rígidos en la defensa numantina del franquismo del 18 de julio.

Quizás sí que hubo una intención, pero no tanto la de cimentar un relato de país como la de contrarrestar la crispación política. Como dice Luisa Elena Delgado:

A medida que la democracia fue avanzando y con ella se iban asentando las inevitables diferencias políticas, la apelación al “espíritu de la Transición” se hacía cada vez que en el ambiente se notaba la llamada “crispación”, que debería entenderse como parte habitual del proceso político, pero que en España, igual que en otros países de pasado dictatorial (Chile o Argentina, por ejemplo), siempre parece ser el anuncio del retorno de algo amenazador[14].

Que la crisis de la COVID-19 recuperara el recuerdo de los Pactos de la Moncloa es perfectamente coherente[15].

Contra la crispación, Transición

Si en alguna legislatura se ha acuñado la crispación como denominación del clima político fue en la de 1993 a 1996. Cada día aparecía un caso de corrupción en las esferas más cercanas a Felipe González, al tiempo que el PP de Aznar simuló indignación con el terrorismo de Estado, las torturas y las cloacas (hizo oposición con los GAL e indultó a Barrionuevo y Vera desde el Gobierno; anunció una contundente limpieza del CESID y luego la redujo a un cambio de nombre —CNI—; se declaró "horrorizado" por los crímenes de Intxaurrondo pero no adoptó ni una sola de las medidas que reiteradamente propone la ONU a España para evitar la tortura). Y mientras, la crisis económica, agudizada por las políticas neoliberales autoimpuestas, destrozaba la vida de millones de familias: la tasa de paro llegó al 24,5% (3,9 millones de parados) en 1994, récord histórico que permaneció vigente hasta 2013. Había crispación por el tipo de oposición que hacía el PP, pero sobre todo porque había razones para que el país estuviera crispado.

Cabe pensar que en esas circunstancias era una buena idea para el Gobierno de Felipe González emitir una serie que, de nuevo, confrontaba la crispación de Aznar con el consenso del espíritu de la Transición, especialmente cuando uno de los hombres de la Transición, de los artífices del consenso, era el propio Felipe González.

La crispación fue entonces la principal estrategia de defensa del PSOE en aquellos años críticos. Fue memorable el vídeo electoral del PSOE en 1996 (el vídeo del dóberman)[16] en el que se comparaban dos ideas de España: la "España en negativo" (el PP de Aznar y Álvarez Cascos, de la incertidumbre, del retroceso, de los golpes en el atril y los gritos, de los que "nos quieren hacer creer que nada funciona", "quieren confundirnos y ocultar la realidad", del "no", de "la derecha no cree en este país", de los que "miran hacia atrás y se oponen al progreso", del "no es la solución: es el

problema", que "nada les parece bien") frente al lema electoral del PSOE: la "España en positivo" (con manos que se chocan llegando a un acuerdo, besos, gente que camina en la misma dirección incluso enganchada del hombro; una España en positivo, la de hoy, la que construye, que no da la espalda a nadie, vive y deja vivir: este país moderno, progresista y libre).

Es, pues, razonable pensar que se emitió el documental pensando en corto (los intereses electorales del PSOE) y en que saliera, como efecto no previsto, una jugada en largo. Una jugada táctica de partido que se convirtió en una jugada estratégica de país.

Estaba tan poco instalada la necesidad de conservar la Transición que en el mismo 1995 José María Aznar no solo no planteaba recuperarla sino superarla: publicó un libro titulado significativamente España. La segunda transición[17]. La Transición estaba bien como fundación de un nuevo periodo histórico, pero ahora lo que tocaba era otra transición (por supuesto, capitaneada por él). Pero el terreno estaba abonado por los propios fracasos del PSOE (de los fastos del 92 al fiasco del 93): el país necesitaba un relato, una razón de ser: una fantasía identitaria. Eso lo aportaba el documental de Prego y sobre ese terreno abonado germinó la Transición como mito, un mito legitimador arrollador.

El titular de la citada entrevista en El País a Victoria Prego menciona el especial éxito de la serie entre los jóvenes, a lo que añadía: "Luego pensamos que la serie tenía que ser muy asequible y tratamos de que el montaje tuviera un estilo un poco cinematográfico. En cuanto a los jóvenes, creíamos que no iban a verla, pero nos equivocamos. No obstante, pensamos que la vía audiovisual era la única forma de que los jóvenes se interesaran por la historia reciente, ya que los mensajes les entran mejor por la televisión que por los libros". Desde luego, la serie forma parte de la biografía política de quienes empezamos a madurar políticamente en aquellos años.

Su impacto fue mayúsculo y constituyó la narración oficial de la Transición como mito legitimador del poder político, periodístico y hasta empresarial español. España pasaba de intentar ser un proyecto nuevo de país a necesitar cimientos en nuestro pasado de los que sentirnos orgullosos: en el fondo somos lo que éramos, no

aspiramos a más, pero al menos sabemos que estamos lo mejor que podemos estar con esta “materia prima” gracias a un pasado fundacional del que sentirnos orgullosos.

Poquísimos años después de haber sido centro del mundo nos contábamos que lo que sí que había sido un ejemplo para todo el mundo era lo que habíamos hecho dos décadas antes. Esto era especialmente relevante como instrumento deslegitimador de cualquier alternativa de reforma sensible del aparato institucional nacido en 1978.

La santa madre Transición

Más que como un régimen criminal, la dictadura franquista aparece como un conglomerado decrépito aislado de su tiempo, tanto del internacional como de un país en el que hay una clase media preparada para la democracia. Resulta paradójico que la serie comenzara explicando que el asesinato de Carrero Blanco por parte de ETA fue absolutamente estéril (los jerarcas franquistas entendieron así que el franquismo no sobreviviría a Franco, pero se explica que con Carrero tampoco habría sobrevivido porque un país como la España de 1973 no tenía más rumbo posible que la democracia), pero después se viera el recorrido heroico de Juan Carlos I, Suárez y los protagonistas secundarios de la Transición para lograr una democracia que acabase con la dictadura. Era imposible que no sucediera lo que pasó; pero al mismo tiempo era heroico que sucediera lo que pasó (e inevitable). Como curiosidad: Josep Ramoneda contó años después que el propio rey Juan Carlos I le había señalado el asesinato de Carrero Blanco como condición de necesidad para el posterior rumbo hacia la democracia tal y como sucedió: "Si esto no hubiera ocurrido, tú y yo no estaríamos ahora aquí"[18].

Más de dos décadas después, lo importante de la serie de Victoria Prego no es tanto lo que contaba como lo que recordamos que contaba y cómo llegó a ser la manifestación de un nuevo relato del país.

En la Transición hubo una suerte de santoral de hombres (todos hombres) sabios e irreprochables. Ahí estaba, por supuesto, Adolfo Suárez, cuya elevación a los altares se concretó a su muerte con el nombre del aeropuerto de Madrid, el "Kennedy español". No es extraño que Albert Rivera quisiera constituirse como su reencarnación, puesto que eso era poco menos que aparecer como la democracia.

El santoral de la Transición diseñó una suerte de transversalidad

política: ningún español se quedaba sin un santo de los suyos disponible al que reconocieran como hombre sabio y sobre todo generoso incluso con los adversarios. La derecha más dura tenía, sin duda, a Manuel Fraga; la izquierda de tradición marxista, a Santiago Carrillo. Si hasta ellos se sentían cómodos en el marco del 78, si Manuel Fraga y Santiago Carrillo cedieron… cómo vas a pedir tú hoy lo que no pidieron ellos.

Por supuesto, en la cima del santoral estuvo el rey Juan Carlos I durante muchos años: el Zeus del Olimpo patrio.

Junto al santoral aparecían las onomásticas sacras: aniversarios redondos que ejercían el papel de fiestas de guardar todos los años. En 1997 celebrábamos el 20º aniversario de la Ley para la Reforma Política y de las primeras elecciones tras la muerte de Franco; en 1998 celebramos el 20º aniversario de la Constitución; en 1999 se conmemoraba el 20º aniversario de las primeras elecciones municipales; en 2000 se podía conmemorar el 25º aniversario de la muerte de Franco y sobre todo el inmediato aniversario de la coronación de Juan Carlos de Borbón, un cuarto de siglo en el trono democrático; en 2001 se podrá celebrar el 20º aniversario del 23F (y de cómo la monarquía nos salvó, una suerte de tarea histórica para todo rey de España) y el 15 de junio de 2002 volvíamos a empezar de nuevo con el 25º aniversario de las elecciones de 1977, con lo que se reiniciaría el ciclo de conmemoraciones redondas.

Hoy esto pasa con una discreción absoluta, incluso con disimulo. En 2018 se iba a conmemorar el 40º aniversario de la Constitución de 1978 y se pensaba utilizar para rehabilitar la imagen de Juan Carlos I. Sin embargo, los sucesivos escándalos obligaron a mantener una celebración discreta de tan redondo aniversario. El resto de aniversarios, que antes de la crisis eran acontecimientos, pasan hoy desapercibidos sin más. En 2020 se celebró el 45º aniversario de la coronación de Juan Carlos I con la mayor de las discreciones, solo regateada por el enorme morbo, con este en el ostracismo y, al parecer, visitado por su hija Elena[19].

Sin embargo, este ciclo era extraordinariamente intenso hasta el 15M. Aparecían series televisivas, panegíricos, debates entre posiciones cercanísimas, libros, testimonios de los santos y héroes protagonistas, volúmenes de memorias explicando que “yo estuve

allí y fui muy importante"… Hoy es evidente que ni el santoral ni desde luego el reiterado ciclo de onomásticas pueden tener ya más función que la mera quiebra generacional: para una parte creciente de los españoles, todas esas fechas y nombres carecen por completo de solemnidad, por lo que ese intento de sacralización genera más distanciamiento que la adhesión que llegó a provocar en el pasado.

En la época de esplendor del relato de la Transición, no hace tantos años, no podían dejar de recordarnos ni un año mediante esta propaganda pseudoreligiosa que teníamos lo mejor que podríamos tener (es decir, no valía la pena esforzarnos en tener nada mejor) gracias a un periodo de iluminación divina sobre la política española que, nos explicaban, era estudiado en todo el mundo. Así, todo el mundo estudiaba la Transición pese a que, por ejemplo, en ningún Estado del mundo más que en España se hubiera instaurado ninguna monarquía desde 1975: no parece que todos los aspectos de esa Transición fueran deseables para tantos imitadores.

La sacralización de la Transición era extremadamente útil para todo el conservadurismo (no solo para el de derechas), pues era un instrumento que servía a la parálisis de cualquier anhelo de cambio que pudiera surgir y evitaba solucionar problemas que dejara abiertos el proceso de hace cuarenta años. Cada vez que surgían propuestas mínimamente audaces que pudieran ir contra la voluntad de los sectores más inmovilistas de nuestra política, siempre aparecía como espada de Damocles la ruptura-de-los-consensos-de-la-transición; ruptura que era la puerta de entrada a los infiernos.

Ni una crítica, ni una revisión. Del mismo modo que en Navidad no se menciona la inexistencia de Dios ni de los Reyes Magos, en cada uno de estos aniversarios había que loar a los padres de la patria y seguir guardando las miserias debajo de la alfombra. Año tras año hasta que se diluyó rápidamente la magia del relato místico-político.

Aznar en tiempos revueltos

El relato unificador de la Transición, con todo, fue truncado.

No tiene mucho que ver el relato amable de unos extremos que se abrazan, olvidan viejas cuitas y llegan a acuerdos que deben ser preservados por las generaciones venideras so pena de volver a matarnos entre las dos Españas, con el martillo de herejes en que se convierte tiempo después. Probablemente tiene mucho que ver con que en los noventa el relato lo dominaba el PSOE de Felipe González, que afrontaba el desgaste de su gestión acosado por la derecha (el PP de Aznar) y por la izquierda (la Izquierda Unida de Julio Anguita), mientras que entre 2000 y 2002 el relato lo dominaba Aznar con mayoría absoluta en el Congreso, una oposición zombi y un panorama internacional que cambió en 2001 con los atentados del 11S, favoreciendo recortes democráticos en nombre de la seguridad (y la democracia) frente al terrorismo.

Los años noventa fueron políticamente bastante convulsos. Son los años en los que emerge el aznarismo como alternativa real a los gobiernos del PSOE de Felipe González. Existe una enorme crisis política derivada de la crisis económica, los escándalos de corrupción y la recuperación del caso GAL, es decir, del terrorismo de Estado de los primeros años ochenta.

El ejercicio de cinismo pasma con la perspectiva histórica que da mirar un cuarto de siglo después lo que son y han sido Aznar, el aznarismo y su PP. Pero efectivamente, la corrupción (ajena) fue su principal instrumento de propaganda para justificar la necesidad de la llegada del PP al Gobierno. A través de la corrupción del PSOE (GAL, CESID) y la guerra sucia contra ETA como instrumento de propaganda que justificase la necesidad de la llegada del PP al Gobierno, Aznar rompía con buena parte de la cultura política real de los años setenta y ochenta. Desde Manuel Fraga a Santiago Carrillo (pasando por Xabier Arzalluz y Jordi Pujol), la diversidad política cabe en un amplio espectro retórico siempre y cuando se

someta a un estrecho cauce de acción política real. Cabe un ministro franquista que nunca se distanció de la dictadura, cabe un secretario general del PCE que usaba la simbología clásica comunista con un fuerte componente identitario, caben discursos nacionalistas en ocasiones extravagantes. Pero los elementos centrales de la política española nunca son cuestionados más que retóricamente. Por supuesto, la monarquía no se cuestiona en ningún caso (salvo en el marco de lo teórico, de lo utópico y siempre desde un punto de vista abstracto, de los valores republicanos o del "alma republicana del partido socialista"); tampoco se cuestiona el olvido de las víctimas de la dictadura ni la impunidad de sus crímenes (la comprensión de lo que fue la II República, el 18 de julio, la Guerra Civil y la dictadura franquista se reserva a la academia y huye del Congreso y mucho más de los tribunales). Pero lo que desde luego no se critica más allá de la nota a pie de página de quienes no pueden evitarlo (nacionalistas vascos y PCE, básicamente) son los excesos (cuando no crímenes y en todo caso violación de derechos) de las fuerzas de seguridad.

Lo que cambia con la llegada de Aznar a AP no es solo el nombre del partido sino la sustitución del sentido de Estado de Manuel Fraga por el sentido de partido de Aznar. Esto no es ni bueno ni malo en términos morales: no tiene por qué ser mejor el "todo vale si beneficia a España" (con una concepción muy determinada de qué sea España) que el "todo vale si beneficia al Partido Popular". No es mejor ni peor, pero sí es sustancialmente distinto y es lo que sucede con el PP desde la llegada de Aznar.

En una conversación en la Cadena Ser en 2004 entre Felipe González y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón ("padre" de la Constitución y candidato a presidente de AP en 1987, derrotado por Hernández Mancha)[20], el expresidente del Gobierno cuenta una conversación que tuvo con Herrero de Miñón nada más ganar las elecciones Aznar:

Bueno pues [Herrero de Miñón] me dijo una cosa que no creí, o que me resistía a creer a pesar de lo que había llovido en los tres años anteriores. Me dijo, estábamos sentados charlando, y me dijo: "No sabes cómo son este grupo de señores que ha llegado al poder. Tú

crees que sabes cómo son, pero no sabes cómo son, lo comprobarás cuando pase el tiempo", y me parecía una exageración, y pasó el tiempo, y lo que antes estaba contando cuando me pregunta sobre mis preocupaciones de fondo, pues llevaba razón y lo vio mucho antes que yo, que seguramente tenía el sentimiento de haber soportado mucho más la presión que Miguel, cosa que no estoy seguro de que la presión que yo soportara fuera mayor que la que él soportó dentro del grupo, pero entonces me dijo: "No sabes cómo son, no lo puedes imaginar, ahora, ya lo verás".

Herrero de Miñón confirma la conversación y añade:

Sí, sí, deshacer es mucho más fácil que hacer. Hombre, yo creo que estamos todavía a tiempo, y ojalá, cualquiera que sea el resultado de las elecciones, se consiga restaurar el clima de respeto mutuo y de cordialidad recíproca que presidió la Transición y que siguió en las legislaturas posteriores a la Transición hasta muy recientemente, hacia 1989 [año en que Aznar accede a la presidencia del PP] se rompió ese clima. Bueno, pues eso que en España era un hito en nuestra historia debería restaurarse.

Hoy es obvio que el PP de Aznar ha usado el llamado constitucionalismo, la Transición y el 78 como identidad propia. Pero aquella conversación ilustra perfectamente las dos visiones de la Transición: la de los noventa (una Transición que acepta a los distintos si se integran, es decir, si aparcan los elementos sustantivos que los hacen distintos) y la de los dos mil (una Transición que convierte a los distintos en enemigos de España y de la democracia). "Eso que era un hito en nuestra historia debería restaurarse".

El PP, nacido en 1989, nunca se comporta con la lógica de Estado capitaneada por el rey Juan Carlos I y plasmada por ese primer relato de la Transición. Desde la llegada de Aznar a la presidencia, esta es una seña de identidad crucial para entender la política

española. Si al PP le interesaba poner sobre la mesa las raíces estatales del terrorismo de Estado o denunciar las violaciones de derechos cometidas por los servicios de inteligencia, lo hacía; como si posteriormente le interesaba mentir sobre el 11M; o si calculaba ventajoso plantar cara a una negociación del Gobierno con ETA que pudiera hacer al PSOE artífice de la paz; o si, para exprimir electoralmente el anticatalanismo, avivaba un monumental incendio territorial en España (¿alguien se imagina lo que nos habríamos ahorrado todos si el PP, ya con Rajoy, no hubiera recurrido al Tribunal Constitucional el Estatut de Catalunya de 2006?). La crisis de la COVID-19 ha sido respondida por el PP de Casado (el de la vuelta a las esencias) con un ataque desmesurado contra el Gobierno en cualquiera de sus pasos, criticando a la vez que no prohibiera la manifestación del 8 de marzo y que el estado de alarma restringiera libertades y atacando los acuerdos europeos de los que al mismo tiempo se declaraba artífice.

Lo que caracterizó a los hombres que protagonizaron la Transición es la absoluta conciencia de que con los elementos centrales del poder político y económico del 78 no se jugaba; lo que caracteriza al PP desde su (re)fundación en 1989 es que se puede jugar con lo que sea si ello conviene a sus intereses.

González, Pujol… Los hombres de Estado

En esto el PP de Aznar está en las antípodas del PSOE de Felipe González, de Almunia, de Zapatero, de Rubalcaba, de Pedro Sánchez… Contó Rubalcaba en su última entrevista, para el pódcast sobre el rey Juan Carlos I XRey[21] que, cuando supo que este iba a ejecutar la decisión de abdicar, pospuso su dimisión al frente del PSOE para poder conducir al partido al apoyo a la ley que se tenía que aprobar sin dejarse llevar por veleidades republicanas. En el siguiente momento crítico, la salida de Juan Carlos I de España en agosto de 2020, Pedro Sánchez y su vicepresidenta Carmen Calvo se pusieron al frente del sentido de Estado, esto es, de la puesta del Estado al servicio de la monarquía, ocultando incluso a su vicepresidente segundo y socio de gobierno Pablo Iglesias las negociaciones de un asunto de tal envergadura. Con todo, la discusión se zanjó con unas cuantas declaraciones en prensa sin elevarse a mayores. Por su parte, las Juventudes Socialistas sacaron su ritual de republicanismo desmarcándose de la obediencia monárquica de sus mayores, pero más allá de la escenografía en los márgenes, la izquierda se ponía al servicio de la operación de régimen.

Frente a esa lógica de régimen que siempre acompaña al PSOE, el PP de Aznar puso en jaque en los años noventa algunos de los cimientos de la Transición. Paradójicamente, esto lo hizo al mismo tiempo que se instauraba el mito de la Transición como religión pública, mito del que el aznarismo beberá copiosamente como parte de la necesidad de la fundamentación histórica de un modelo de España.

Si los hombres de la Transición se permitían estridencias retóricas pero no políticas, Aznar se permitía estas estridencias políticas dentro de un marco retórico mucho más moderado. Recordemos que el leitmotiv del PP en la oposición a Felipe González fue el “giro al centro”.

Es fácil ver la diferencia que supone entre ambos al comprobar cómo se afronta la corrupción. Hasta la aparición del PP de Aznar, la corrupción era algo de lo que no había que hablar. Existía, se conocía y se tapaba. La propia (obviamente) y la de los adversarios. Que Jordi Pujol no era exactamente pulcro con el dinero ajeno se sabía al menos desde el caso Banca Catalana: en 1984 la Fiscalía General del Estado, a cuyo cargo estaba Carlos Jiménez Villarejo, incluyó a Jordi Pujol en la querella. La Audiencia de Barcelona decidió no juzgarlo; el caso Banca Catalana quedó en nada. Sin embargo, en tanto en cuanto el nacionalismo catalán se mantuvo dentro de las normas de juego, el peor pecado que se le achacaba públicamente a Pujol era que hablara catalán o que de vez en cuando hiciera alguna proclama nacionalista mucho más lejos de lo que pretendía conseguir realmente. Por su parte, el propio Jordi Pujol construyó una versión del seny catalán consistente en afear cualquier denuncia de la corrupción.

En la época de la crispación se hablaba del oasis catalán: un clima envidiable en el que no había crispación sino buenas formas, saber estar, mutuo respeto… El oasis catalán en realidad era el mantenimiento de un pacto de silencio, la peor forma de entender un consenso, más cercana al pacto de familias mafiosas que permite una supuesta paz que a una democracia sana. No era consenso; no era seny. Era omertà.

En una democracia normal, las políticas del PSOE y lo que se iba descubriendo generarían crispación, lo mismo que sucedería con el PP de Aznar diez años después y con el de Rajoy al cabo de dos décadas. Entre el consenso y la crispación, lo propio de la democracia es la segunda.

Lo peor del aznarismo no era la crispación sino el cinismo, aunque había razones para esta: Felipe González y su Gobierno habían dado motivos de sobra para una oposición tajante. La corrupción es un buen instrumento para explicarlo: el Aznar que denunciaba la corrupción del felipismo fue el mismo que logró que los jueces taparan la corrupción del PP inventándose una “doctrina Naseiro” que permitió invalidar pruebas y por tanto evitar un juicio, pero no logró desmentir lo que evidentemente era verdad; el Aznar que denunciaba la corrupción fue el que presidió el partido y el

Gobierno más corrupto que hemos conocido los españoles: el PP de Gurtel y Bárcenas.

Cánovas + Azaña = Aznar 1.0

La aparición del mito de la Transición era funcional al proyecto político de Aznar y compatible con su puesta en riesgo de algunos pilares del edificio institucional porque esa mistificación de la Transición aún podía no ser conservadora sino todo lo contrario. Hasta Aznar, el resultado de la Transición no se mitificaba, sino el proceso de cambio, un cambio que se podía repetir. La Transición era tan maravillosa que el proyecto de Aznar cuando estaba en la oposición consistía no tanto en mantener su obra como en repetir su itinerario: Felipe González había podrido tanto el Estado que lo que tocaba era un proyecto más regeneracionista que ideológico. De ahí el título del libro de Aznar, La segunda transición, con el que pretendía explicar su proyecto de gobierno.

En 1996 Aznar ganó las elecciones, pero sin mayoría absoluta, por lo que necesitó gobernar de la mano del PNV de Arzalluz y la CiU de Jordi Pujol. Pese a estar en el Gobierno, seguía teniendo una posición débil. Quizás por eso perseveró en la que fue su práctica desde que llegó al poder: una retórica expresamente centrista que le permitiera situar al PP como un partido parecido a la España real.

Desde el Gobierno lanzó una inteligentísima ofensiva para arrimar el ascua de la historia de España a su sardina política.

Además, Aznar se declaró admirador de personajes como Manuel Azaña e incluso presentó la edición de sus Diarios (1932-1933) con una encendida defensa del presidente de la II República:

Si de algo no se puede dudar es de su empeño en lograr lo que él llamó “un régimen español y decente”, poniendo en ello todas las fuerzas a su alcance con las maneras hurañas que le hicieron proverbialmente temido. […] Azaña quería modernizar el país, tenía prisa por que los españoles aprendieran a conducirse en el

marco de una democracia a la altura de los tiempos […] Estamos, pues, ante el testimonio de un político extraordinariamente bien dotado para el análisis y bien pertrechado de ideales que, si alguna vez resultaron polémicos, hoy son ampliamente compartidos por una mayoría sólida de la sociedad española, y en esto precisamente reside la más importante de nuestras ventajas[22].

Lo más interesante del discurso de Aznar sobre Azaña es que claramente pretende definirse a sí mismo desde la descripción de quien fue presidente de la II República. Resulta difícil pensar que cuando Aznar habla de "las maneras hurañas que le hicieron proverbialmente temido" se refiera a Azaña y no a sí mismo. Pero en general Aznar sitúa a Azaña como un hombre que pensaba por sí mismo, que quiso generar puentes de comunicación entre distintos para construir en España una democracia moderna e ilustrada, para quien la denuncia del escándalo no erosiona las instituciones, sino que las fortalece… Un regenerador… como él.

No solo fue Azaña. Hubo también un claro intento de situar la Restauración como época irreprochablemente democrática, lo que permitiría desdibujar la II República situando la democracia como una normalidad en la historia reciente de España: de 1876 a finales del siglo XX, la breve dictadura de Primo de Rivera habría sido una "dictablanda" (con el beneplácito, además, del PSOE y UGT) y el franquismo habría resultado del fracaso del "mensaje de paz, piedad y perdón". La figura de Cánovas como demócrata, moderado y con sentido de Estado emerge en esa época también con el protagonismo de Aznar[23].

Además, la FAES escribía la historia de España situando en ella a distintos aznares: Aznar era Cánovas, Aznar era Azaña… incluso, claro, Aznar fue el Cid[24]. Por supuesto, la Transición acabó siendo también Aznar. En general, la FAES introduce en aquellos años una colección de grandes hombres (todos hombres, de nuevo) de la historia reciente de España con la publicación de biografías de políticos españoles, para lo cual contrató a una serie de historiadores, periodistas y distintos perfiles para fomentar una construcción ideológica de España:

La Fundación busca, además, que estas biografías sirvan para reconstruir el hilo del discurso y la acción política de destacados liberal-conservadores españoles, mostrando a través del relato de sus vidas la existencia de una línea de continuidad en la defensa de la libertad y el progreso. Asimismo, quiere contribuir a una forma de plantear la historia política de la España contemporánea sensata y plural, alejada de todo sectarismo y estrechez de miras y que desmonta o matiza importantes tópicos del relato progresista[25].

El complejo de inferioridad moral

de la derecha

Aznar pronto cambiaría de discurso, pero no de práctica: cambiará el tipo de historia de España que quiere contar, pero mantendrá la idea de que un proyecto político necesita popularizar una impresión de la historia de España que lo favorezca. En la oposición (hasta 1996) le venía bien el mito de la Transición como reclamo de una nueva época de sustitución de un régimen personalista y políticamente degenerado (en este caso el felipismo) por un proyecto vagamente regeneracionista; en el Gobierno, con mayoría relativa (1996-2000), le era más útil la Transición como ejemplo de la moderación y la necesidad de entenderse entre diferentes (justificando así ante la derecha española el Gobierno acordado con Pujol y Arzalluz). Pero desde la mayoría absoluta del 2000 se construye el relato como una jaula conservadora y nacionalista complementada por dos elementos de propaganda importantísimos: una versión sui generis del patriotismo constitucional de Habermas y Dolf Sternberger junto con un impulso de lo que vino en llamarse el revisionismo histórico.

Años después, Pablo Iglesias hablaba del "candado del 78" en su primer discurso como secretario general de Podemos (2014)[26]: en realidad, la imagen de la Transición como un candado recoge la imagen de régimen que Aznar logró consolidar a partir del año 2000. Esa apropiación de Aznar del mito de la Transición portaba la semilla de su fin.

La idea de Aznar era inteligente y se puede resumir en conquistar para la derecha la superioridad moral que en España tiene la izquierda. Aznar (o el equipo que lo asesorara, tanto da) y la FAES establecieron como prioridad la popularización de su relato de España para que la derecha pudiera ganar elecciones de una manera más o menos estable en España. Cuando el PP consiguió gobernar

en 1996 lo hizo tras 14 años de gobiernos del PSOE de los 18 años de periodo constitucional; pese a la crisis económica de comienzos de los noventa y la sucesión de escándalos de corrupción, el PSOE volvió a ganar las elecciones en 1993 y tres años después, en plena descomposición de la imagen de los gobiernos de Felipe González, con un ministro de Interior juzgado por secuestrar a un ciudadano, con casos de corrupción ligados a las más altas instancias políticas de la Guardia Civil, el Banco de España, el BOE… Aznar había obtenido una pírrica victoria en 1996. Eso les demostraba que la victoria del PP era, en el fondo, una anomalía, una disfunción de un sistema político (el felipismo).

Desde la oposición Aznar asumió que "España era de izquierdas" y que por tanto su victoria electoral pasaba por simular que su PP no era de derechas. Desde el Gobierno, Aznar decidió que podía cambiar España, que se podía dar un viraje histórico a la idea que él asumía que dominaba en España. En la oposición, el PP debía girar al centro para parecerse a España; en el Gobierno, España debía girar a la derecha para parecerse al PP.

¿Por qué la izquierda era dominante en la idea de España? Para la derecha española de raíz aznarista ha sido una obsesión constante la superioridad moral de la izquierda que conllevaba, por ejemplo, la práctica inexistencia de intelectuales, artistas, etc., que se identificaran con la derecha, mientras que la izquierda contaba con prácticamente todos ellos.

El Cid + Francisco Franco = Aznar 2.0

Aznar entendió que en España se asociaba izquierda a democracia y derecha a dictadura. Por lo tanto, en democracia lo natural era que gobernara la izquierda y solo una situación absolutamente excepcional (como la concatenación de fracasos y delitos del PSOE de Felipe González en su ocaso) podía llevar a la derecha española a ganar unas elecciones. El muro de la cultura política de los españoles era de una solidez tal que, por mucho empeño mediático, político y hasta judicial que se coordinase, incluso con la notable colaboración del Gobierno del PSOE, era dificilísimo obtener una victoria electoral.

Entendieron muy bien que para lograr invertir esa cultura política popular era imprescindible fundamentar históricamente qué gobiernos son naturales y cuáles son excepcionales. Este es un aspecto esencial de todo proyecto político para un país. Diagnosticaron la necesidad de instaurar un relato de España en el que pudieran patrimonializar la democracia. Para ello era imprescindible rebatir el pecado original que arrastraba el PP. Aznar interpretó, probablemente con razón, que había un sentido común de país que interpretaba nuestra historia política a partir de la II República, la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Y que pese a la ausencia de políticas públicas de memoria histórica existía en la sociedad española una conciencia difusa según la cual el origen de nuestra izquierda sería democrático (la República y la lucha antifranquista) mientras el de nuestra derecha estaría ligado a la dictadura franquista. A ello contribuían los avances en las investigaciones historiográficas académicas sobre todos estos periodos históricos.

Aznar podría haber afrontado ese problema tratando de desligar al PP del franquismo, haber reivindicado de alguna forma raíces democráticas. En parte es lo que había intentado reivindicando a Azaña, desterrando el nombre de Alianza Popular, el partido

fundado por ministros franquistas, con su famoso “giro al centro” o incluso el voto del PP a favor de la condena del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 en noviembre de 2002.

Por las razones que fueran, Aznar dio un viraje y decidió que la batalla de las ideas había que darla de otra forma: en vez de buscar orígenes democráticos para la derecha española, buscó socavar los orígenes democráticos de la izquierda. Ahí empezó el monumental intento propagandístico que se vino a llamar revisionismo histórico[27], en el que adquirieron protagonismo inusitado (como historiadores) un grupo de desconocidos a los que generosamente podríamos reconocer como aficionados a la historia (los Pío Moa, César Vidal… hoy caídos en el olvido) y la recuperación del historiador oficial del franquismo, Ricardo de la Cierva.

En febrero de 2003, el Telediario 2 de TVE, presentado por Alfredo Urdaci y Letizia Ortiz, cerró anunciando la entrevista que inmediatamente realizaría el periodista Carlos Dávila. Se trataba de una entrevista a Pío Moa para que hablara de un libro firmado por él y titulado Los mitos de la Guerra Civil. Un autor desconocido obtenía un espacio de publicidad en prime time anunciado desde el mismo telediario para un libro que resucitaba la propaganda histórica del franquismo.

Por si faltaba apoyo, ese mismo verano Aznar, presidente del Gobierno de España, le daba un empujón publicitario. No se sabe por qué —quizás porque además de complejo de inferioridad moral lo tenía de inferioridad intelectual— Aznar comunicaba todos los veranos qué libros se llevaba de vacaciones. Aquel verano se informó de que

Aznar se ha llevado a la isla [Menorca] seis libros de poesía y otros tantos de narrativa y ensayo. Entre los primeros, No olvides mi rostro, del poeta Diego Valverde, muy indicado para alguien, como Aznar, a quien hoy por hoy le espera un futuro aún sin definir. En sus paseos por el mar, a los que piensa dedicar la mayor parte de su descanso, el presidente leerá también Los mitos de la Guerra Civil del exgrapo Pío Moa[28].

El llamado revisionismo histórico era, pues, una operación impulsada desde la Moncloa. Las tesis del revisionismo se resumían en dos: que la Guerra Civil la empezó la izquierda en 1934 y que la dictadura de Francisco Franco puso los cimientos para que fuera posible la Transición.

La Transición dejaba de ser un encuentro entre demócratas (escondidos en una segunda línea del franquismo unos y en la oposición otros) para ser un pacto del que ninguno de sus firmantes venía de la democracia; incluso el relato incluía que Franco habría planificado la transición a la democracia como mínimo construyendo sus condiciones materiales. En realidad, esta construcción posfranquista venía a coincidir con las críticas más simplonas de la izquierda a la Transición que la despachaban como una especie de cambio de disfraz de la dictadura franquista.

España es Aznar. La democracia es Aznar.

La Transición es Aznar

Hay varios elementos clave, no solo para entender la deriva del mito de la Transición sino también para entender la inteligencia del aznarismo en el uso de la historia. La FAES no fue un juguete de Aznar: fue (¿es?) un potente laboratorio ideológico y sobre todo cultural con un objetivo claro: modificar la idea de España desde unas élites políticas, periodísticas y culturales para que calasen en la sociedad española. Aznar emprende una lucha por el relato porque sabe que solo así podrá conseguir éxitos políticos duraderos. Reconozcamos que a veces la derecha española da lecciones de humildad a la izquierda marxista, que cita a sus autores con mucho más entusiasmo que aprendizaje.

Desde la FAES se interpretó la necesidad de construir una nueva legitimidad democrática en España, tanto histórica como ideológica, que modificará de forma importante el mito de la Transición tal y como se había construido en los años noventa.

La derecha española partía con la desventaja de que la historia reciente, la historia de la democracia en España, se asociaba lógicamente a la II República y sobre todo a la oposición antifranquista. Eso no quiere decir en ningún caso que los españoles quisieran volver a 1931: es posible que muchos de ellos asumieran que la democracia en España es muy difícil, que suele fracasar y que los fracasos traen consecuencias dramáticas, pero eso no contradice el hecho de que la II República fuera una democracia. Eso ayudaba al mito de la Transición de los noventa, puesto que la democracia del 78, tuviera la calidad que tuviera, era duradera. Y el consenso nos vacunaba contra los conflictos que tan mal habíamos gestionado en nuestra historia.

Frente a este relato, hemos visto que Aznar y la FAES pusieron

sobre la mesa otro con dos líneas. La primera es el revisionismo sobre la II República (y de forma derivada sobre la Guerra Civil y la dictadura franquista) que la rebaja a periodo convulso y a un régimen colapsado por culpa de una izquierda golpista y totalitaria. Y la segunda fue la construcción de un relato sobre otros periodos democráticos en los siglos XIX y XX (fundamentalmente la Restauración y en ella el conservador, moderado, tolerante y estadista Cánovas, casi como modelo de Aznar) y el rescate de esas figuras "liberal-conservadoras" (todo un oxímoron, especialmente si hablamos del siglo XIX) que conformarían una tradición de la que la derecha española podría, por fin, presumir sin problemas.

La construcción de una historia de España favorable a la derecha contaba en cambio con un potente viento de cola. La visión ideológicamente dominante es una idea reaccionaria en la que los episodios y personajes emancipadores son una anomalía histórica. Parece haber un hilo que va de la llamada Reconquista (don Pelayo, la Virgen de Covadonga y el Cid) como una guerra religiosa entre españoles (cristianos) e invasores (musulmanes), Isabel la Católica, la España imperial de Felipe II y la España "una, grande y libre" del franquismo… En esa historia de España encaja bien la derecha aznarista y resulta anómalo un gobierno de izquierdas del mismo modo que cada una de las repúblicas distorsiona el rumbo natural de la historia de España; por eso son como un virus al que responde el cuerpo (nacional) con anticuerpos. En esto no puso ningún empeño la FAES porque era completamente innecesario: no olvidemos que si 1992 era el año de la nueva España que miraba al futuro, lo hacía precisamente por ser el año del V Centenario de la llegada de Cristóbal Colón a América, en 1492, año del descubrimiento de América, de la toma de Granada y, en definitiva, el año de la imagen imperial de la historia de España por antonomasia.

¡Patriotismo 'constitucional'!

Además de la construcción histórica, la FAES emprendió una construcción ideológica usando la idea de patriotismo constitucional y retorciéndola hasta hacerla sinónimo de "nacionalismo español". Frente a la idea republicana de Sternberger y Habermas, la FAES dice "patriotismo" y así evita "nacionalismo" y "constitucional" para legitimarse sobre la Transición. La FAES dio en el centro de la diana al intentar construir sobre la historia de España y ese patriotismo constitucional la legitimidad exclusiva de un proyecto nacionalista y conservador, y su éxito debería ayudar a pensar en cómo se podría construir la legitimidad de un proyecto político emancipador para España.

Por resumir, el patriotismo constitucional surge en Alemania y lo elaboran pensadores como Sternberger y Habermas: han aprendido de los horrores de la dictadura y construyen desde la memoria democrática una idea de país que no se ancla en una idea primordialista de nación sino en el pensamiento republicano: reivindican la patria como la construcción de derechos políticos y sociales, de libertades cívicas, a partir de la participación democrática de los ciudadanos y la promoción del bien común. La Constitución es la soberanía popular y los derechos humanos. El patriotismo constitucional no es el patriotismo de una patria-nación concreta ni de un texto constitucional positivo sacralizado. El patriotismo constitucional es el patriotismo de la soberanía popular, de los derechos humanos y de la memoria democrática frente a los horrores del fascismo.

Nada que ver con lo que elaboró la FAES y el PP y que ayudó a modificar la idea que se consolidó de la Transición y la Constitución del 78 convertida en un martillo de herejes. Por eso conviene examinar someramente a qué llamaron "patriotismo constitucional" para así entender qué ideas querían (y en buena medida lograron) imponer sobre la patria (España) y sobre la constitución (la

Constitución del 78).

Este concepto fue la idea fuerza del documento estrella del XIV Congreso del PP en enero de 2002, El patriotismo constitucional del siglo XXI. En noviembre de 2001, la FAES (todavía un embrión del proyecto de macro fundación de elaboración ideológica diseñado por Aznar) celebró unas mesas redondas en San Sebastián y Madrid al respecto. La crónica de El País refleja bien el objetivo:

Algunos de los invitados, que en principio creyeron acudir a un debate sobre el concepto del patriotismo constitucional, salieron defraudados ante la estrategia interna del PP, con una auténtica inflación de asesores y exasesores de la Moncloa del entorno de Carlos Aragonés, el jefe de Gabinete de José María Aznar y al que se achaca la decisión de poner ese título a una de las ponencias ideológicas del cónclave popular. Nada de grandes disquisiciones semánticas o filosóficas sobre la idea, parida en 1989 por el filósofo socialdemócrata alemán Jürgen Habermas.

La visión de los ideólogos del PP sobre el patriotismo constitucional es utilitaria. Instrumental. […] Lo importante, como reconocieron varios de los participantes, es "afianzar el patriotismo constitucional como un instrumento más en la relación entre el PP y el PSOE, los partidos constitucionalistas, en contraposición al PNV, especialmente en el País Vasco". La situación le podría valer al PP también para contraponer las tesis nacionalistas de CiU en Cataluña[29].

Es decir, el patriotismo constitucional es el instrumento del PP para definir los límites del juego con unas reglas que él mismo diseña, pero que admiten de entrada al PSOE y sirven para decirle (de momento) a los nacionalistas vascos y catalanes que o admiten esas reglas o están fuera del juego. En ese momento se empieza a hablar de partidos constitucionalistas, como sinónimo a efectos prácticos de demócratas, y que son exclusivamente los que acepten moverse políticamente en los parámetros delimitados por el PP y aceptados por el PSOE.

El documento del Congreso del PP ofrece los salmos de lo que sería el nacionalismo español (aunque convenientemente se aclara que la propuesta no es nacionalista, es crítica, racional…):

Nosotros creemos que España es un gran país, una nación constituida a lo largo de los siglos, y que en su dilatada historia tiene un acervo y un lugar indudable en el mundo. Una nación plural con una identidad no étnica, sino política, histórica y cultural, surgida de su aportación a la historia y la cultura universales, de su propia pluralidad constitutiva y de su proyecto histórico enraizado en dos mundos, el europeo y el americano.

La voluntad de mirar el futuro, de respetar lo propio y compartir lo común han hecho posible la España constitucional, la España de nuestro tiempo. Por esto, queremos afirmar que la Constitución es un marco de soluciones, un marco para la España de hoy y de mañana, un marco para el crecimiento y la prosperidad.

Como ya se ha dicho, fue la sociedad española quien, en una transición democrática que hoy se entiende como modélica, supo encontrar el cauce para resolver nuestros problemas, nuestros conflictos históricos. Hoy podemos afirmar que España ha dejado de ser un problema. Evidentemente, tenemos problemas, pero hoy España es una magnífica oportunidad para todos sus ciudadanos, para poderlos afrontar y superar. Hoy España es un país dinámico, en el que todos podemos realizar nuestros proyectos vitales, en el que no hay que renunciar a las ideas propias, en el que hemos asumido con naturalidad que la pluralidad es uno de los elementos enriquecedores de la España moderna.

Sin embargo, a pesar de que los españoles construimos en la transición uno de los sistemas políticos más descentralizados del mundo —con un amplísimo ejercicio del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones—, que pretendía dar fin al problema irresuelto y, además, agravado por el franquismo, de la pluralidad de España, lo cierto es que tras veinticinco años de democracia hay corrientes nacionalistas que cuestionan, de modo implícito o explícito, el marco político derivado de la Constitución y los Estatutos, e incluso algunas corrientes del nacionalismo vasco han

llegado a poner en entredicho las propias instituciones democráticas que gobiernan ininterrumpidamente desde la Transición.

Hoy, en una España moderna y en un país que se enriquece en su pluralidad, que la cuida y la protege, el nacionalismo excluyente, el que exalta la diferencia y pone la identidad por encima de la libertad —es decir, el nacionalismo no constitucional—, no tiene sentido. Y no lo tiene porque hoy, afortunadamente, vivimos en un país libre, abierto, plural y democrático. Porque entre todos, en el marco de la Constitución, estamos contribuyendo al país que todos queremos: con pasión por la libertad común, por nuestros derechos e instituciones cívicas, por lo que nos une. Si existe libertad, y si existe respeto a nuestro sentimiento de identidad, solo se excluye aquel que se quiere excluir[30].

El candado

Lo llamativo es que en la actualidad el discurso sobre la Transición que aprueba el PP en 2002 es mucho más reconocible que el discurso sobre los acontecimientos de la etapa de transición que analizaba El País en 1981 tras el 23F. Porque la Transición de la que hablamos no es la que sucedió en aquellos años, sino la que inventó Aznar a partir del relato de Victoria Prego.

Salvo en política internacional, Aznar consiguió en su segunda legislatura consolidar el imaginario de la Transición que él quería. No es un patriotismo republicano como el de Habermas, un patriotismo de las instituciones y valores democráticos. Es un patriotismo de la España del 78 definida por dos valores: unidad de España y monarquía. Quien sea tibio con alguno de los dos no es constitucionalista. El resto de la Constitución de 1978 es atrezo, da exactamente igual.

De la mano de este patriotismo constitucional nace la idea de que hay unos partidos constitucionalistas que son los demócratas, los respetables. Contra el resto de partidos vale el juego sucio, la manipulación periodística, el ataque sin límite. Esos partidos constitucionalistas fueron el PP, Unión Progreso y Democracia (UPyD), Ciudadanos y el PSOE cuando no ha tenido devaneos con los no constitucionalistas: durante la primera legislatura de Zapatero se pudo acusar al PSOE de cómplice de ETA, autor del 11M y dinamitador de la unidad de España, es decir, de no constitucionalista; cuando el PSOE de Pedro Sánchez gana una moción de censura y después (dos veces) las elecciones, de nuevo no es constitucionalista… a diferencia, por ejemplo, de Vox, que como defiende visceralmente la monarquía y la unidad de España sí es constitucionalista. Quedan fuera los partidos nacionalistas centrífugos salvo cuando apoyan a Gobiernos del PP: Coalición Canaria ha mantenido en las islas la práctica política de aquel “pujolismo” que tanto gustaba (enfangada en su corrupción, sin

incordiar con la corrupción ajena a cambio de que nadie incordie en la suya), así que es un partido constitucionalista; el PNV entra y sale del constitucionalismo; Duran i Lleida era constitucionalista y Miquel Roca representaba el constitucionalismo hasta tal punto que llegó a actuar (en el sentido más teatral del término) de abogado de la hija del anterior rey de España y hermana del actual. Izquierda Unida y Podemos desde su nacimiento quedan fuera del constitucionalismo por su lejanía con los postulados diseñados desde esos primeros años del siglo XXI como aceptables. Sin embargo, el férreo secretario general del PCE, Francisco Frutos, fue despedido como constitucionalista por su encendida intervención en un acto contra el independentismo catalán en 2017[31].

El régimen del 78 pasa a ser algo muy parecido al régimen del PP. Son constitucionalistas (demócratas) quienes se muevan en unos postulados políticos estrechos. El giro logrado por el aznarismo es un arma de doble filo. La introducción de la categoría constitucionalista como sinónimo de demócrata y respetable y su capacidad para decidir qué es constitucionalista y qué no, es una grandísima jugada de partido. En cambio, situar a tantas personas fuera de la Constitución, es decir, fuera de la Transición, hace que la Transición y la Constitución del 78 renuncien a su capacidad de integrar al discrepante. Dejan de ser presentadas como universales, donde todo el mundo cabe. La Transición es mucho más eficaz cuando es de todos. Nadie habría entendido la apelación de Pablo Iglesias al “candado del 78” si la hubiera hecho quince años antes. En 2014 la entendió todo el mundo, la compartiera o no.

Autoritarismo 'liberal'

El giro aznarista se dio, además, en un contexto internacional marcado por la respuesta de George W. Bush al 11S. La excusa de la lucha contra el terrorismo permite un recorte de libertades en todo el mundo en nombre de la seguridad y de la defensa de la democracia. En España, eso se traduce en un recorte formal de libertades políticas en nombre de la lucha contra ETA inédito desde 1978 y que ayuda a transformar el carácter del régimen: lo inadmisible políticamente pasa, además, a ser ilegal. Se cierran periódicos (Egunkaria y Egin), se ilegalizan partidos, se introduce la doctrina Parot para ampliar retroactivamente las penas a cumplir, se encarcela a dirigentes políticos, periodistas, y se emprende una ingente ampliación de lo que se entiende como apología del terrorismo, humillación a las víctimas del terrorismo… hasta lograr que se multipliquen las condenas por enaltecimiento del terrorismo una vez acabada la violencia de ETA[32].

ETA no era ni mucho menos más criminal en 2001 que en los años de la Transición. Lo que cambió no fue ETA (en todo caso mucho más débil en este comienzo del siglo XXI), sino que hubo un recorte de libertades objetivo. Antes del 11S no era aceptable restringir las libertades políticas así en nombre de la seguridad y la lucha contra el terrorismo; después del 11S, cuestionar esos recortes democráticos era poco menos que complicidad con los terroristas.

El giro autoritario no era solo una política del PP de Aznar ni del Ministerio de Interior de Mayor Oreja; era una política de Estado y la aplicaban de la mano PP y PSOE con el aparato judicial, especialmente la Audiencia Nacional y en ella Baltasar Garzón y Fernando Grande-Marlaska. Se construyó una teoría del entorno según la cual ETA no era solo ETA, sino que era ETA y su entorno, lo cual se convertía en una bola de nieve: el entorno del entorno de ETA también era ETA y así ad infinitum. Se daba la paradoja de que cuanto más débil estaba ETA, más grande era, según la doctrina de

Estado. Diversos dirigentes políticos han llegado a acusar de cómplices con el terrorismo de ETA a la PAH, a Manuela Carmena, a Puigdemont, a Ada Colau, a todo Podemos, a un juez de la Audiencia Nacional que había condenado al PP por corrupción, a quienes denunciaron la falsificación de títulos universitarios de Pablo Casado y Cristina Cifuentes… Todo lo que no sea PP es susceptible de ser ETA. E incluso parte del PP también es ETA: en el proceso para elegir presidente del PP en julio de 2018, la candidatura de Pablo Casado difundió entre la prensa un comunicado de una asociación llamada Dignidad y Justicia que acusaba a Soraya Sáenz de Santamaría de haber excarcelado a etarras[33]. Un año después, el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, sería premiado por el PP de Pablo Casado e Isabel Díaz-Ayuso con un escaño en la Asamblea de Madrid.

El resultado de estas construcciones es una dicotomía definida por el PP de Aznar (y acatada por el PSOE y por la gran mayoría de los medios "de orden") que coloca en un lado a los constitucionalistas, los hijos políticos de la Transición entendida como nacionalismo monárquico, y que sitúa a todo el que no pertenece a este grupo en el ámbito de la ambigüedad o incluso complicidad con el terrorismo y desde luego fuera de la democracia.

Esto es importantísimo no solo por lo que afecta a la convivencia democrática, sino porque debilita la supervivencia de la cultura de la Transición, de la Transición como esa religión pública que solo se cuestionaba desde los márgenes. El giro aznarista no solo no dificulta que alguien sea crítico con la Transición, sino que expulsa del marco constitucional cada vez a más herejes.

Esto podía ser conveniente para los intereses del PP por cuanto hacía muy costoso no someterse a cualquier cosa que desde el PP y su enorme entorno mediático cultural se dictase como exigencia. Pero para el régimen de la Transición, para el statu quo cultural, político e institucional, era letal porque lo iba condenando a un espacio cada vez más estrecho. Especialmente en el ámbito generacional ha sido suicida para los intereses de régimen como se pudo constatar desde el 15M.

Como lamentaban Felipe González y Herrero de Miñón, el PP demostraba que anteponía los intereses de partido a los intereses de

(un modelo de) Estado. Pero desde 2000 además logra hacerlo desde el aparato del Estado. Esto repercute en todos los elementos de la Transición, pero, como veremos más adelante, en el caso de la monarquía será más grave porque ella misma hará, con Felipe VI, un movimiento similar.

La pax americana no es hispana

Hubo otro factor relevante en la construcción de la nueva España de Aznar-FAES-PP, probablemente el único en el que fracasaron: la situación de España en el mundo.

Del mismo modo que la imagen popular de la historia de España está ligada al hilo nacional-católico (España es la Reconquista y el Imperio), nuestra imagen del siglo XX español achacaba a nuestros gobernantes haber estado de espaldas al mundo, singularmente por la ausencia formal de nuestro Estado en la Primera Guerra Mundial y también en la Segunda (esto último es obviamente matizable pero indiferente a estos efectos). El propio Aznar, en aquella presentación del libro sobre Manuel Azaña, lo mencionaba: "Hay otras dos notas de la situación española de entonces que llaman poderosamente la atención al lector: el aislamiento internacional y la poca importancia que parece tener la economía en el conjunto de cuestiones que conforman la agenda del presidente del Consejo de Ministros. Ahora la situación es, obvio es subrayarlo, muy otra, y eso no puede ser sino para bien".

Romper ese supuesto aislamiento internacional secular de España fue la obsesión que pretendió solucionar Aznar poniendo a España como aliado de excepción de George W. Bush. España estaba en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cuando Bush decidió lanzar la guerra de Irak. La guerra de Bush contaba con una gran oposición exterior, incluida la de países de la OTAN, singularmente Francia. La mayor parte de los gobiernos que se mantenían a las órdenes de Washington preferían hacerlo con la mayor discreción posible porque las opiniones públicas de prácticamente todos los países eran absolutamente hostiles a la operación. Así que aparecer como aliado orgulloso de George W. Bush, de Estados Unidos, del líder mundial… garantizaba ese protagonismo internacional a Aznar. Lo fundamental era que se hablase de España aunque fuera mal o, en palabras de Aznar en el diván de Bertín Osborne, "nunca

he tenido mejor foto que la de las Azores"[34].

Ese fue probablemente el mayor fracaso del aznarismo en el intento de reelaborar el encuadre con el que los españoles miramos la política. De hecho, forma parte indudablemente de lo que expulsó al PP de la Moncloa. En la España de la Transición las guerras suelen ser muy impopulares. Si en otros países permiten cohesionar el país en torno al Gobierno (un ejemplo paradigmático es el uso tanto de Margaret Thatcher como de los militares argentinos de la guerra de las Malvinas), en España suele ser todo lo contrario.

Cabe recordar el multitudinario movimiento de desobediencia civil que fue la insumisión, un movimiento de decenas de miles de personas[35] que no solo incumplían la ley, sino que lo hacían para ser condenadas a duras penas de cárcel. La combinación de antimilitarismo y valentía de los insumisos generó una simpatía popular enorme que llevó a CiUy al PP a incluir la supresión del servicio militar obligatorio en el acuerdo de gobierno que llevó a Aznar a la Moncloa en 1996.

Sin tanta épica, cuando en 1991 Felipe González decidió acompañar a George Bush padre en la guerra del Golfo, las manifestaciones de estudiantes de Madrid y Barcelona fueron tan numerosas que junto con la de Washington fueron usadas por Saddam Hussein para que la televisión iraquí explicara la oposición en el mundo a la nueva guerra que sufriría el pueblo de Irak. Fue la última vez que España usó en una guerra a militares de leva; en el otro lado de la balanza, fue la primera vez que Marta Sánchez emergió como guardiana de las esencias patrias[36]. Volvería en mayo de 2018 para poner letra al himno de España en un acto de Ciudadanos con gran emoción y reconocimiento[37].

Aznar no solo no logró que su protagonismo en la cumbre de las Azores llenara a los españoles de orgullo patriótico, sino que generó una insólita unanimidad popular contra la guerra que él estaba impulsando (y que tan rentable le ha salido, a tenor de la cantidad de negocios y contratos millonarios con los que ha hecho caja en Estados Unidos). El movimiento contra la guerra de Irak fue enorme, incluyendo la que probablemente ha sido la manifestación más masiva contra un Gobierno que ha vivido nuestro país (la del 15 de febrero de 2003 en Madrid es la única de estas características

que sí puede presumir con rigor de alcanzar el millón de manifestantes[38]). Aquel movimiento fue el primero en usar internet en España para la movilización (Nodo50, Rebelión.org e Indymedia permitieron coordinar protestas de un modo que hoy puede parecernos muy precario pero que entonces fue absolutamente novedoso, ya que generó unas redes de confianza que permitieron las manifestaciones del 13 de marzo de 2004 que aún fueron muy importantes en el 15M.

A los efectos que estamos tratando, lo más importante fue la derrota de Aznar en este ámbito: mientras iba colando con cierta facilidad un relato de país que lo viraba hacia la derecha nacionalista, los españoles parecían mantenerse firmes en una especie de ADN probablemente más antibelicista o incluso antimilitarista que pacifista, quién sabe si vinculado a un cierto espíritu ácrata que se viene asociando al carácter español desde hace mucho tiempo.

La generación arrogante

La ruptura generacional que genera la Transición es bilateral. Cualquier encuesta exhibe una frontera política entre los nacidos, más o menos, antes y después de la Constitución. Los más mayores votan al PP o PSOE, los más jóvenes han venido votando a Podemos, opciones territoriales emergentes, Vox o Ciudadanos; como veremos más adelante, los mayores defienden la monarquía, los menores querrían poder decidir en referéndum y albergan hacia ella un intenso rechazo…

En los ámbitos intelectuales, la frontera es especialmente abrupta. Los dirigentes políticos de los años ochenta que siguen públicamente activos nunca se ahorran el desdén contra los jóvenes (que pueden tener los cuarenta años muy cumpliditos); el relato que coloca a aquella generación como la artífice de una epopeya ejemplar para el mundo hace que los Alfonso Guerra, Felipe González, José Bono… sermoneen desde una atalaya que parece percibirse reverencialmente por una generación de periodistas y quizás hasta de ciudadanos, pero con hastío e irritación por jóvenes que no tienen demasiada fe en el relato místico. Se constituyen en auténticos apóstoles de la Transición: no solo nos transmiten la Buena Nueva, es que la vivieron.

Esta prepotencia se extiende a no pocos intelectuales. Así, Fernando Savater nos explicaba que el 15M le servía de "tontómetro" para medir el nivel de estupidez[39], mientras un sesudo análisis electoral de Boadella consistía en que "en España hay 101.557 gilipollas seguros"[40], a saber: los votantes del PACMA.

La lista de políticos, filósofos, periodistas, escritores… en general hombres, que en vez de argumentar las bondades de la Transición llaman imbécil a quien quiera que la cuestione, sería interminable. No es tanto una cuestión de edad sino de un grupo muy definido: el que estuvo en una vanguardia política, cultural y periodística, se encaramó a la Transición, la abrazó, y nos la enseña con un lacito

como si fuera el más maravilloso de los legados que algún día tendremos el privilegio de recibir. Al ver el desdén de los sucesores por el estado de la herencia, miran altivos y explican que quienes no les adulan no tienen ni puta idea.

La conversión de la Transición en una religión hace que sus profetas no sean seres racionales con los que debatir, sino hoscos sacerdotes que transmiten creencias incuestionables. No es que no se pueda criticar lo que se hizo entonces, sino que ni siquiera se puede pensar que aquello tuvo su tiempo y que ahora toca otra cosa. Tan peligrosa es la herejía como la ausencia de fe.

Derrota de la cultura de la Transición, supervivencia del régimen del 78

Frente a ese bloque emerge, sobre todo desde el 15M, una legión de textos críticos con la cultura de la Transición, pues ya ha dejado de funcionar como religión política dominante.

Seguramente hay muchísimas razones para ello: desde el estrechamiento de la Transición que trazó el aznarismo a la crisis de credibilidad del bipartidismo por los recortes en la crisis económica, la corrupción institucional, etc., pasando por la irrupción de los medios digitales, las redes sociales, etc. Es evidente que el PP de la Gürtel y Bárcenas o la Casa Real de Juan Carlos I y Urdangarin tienen muy difícil sostener un relato épico. Y la influencia de los medios de comunicación analógicos ya no es ni de lejos la que fue. Hoy sería absolutamente imposible que una serie como la de Victoria Prego en 1995 tuviera el impacto ni la audiencia que tuvo entonces.

Obviamente, el mito de la Transición tiene efectos y en determinados ámbitos opera eficazmente, aunque casi siempre en plazos muy cortos. Pero es evidente que toda una generación no es que repudie la Transición, es que ignora por completo las implicaciones de su relato, no hace ni caso.

Sin embargo, hay un aspecto llamativo. Parece claro que lo que ha sido derrotado (o al menos neutralizado) es la cultura de la Transición, pero en ningún caso el régimen del 78. Pese a que el mito haya muerto o al menos dejado de ser eficaz, todo el aparato institucional sigue prácticamente intacto, y con ello el reparto del poder material.

Probablemente esto tenga que ver con lo que se viene sosteniendo durante toda esta parte: que la Transición que se discute no es tanto la que se hizo entre 1973 y 1982 sino la que se construyó entre 1995 y 2002. Que la Transición a la que nos oponemos no es tanto

el régimen constitucional de hace cuarenta años como el mito y la cultura política diseñados e impuestos en el cambio de siglo. Quizás por ello el ciclo del 15M ha sido exitoso frente al mito político, pero no frente al aparato institucional.

Uno de los aprendizajes del 15M (que se concretó en la creación y el éxito inicial de Podemos) fue que desdeñar lo institucional es suicida. Millones de españoles renunciaron al cinismo político para aprender que la política había que hacerla o la hacían otros. Y que excluir de la política a la política institucional era un regalo que no se merecen los poderosos.

La apuesta institucional llegó a ser mucho más exitosa de lo que se podía prever en mayo de 2011: no parece posible una vuelta al bipartidismo y los principales ayuntamientos estuvieron gobernados por opciones herederas del 15M entre 2015 y 2019. Sin embargo, es obvio que no ha habido transformaciones institucionales de calado. Ni siquiera la ley electoral, cuya reforma podría llegar a beneficiar a todos los partidos dada la inestabilidad demoscópica, se ha corregido hacia una mayor proporcionalidad. El único cambio institucional relevante fue la reforma del artículo 135 de la Constitución, una victoria de la banca alemana frente al pueblo español.

El intelectual colectivo y la Transición

Hace años, antes del 15M, desde sectores de la izquierda española apostábamos por un proceso constituyente como respuesta al colapso político institucional de España. En el fondo, era el primer nombre que dábamos a lo que de forma difusa hoy llamamos “el cambio”.

Una de las múltiples conversaciones y debates sobre el proceso constituyente fue con un profesor de Derecho que había ayudado en algún proceso internacional exitoso. Nos expuso una propuesta que me pareció extremadamente inteligente por eficaz. Quien quiera un cambio político sustantivo tiene que ofrecer un catálogo de demandas limitado, como mucho una decena de propuestas. Todas deben ser de sentido común e imposibles de rechazar incluso por los defensores del statu quo: medidas contra la corrupción, contra la pobreza, por la democracia, el pluralismo, las libertades… Pero una o como mucho dos de esas medidas debe ser de sentido común pero inasumible por los defensores de dicho statu quo. Esa medida es el fiel de la balanza: hay cambio si se consigue, no lo hay si solo se logran medidas aceptables por el poder vigente.

Volvamos al editorial de El País del 24 de febrero de 1981.

Se suele atribuir a José Luis López Aranguren la definición de El País como “intelectual colectivo de la Transición”: hay decenas de referencias en libros, artículos… La cita proviene de un artículo de Aranguren titulado “El País como empresa e ‘intelectual colectivo’”[41]. En todo el artículo no aparece la palabra “Transición” ni una vez. Aranguren presenta a El País como “intelectual colectivo” (y empresa) del país, no de la Transición. Ha sido después cuando hemos identificado el país (la España actual) como la Transición, y por tanto al intelectual colectivo de la España actual como intelectual colectivo de la Transición. El artículo se publicó tres meses y medio después del 23F (conmemorando el quinto aniversario del periódico) y, más allá de la mención a la

Transición, la repercusión de la definición de Aranguren viene de poner el dedo en una llaga, agradable para unos e incómoda para otros. Lo cierto es que de alguna forma El País ha sido durante mucho tiempo el centro comunicativo del país oficial, de la Transición, si se quiere.

Pues bien, aquel editorial del 24 de febrero de 1981, tan lejano a la mistificación de la Transición, identificaba una serie de elementos positivos y negativos de "los acontecimientos de la etapa de transición". Curiosamente, los valorados de forma negativa por El País han desaparecido en su práctica totalidad. Obviamente las conspiraciones se dan en todos los partidos, pero no en la desaparecida UCD (además de que la alternancia, que no había sucedido en 1981, hace que las conspiraciones en cada partido sean menos dramáticas). Felizmente también han desaparecido las bombas de ETA, pese a que haya quien intente que ETA mantenga protagonismo político a título póstumo. Cabría discutir sobre la democratización de los cuerpos de seguridad y las fuerzas armadas, pero es obvio que cuarenta años después quien hubiera iniciado su trayectoria policial o militar en la dictadura está hoy en la reserva o muerto; que torturadores como Billy el Niño murieran libres y cobrando una pensión incrementada por sus méritos criminales afecta a la dignidad nacional de España, pero afortunadamente no a su seguridad más que como pedagogía para los actuales miembros de los cuerpos de seguridad pública (de hecho, uno de los estigmas de España es la cobertura pública a los policías que maltratan a detenidos).

En cambio, los dos elementos que aquel editorial señala como positivos permanecen vigentes: la Constitución y, especialmente, la monarquía. Si realmente queremos un cambio de régimen (en clave emancipadora, esto es, un cambio para lograr más democracia, más libertades, más derechos políticos y económicos), deberíamos señalar no solo a lo que veinte años después nos contaron que vertebraba la Transición, sino a lo que realmente constituye su clave de bóveda. No porque El País dijera hace cuarenta años que la monarquía es fundamental para la democracia, sino porque en realidad la monarquía en España es fundamental, como discutiremos, para evitar que haya más democracia.

Algunos de los aspectos que hoy protagonizan la memoria del antifranquismo (la represión, homenajes en el callejero o el Valle de los Caídos y, singularmente, los desaparecidos enterrados en fosas comunes y cunetas) no aparecen en el cuestionario. El franquismo aparece como algo lejano, desde cuya desaparición España ha cambiado muchísimo, en general para bien.

En diciembre de 1995 el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) hizo un barómetro en el que incluía preguntas sobre la Guerra Civil, la dictadura de Franco y la Transición[42]. Se realizaba un mes y medio después de terminar la serie de Victoria Prego con ocasión del 20º aniversario de la muerte de Franco. Es el único estudio que ha hecho el CIS de este tipo.

Un 48% creía que "ya se han superado las divisiones y rencores que en el pasado creó la Guerra Civil"; un 63,9% que "en general, la forma de ser y de pensar de la gente tiene muy poco que ver con el pasado"; y un 64,6% que "aunque se han olvidado las divisiones y rencores del pasado, todavía se nota la huella profunda que ha dejado la época de Franco". No hubo opción para que nadie dijera que no creía que se hubieran superado esas "divisiones y rencores", entre otros ejemplos de respuestas posibles que no se ofrecían. Sin embargo, un 49,3% pensaba que en ese momento (en 1995) "la confrontación se está llevando demasiado lejos", frente al 37,9% que creía que "la confrontación entre partidos es lo normal en un sistema democrático".

Sobre la "transición a la democracia", un 78,9% creía que constituía un motivo de orgullo para los españoles (frente al 9,1% que no). Había cierta satisfacción (aunque no entusiasta, solo un 7,8% se declaraba "muy satisfecho") con la Constitución de 1978, en la que no prevalecieron las ideas e intereses de la izquierda ni de la derecha sino "de todos y ninguno en particular" según el 52,6%. Una escueta mayoría (46,1% frente al 32,5%) creía en 1995 que había que reformar la Constitución, pero no hubo ninguna propuesta concreta que alcanzara siquiera el 15% entre las que sugirió el CIS para esa reforma.

En ese barómetro el CIS preguntó por la confianza en varias de las "instituciones fundamentales de nuestro sistema democrático". Con muchísima diferencia, la que más confianza generaba fue la

monarquía. Nunca había generado tanta confianza entre los españoles. Y nunca volvería a generarla.

SEGUNDA PARTE

¿SUEÑA FELIPE VI CON ESPAÑOLES ELÉCTRICOS?

Cuando abrimos un colegio o un hospital estamos diciendo “viva el rey”.

Pablo Casado

El rey de todos los españoles

Hemos visto cómo el relato de la Transición se fue estrechando desde 1995 a los primeros años 2000 hasta facilitar que cada vez más españoles se quedaran fuera de tal relato, que pensaran que la Transición era cosa de otros (otra opción política, otra generación) hasta incluso sentir que era una cosa contra ellos (contra su opción política, contra su generación). Y que ello permitía endurecer el relato frente a los herejes, pero ampliaba progresivamente la cantidad de herejes.

Si eso sucede con un relato político discutible, con la monarquía la cosa es aún más difícil. A falta de legitimidad democrática, la legitimidad política de la monarquía descansa en el consenso, necesariamente. No solo en un país como España en el que el consenso aparece sacralizado frente a la resolución democrática de la divergencia, sino que cualquier monarquía parlamentaria necesita que la infinita mayoría de sus ciudadanos asuma la monarquía como una institución propia, casi como una parte (hermosa) del paisaje. El rey o la reina tienen que ser de todos, no basta con que sean de la mayoría: las mayorías se dilucidan votando.

Así pues, un rey no podría permitirse que le sucediera lo que le sucedió a la Transición. La defensa de la monarquía no puede ser un martillo de herejes, la monarquía tiene que ser el paraguas que protege a todos, con las lógicas exclusiones a los márgenes siempre inevitables.

Pese a que siempre hubo (y fuimos) una minoría de republicanos militantes, la monarquía en España consiguió generar esa imagen de paraguas. Siempre ha tenido una posición política, obviamente, pero esta era mucho más eficaz por disfrazarse de neutralidad. El relato de la Transición añadía a la aparente neutralidad la gratitud que debíamos los españoles al rey Juan Carlos I por haber conducido heroicamente al país desde la dictadura a la democracia

y habernos salvado del intento involucionista del 23F.

El barómetro del CIS de diciembre de 1995 sobre la memoria del franquismo, de la Transición, de sus protagonistas… realizado unos meses después de la emisión de La Transición de Victoria Prego constata esa sensación de paraguas de cuya cobertura disfruta todo el país excepto un ínfimo margen.

Fue la que mejor nota ha dado al rey de todas las que han preguntado por el jefe del Estado. En esa encuesta el rey aparecía entre las "figuras políticas, sectores y grupos sociales" como la que más había contribuido en "la transición a la democracia". De 0 a 10 se consideraba que el rey había contribuido en un 8,30, seguido de "los ciudadanos en general" (7,64), los partidos políticos (7,51) y los líderes políticos (7,39).

La encuesta hacía una pregunta que se ha repetido en varios estudios: se preguntaba, de 0 a 10, cuál era el grado de confianza del encuestado en "una serie de instituciones fundamentales en nuestro sistema democrático". La primera de ellas, la monarquía, arrasaba respecto a cualquier otra institución. El 40,4% de los encuestados le otorgaba un 9 o un 10 (las siguientes instituciones a las que se daba una confianza tan absoluta eran "el Ayuntamiento de su pueblo o ciudad" y el Defensor del Pueblo con un 12%). Un 25,2% situaba su confianza en la monarquía en el 7 u 8. En el otro extremo, el 0 y el 1 sumaban un 5,4% (la institución que menos obtenía una desconfianza tan alta) y un 3,3% le daban un 2 o un 3 (también la institución que menos obtenía ese nivel de desconfianza).

De media, la monarquía obtenía en diciembre de 1995 un 7,48 sobre 10. La siguiente institución mejor valorada, el Defensor del Pueblo, obtenía un 5,92. La confianza en la monarquía era absoluta y era independiente de la confianza en el resto de instituciones.

El rey de cada vez menos españoles

En octubre de 2011, por primera vez en la historia de los barómetros del CIS, en esa pregunta la monarquía suspendía[43]: la nota media era un 4,89. Una discreta mayoría aprobaba sin demasiado entusiasmo a la monarquía, pero lo grave para una institución que se pretende de todos, que pretende trascender las diferencias políticas para cohesionar a los españoles, es que era rechazada tajantemente (0 o 1 sobre 10) por el 21,6% de los encuestados (frente al 11,2% de apoyo rotundo, 9 o 10). Este rechazo se producía en todas las franjas de edad por debajo de los 55 años, siendo especialmente acusado entre 35 y 44 años, un 28,6% de los cuales valoraba con un 0 o un 1 sobre 10 su confianza en la monarquía.

La cosa no mejoró en 2012, y en 2013 obtuvo su peor nota. El barómetro de abril de 2013[44] volvía a preguntar por la confianza en la institución. El 31,6% respondía con un 0 o con un 1 frente a un 4,7% que respondía con un 9 o con un 10. La nota media bajaba al 3,68. Es decir, casi uno de cada tres españoles rechazaba rotundamente, con la peor nota posible, la monarquía y el conjunto de los españoles la suspendía con claridad. La nota había bajado algo más de un punto en un año y medio y el rechazo frontal había crecido en un año y medio un 10%, extendiéndose además a todas las edades (incluso a los mayores de 65 años). El suspenso más evidente se encontraba entre los jóvenes de entre 25 y 34 años (un 2,94 sobre 10) seguido de los que tenían entre 18 y 25 años con un 3,27.

El rey suspende, viva el rey

En junio de 2014 Juan Carlos I, rey de España desde hacía 39 años, renunciaba al trono y era coronado su hijo, Felipe VI. El inicio del reinado apenas fue cuestionado. Felipe VI anunció una supuesta modernización de la monarquía y un giro hacia la transparencia. Los medios más cortesanos recuperaron el manto de silencio con el que habían protegido a su padre durante tantos años, con la excepción, quizá, de antiguos monárquicos que habían virado del peloteo más extremo a un resentimiento notable y, en general, por la prensa del corazón, que siempre ha puesto a Letizia Ortiz en el centro de su diana. Se apartaba formalmente de la familia real a Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin (retirándole incluso el ducado de Palma). Todo estaba listo para que la monarquía volviera a las notas de su edad de oro de la Transición.

El CIS de abril de 2015[45] preguntaba (a diferencia de los anteriores) primero por el rey y luego por la monarquía: "A punto de cumplirse un año de su proclamación, ¿cómo valora Ud., positiva o negativamente, la forma en la que realiza su labor el rey Felipe VI?", preguntaba el CIS. Algo más de la mitad (57,4%) valoraba positivamente la labor que se supone que habría realizado en nueve meses Felipe VI. Mucha menos gente la valoraba negativamente (17,8%), casi la misma que no contestaba ya que, prudentemente, debió considerar muy difícil valorar la labor de un rey en tan breve tiempo.

Lo revelador era que, pese a la valoración tímidamente positiva de su titular, la institución, la monarquía, no conseguía siquiera volver a los resultados de 2011, cuando empezó su declive con su primer suspenso.

Dos décadas después de que el 40% de los españoles situase la confianza en la monarquía entre el 9 y el 10, solo un 8,4% la mantenía. Dos décadas después de que el 0 y el 1 a la monarquía sumaran un 5,4% de españoles, en 2015, con Felipe VI ya en el

trono, ese rotundo rechazo a la monarquía alcanzaba al 25,2%. El vuelco era total.

La monarquía recuperaba un poquito de confianza gracias a la abdicación de Juan Carlos I, pero era insuficiente no ya para aprobar sino siquiera para remontar la época de desgaste: la monarquía se quedaba en el 4,34 sobre 10 de confianza, más de medio punto por debajo de la nota obtenida en 2011. El resultado de aquella pregunta debió de ser tan inquietante que, desde entonces, abril de 2015, el CIS no ha vuelto a repetir esta encuesta, antes tan habitual. Ni con gobiernos del PP, ni del PSOE, ni del PSOE y Unidas Podemos.

¡No hagas preguntas indiscretas!

En julio de 2020 el presidente del CIS, José Félix Tezanos, respondió a una carta de varios medios de comunicación diciendo que iba a intentar "en la próxima encuesta que va a realizar el CIS (en los primeros días de septiembre) incluir algunas preguntas que podrán proporcionarnos información rigurosa y contrastable sobre la manera en que la opinión pública española valora y prioriza o no esta cuestión [la monarquía] en la actualidad"[46]. Fue mentira. No lo hizo. O acaso era verdad que lo "intentó" pero alguna fuerza superior lo impidió.

Sin embargo, en 2018 volvieron a realizarse encuestas para intentar responder a una nueva crisis de la monarquía desatada por las grabaciones a Corinna Larsen que anticipaban la explosión de 2020. Estas encuestas hay que cogerlas con pinzas por varias razones. Es probable que algunas sean más un ejercicio de mera propaganda que de demoscopia real. De entre ellas, cabe señalar que incluso La Razón recogía que la mayoría de los menores de 30 años considera "necesaria" una consulta para elegir entre monarquía y república.

Es casi más reveladora la necesidad de estos medios de publicar estudios sobre la monarquía y el absoluto silencio del CIS desde 2015 que los resultados concretos de tales encuestas. De lo poco que podemos concluir de todo el conjunto de encuestas es que la monarquía es infinitamente más frágil hoy que hace un cuarto de siglo y que tiene dos gravísimos problemas, el generacional y el territorial: el rechazo de los nacidos en democracia a la monarquía es sólido y contundente; y el rechazo entre los nacionalistas vascos y catalanes es absoluto (y no siempre fue así: recordemos que el abogado escénico de Cristina de Borbón fue Miquel Roca).

La monarquía ya no es —y probablemente tarde mucho (si es que alguna vez lo consigue) en volver a serlo— una institución de todos los españoles.

En octubre de 2020, dieciséis medios digitales (unidos en la Plataforma de Medios Independientes) lanzaron una campaña de crowdfunding para hacer una encuesta amplia sobre la monarquía. Consiguieron rápidamente los fondos y encargaron la encuesta con 3.000 entrevistas a la empresa demoscópica 40dB. El resultado fue muy distinto al que habían publicado los medios monárquicos. Preguntados por qué votarían en un referéndum entre monarquía y república en España, un 40,9% declaraba que votarían república frente a un 36,9% que preferiría mantener la monarquía. Esta encuesta refleja básicamente los mismos sesgos que ya reflejaba el CIS en 2015: la brecha generacional, la electoral y la territorial. Sobre esta última:

Catalunya (algo que también se observa en Euskadi y, en menor medida, en Baleares) es el tractor republicano del Estado: en un 66,5% Catalunya es republicana y en un 14,6%, monárquica. En las otras comunidades con más población, ganaría la opción monárquica, aunque la diferencia en el resultado del hipotético referéndum sería más ajustada que en el caso catalán: un 31,5-43,1% en Andalucía; un 32,2-46,3% en la Comunidad de Madrid; un 32,4-37% en el País Valencià. Por otro lado, la monarquía tiene un problema de futuro, pues son las generaciones más jóvenes las que preferirían una república y tan solo los mayores de 55 años prefieren tener rey[47].

El desgarro territorial catalán y el discurso de Felipe VI tras la movilización soberanista del 1 de octubre de 2017 garantizan que Felipe VI tiene dificilísimo recuperar el afecto de los catalanes. A falta del CIS, lo que sí tenemos tras el 1 de octubre es una encuesta del CEO (su equivalente catalán):

Una amplia mayoría, seis de cada diez catalanes (60,3%), no tiene ningún tipo de confianza con la monarquía y le da a un 0 sobre 10, lo que confirma la tesis del rechazo masivo a la Corona. Pero es más: prácticamente cuatro de cada cinco (77,9%) la suspenden, es

decir, le dan una puntuación de cuatro o inferior. De hecho, en cómputo global, los catalanes otorgan a la institución un paupérrimo 1,82, medio punto menos que en el barómetro anterior (2,36)[48].

Desde Madrid muchas veces pensamos de facto en Cataluña como país independiente y tendemos a minusvalorar la aportación de la política catalana al conjunto de España. Pasó, por ejemplo, cuando PP y PSOE se negaban en 2015 y 2016 a contar con los votos de diputados independentistas para una investidura a presidente del Gobierno de España. Eso hacía casi imposible un gobierno estable en España y, sobre todo, hacía imposible un gobierno sin el control del PP y Ciudadanos (que renunciaban a poco, pues al menos los diputados de ERC difícilmente apoyarían una investidura suya y a los herederos de Convergència les podría suponer un enorme desgaste electoral volver a las alianzas con el PP de tiempos del pujolismo). Mientras Cataluña forme parte de España, los catalanes son españoles. De hecho, parafraseando al expresidente del Gobierno, los catalanes son muchos españoles: casi uno de cada seis españoles es catalán.

Por tanto, ser rey de todos los españoles obteniendo un rechazo tan contundente de una parte tan importante de España se antoja dificilísimo y esa es una debilidad estructural de la monarquía, pero también de la unidad de España.

La monarquía se jubila

Posiblemente sea más estructural la brecha generacional, este rechazo de los jóvenes a la monarquía, sólido, continuado en el tiempo y que se ensancha con cada estudio hasta dejar fuera del suspenso solo a los mayores de 65 años.

El factor generacional es probablemente el más estructural a largo plazo en la política, al menos en la española. Es una obviedad demográfica que las generaciones se van relevando y que quienes ahora suspenden a la monarquía con 60 años, dentro de un lustro la suspenderán con 65; y que el grupo de mayor edad que sigue aprobando a la monarquía será cada vez menor por causas naturales.

Hasta la irrupción de Podemos en 2015 sistemáticamente el pico de votantes de IU, por ejemplo, estaba en los nacidos en los años setenta. Ello coincidía con que habíamos llegado a la mayoría de edad en la época de Julio Anguita, cuando IU tuvo sus mejores resultados electorales. Anguita era el político más valorado y entre los primeros votantes (los que recién alcanzan la mayoría de edad) en los años noventa IU obtenía más votos que el PSOE. Las opciones políticas familiares y las ideas, simpatías y tendencias con las que uno se politiza en la adolescencia y en la juventud son mucho más sólidas que los vaivenes eventuales que generen las noticias diarias. Eso de que uno se cambia mucho más fácilmente de opción política que de club de fútbol está por demostrar.

A nadie se le escapa que una institución política como la monarquía tiene muy difícil resultar atractiva a las nuevas generaciones de españoles. Lo mejor que le puede pasar para no ser cuestionada es pasar desapercibida, formar parte del paisaje.

El único caso en el que la monarquía podría tener un auge en el apoyo juvenil es si se viera como freno de los sectores más rancios y conservadores de la sociedad. Algo parecido a lo que ocurrió el 23F

cuando Juan Carlos I aparecía con gran éxito comunicativo como el garante de la modernización política de España frente al caduco búnker franquista. En una situación así es posible que la juventud pudiera sentir cierto apego a la institución. Algo parecido a lo ocurrido con la sucesión, que pretendió presentar a Felipe y Letizia como lo moderno frente a Juan Carlos, asentado en un imaginario extremadamente distante al de las nuevas generaciones de españoles (cazador de elefantes y osos borrachos, taurino, mujeriego). Pero esa oportunidad está ya superada sin que Felipe VI la haya conseguido aprovechar.

República, ¿para qué?

Podemos, pues, dar por hecho pese al apagón del CIS (o incluso interpretándolo) que la valoración de la monarquía por los españoles es muy preocupante para los monárquicos y que su tendencia futura probablemente sea la consolidación del rechazo y la reducción del apoyo.

¿Deben sentarse los republicanos a esperar a que la monarquía caiga por ese natural crecimiento de su rechazo?

La respuesta es negativa al menos por tres motivos:

1) Podría ser una tentación si el ambicioso cambio político que se propone para España consistiera en la mera sustitución de la forma de elección de la jefatura del Estado. A nadie se le escapa que es más democrático, moderno, racional y hasta prudente poder elegir en urnas un cargo político de tanta relevancia y, sobre todo, poderlo destituir periódicamente, que esperar a que el azar, la genética y la discriminación machista hayan dado un resultado aceptable.

Que la jefatura del Estado se pudiera elegir democráticamente sería una mejora, pero en ningún caso sería la mejora suficiente ni, sobre todo, sería un cambio que viniera solo. La monarquía no es en España un mero instrumento decorativo, sino que es un pivote político y económico, cultural y moral fundamental en nuestro sistema político. Sin monarquía cambiaría todo. Lo que no quiere decir que el cambio fuera necesariamente a mejor. No son pocas la veces que ante el ruido de fondo de la opinión pública surgen opciones políticas reaccionarias para coger una bandera moderna y decente y ponerla al servicio del inmovilismo: un ejemplo evidente es el lanzamiento estatal de Ciudadanos en nombre de la regeneración y la lucha contra la corrupción, que solo ha servido para apuntalar a los gobiernos más corruptos y más anquilosados de ayuntamientos, comunidades autónomas y del Estado. Llegado el caso, no lo dudemos, surgiría una opción política que se definirá

como republicana pero que será reaccionaria y autoritaria: del mismo modo que la etiqueta "liberal" está sirviendo en España de cobertura de propuestas políticas que tienen mucho más que ver con propuestas autoritarias y conservadoras que con la sana (y revolucionaria) reivindicación de los derechos y libertades individuales.

La denuncia de la monarquía y la propuesta republicana son razonables en sí mismas, pero sería suicida convertirlas en un fin en sí mismo. Lo interesante de la propuesta republicana es que pueda ser motor del cambio, no el propio cambio. De nuevo es imprescindible que tengamos claro que el debate no es si un cambio democrático y emancipador traería a España una república (que es obvio que sí), sino si la propuesta republicana es capaz de traer un cambio democrático y emancipador a España. Si el "no a la monarquía" y el "sí a la república" pueden ser catalizadores positivos de la crisis de régimen y, sobre todo, del malestar popular, para que den lugar a un cambio emancipador.

2) Las propias encuestas del CIS en sí son fundamentales para entender un cambio de clima, pero absolutamente insuficientes para saber si el rechazo a la monarquía es lo suficientemente sólido como para que, llegado el momento de una crisis de Estado, los españoles piensen que vale la pena correr el riesgo. Hay decenas de posiciones políticas más o menos idealizadas de las que amplios sectores pueden ser partidarios precisamente porque no están en el debate de lo concretable. Puede haber un amplio rechazo a la monarquía, una defensa de la legitimidad (o incluso de la necesidad) de una consulta sobre la monarquía y la república o incluso la afirmación de la república como forma de gobierno deseable para España… precisamente porque no está sobre la mesa ese debate. Cabe la posibilidad de que una vez puesto sobre la mesa muchos españoles que hoy no se lo plantean se sumen a una propuesta modernizadora, democrática y liberal como sería la república. Pero también que ante un horizonte de rotundo cambio político algunos de quienes hoy rechazan la monarquía se refugiasen en un "virgencita que me quede como estoy".

3) Algo parecido sucede con el hecho de que una cosa es valorar negativamente una institución en abstracto y otra cosa es que su

alternativa sea deseable. En todas las encuestas, incluidas las peores para la monarquía, obtienen, por ejemplo, peor valoración los partidos políticos. ¿Quiere esto decir que los españoles desearían que se suprimieran los partidos políticos? Doy por hecho que no; quizás quiere decir que hay una gran disconformidad con el funcionamiento de los actuales partidos políticos o incluso simplemente que hay un difuso desprestigio de estos por razones más profundas, de la que ese rechazo sería simplemente un síntoma.

En el caso de la monarquía sucedería algo parecido. Podría haber un fuerte rechazo a la monarquía compatible con preferirla a sus alternativas o incluso no contemplar ninguna. Es una objeción posible, aunque lo cierto es que tiene debilidades. En primer lugar, porque, a diferencia de los partidos políticos, es fácilmente imaginable una democracia sin monarquía: vivimos rodeados de ellas y no ofrecen ningún déficit democrático por poder elegir a sus jefes de Estado. En segundo lugar, porque la encuesta del CIS de 2015 nos dice que el problema no está en la coyuntura de esta monarquía: Felipe VI obtenía entonces un apoyo bastante razonable, pero ello era compatible con el rechazo a la institución que él encarnaba. Y, en tercer lugar, porque a diferencia de cualquier otra institución en una democracia, la desconfianza hacia la monarquía no puede solucionarse ni con profundos cambios en su estructura ni, desde luego, en su titularidad. El relevo ya se intentó con la abdicación de Juan Carlos I y, ahora, con Felipe VI recién llegado y siendo su sucesora una niña de la que apenas conocemos su voz sería impensable otra abdicación. Cuando se produjo el relevo también se anunciaron cambios, la modernización de la monarquía, que se traduciría en mayor transparencia, fundamentalmente. Hoy ningún anuncio de ese tipo tendría credibilidad alguna: de hecho se responde como un ritual a cada nuevo escándalo con un anuncio de reformas modernizadoras de la Corona.

No habrá reforma de la Constitución

en España

Cuando en agosto de 2020 el rey Juan Carlos I se fue de España al descubrirse su corrupción, el vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos Pablo Iglesias mostró su aspiración a que España fuera una república, pero declaró imposible lograrlo a corto plazo: "Vamos a tener que esforzarnos mucho para sacar adelante los presupuestos, no digo ya para hacer una reforma constitucional de calado"[49]. Hacía referencia Iglesias a la dificultad de reformar la Constitución de la forma ordinaria prevista por los constituyentes de 1978. Efectivamente, para reformar la Constitución en sus aspectos esenciales (y todo el Título II, el referido a la Corona, lo es, como lo son las múltiples referencias al rey y a la monarquía parlamentaria como forma política del Estado español [artículo 1.3]) hace falta un procedimiento extraordinariamente gravoso que básicamente lo hace imposible. Según la previsión constitucional, el Congreso y el Senado deben aprobar por dos tercios el inicio de la reforma constitucional y convocar elecciones; el nuevo Congreso y el nuevo Senado deben redactar la reforma y aprobarla por dos tercios de cada una de las cámaras y entonces convocar al pueblo español en referéndum para aprobar la reforma. Este es el procedimiento, por ejemplo, que haría falta para una reforma de consenso como la eliminación de la discriminación de género en la sucesión de la Corona. Si no se ha hecho una reforma para la que habría inmensa mayoría o unanimidad, mucho menos se emprenderá una reforma para la que no hay consenso previo.

La supuesta confesión de Iglesias era en realidad una excusa. La Constitución española de 1978, desengáñense los apóstoles de la Transición, no será eterna. Blindar una constitución para hacer imposible reformas importantes y posiblemente sensatas (como hizo el constituyente de 1978) es un grave error que lleva a que las

constituciones se reformen por colapso, es decir, conduce necesariamente a graves crisis institucionales aunque pueda tener la virtud de retrasarlas.

Una república no llegará porque dos tercios del Congreso se pongan de acuerdo en iniciar esa reforma. Vendrá porque haya evidencia de que el pueblo español quiere emprender ese camino. En 1931, por ejemplo, esa expresión se dio en unas elecciones municipales y acto seguido dejó de haber monárquicos en España (la Constitución de 1931 se aprobó sin votos en contra).

Hay al menos dos instrumentos en manos del Gobierno para mostrar si el pueblo español quiere mantener la monarquía o prefiere iniciar la construcción de una república. El más contundente es la convocatoria de un referéndum consultivo. Nada impide al Gobierno de España usar el artículo 92.1: “Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”. Nada impediría preguntar al pueblo español si desea que se inicie el proceso de reforma constitucional previsto en el artículo 168 de la Constitución para que España adopte la república como forma política del Estado. Si en un referéndum así la mayoría de los españoles diera su apoyo al cambio, no habría obstáculo formal que lo impidiera: probablemente la propia familia real facilitara el cambio como hizo Alfonso XIII tras las elecciones del 12 de abril de 1931.

Aunque si el Gobierno no se decide a dar este paso, al menos podría encargar al CIS que preguntara de una vez cuál es la opinión de los españoles al respecto con preguntas claras, sin manipular, sin dirigir.

La democracia c'est moi

El mito legitimador de la monarquía en la España de la Transición se ha vehiculado a partir del papel del rey en el 23F. Sorprendentemente, buena parte de la información sobre el 23F sigue reservada como secreto oficial. En noviembre de 2016 se aprobó la tramitación de una proposición de ley presentada por el PNV para reformar la Ley de Secretos Oficiales y fijar un plazo temporal para su desclasificación de treinta y cinco años (en la actualidad no existe plazo alguno). La tramitación de la ley fue una de las que padeció el boicot del PP y de Ciudadanos a través de la Mesa del Congreso de los Diputados por lo que, pese a contar con el apoyo de la mayoría del Parlamento, no ha podido ser aprobada. Resulta curioso, con todo, que los partidos que se dicen constitucionalistas y más firmemente monárquicos sean los que bloqueen una ley que tanto bien haría por la defensa de la Transición y de la monarquía. En todo caso, otra de las cosas que ya podría hacer el Gobierno es desclasificar los papeles de los años setenta y ochenta, que darían buena información a los españoles sobre qué ha sido la monarquía del 78.

El documental de Victoria Prego pretendía añadir un componente de legitimidad democrática al rey Juan Carlos I: el de diseñador y arquitecto del proceso de Transición. Mientras que el príncipe Juan Carlos desaparece en el franquismo, no pinta nada, el rey Juan Carlos I aplica meticulosamente un plan, una suerte de diseño inteligente político que conduce de la dictadura a la democracia pese a las dificultades que pone el franquismo y la oposición democrática. Es fundamentalmente Alfonso Osorio (ministro de aquellos primeros Gobiernos de la monarquía) quien explica que todo era un plan urdido en solitario y casi en secreto (solo conocido por un puñado de personas como él) por el monarca cuando era príncipe de España y sucesor de Francisco Franco a título de rey.

El análisis dominante de historiadores y protagonistas de aquellos

años no cuenta, ni mucho menos, un proceso tan rígidamente planificado en el laboratorio político del “doctor” Juan Carlos. Incluso desde la defensa más contundente de la Transición lo que se nos ha contado fue que había un horizonte (una apertura democrática imprescindible y hasta inevitable, pero sin un punto de llegada demasiado definido) y un puñado de hombres que destacaban, en su mayoría, no por una excelente formación intelectual sino por una enorme capacidad de intuición política. En ese perfil encajarían claramente personas como Adolfo Suárez, pero también Santiago Carrillo; y sin duda Juan Carlos I que, desde la caída del manto de silencio sobre su figura, aparece mucho más cercano a un personaje cuyas virtudes serían la intuición y el don de gentes que la solidez y capacidad intelectuales que exigiría diseñar un proceso tan complejo, el drástico cambio institucional para un país en solitario, desde su palacio, rodeado de franquistas de quienes no podía fiarse.

Seguramente ese relato nunca ha cuajado entre los españoles, que hemos podido ver al rey Juan Carlos I con ciertas virtudes, pero nunca con esa brillantez intelectual. Ni siquiera ha habido un esfuerzo pertinaz en que calara. De hecho, el reparto de personajes familiar era más bien antagónico: mientras Juan Carlos se quedaba para sí virtudes sociales (el rey campechano), la reina Sofía era la amante de la cultura y la lectura, aunque ello tuviera más como consecuencia la sensibilidad (vegetariana, antitaurina e infatigablemente solidaria en la fiesta de la banderita y los viajes a África a ver niños famélicos) que capacidad de pensamiento alguna. Un reparto de tareas propio de la Sección Femenina de Pilar Primo de Rivera, pero que generó cierta popularidad en la pareja (una popularidad que sigue conservando la sufriente y muy profesional —por ayudar a la profesión de su marido— reina emérita).

¿Tú no sabes a quién representa Prado?

Más interesante que el fallido relato del rey ingeniero político es un detalle que cuando se emitió la serie La Transición en los años noventa no resultó tan obsceno porque aún no se hablaba abiertamente de los chanchullos económicos que se fraguaban desde la Zarzuela y que hoy en día sigue siendo un lastre imposible de remontar por la monarquía de Felipe VI.

Recordemos que un pilar fundamental de la crisis de régimen que cristaliza con el 15M es la denuncia frontal de la corrupción estructural. De ella se deriva un análisis de la crisis política, ligada al saqueo y a la sumisión del poder político a las élites económicas a cambio de financiación ilegal, sobres, puertas giratorias, etc. También la denuncia de la bajísima calidad democrática. Una recopilación de los casos de corrupción que han penetrado y rodeado íntimamente a la Casa Real exigiría otro libro, pero sí cabe hacer un pequeño recorrido que muestre lo frágil que es la monarquía española a través, solamente, de las generaciones que han estado presentes en la Transición ante la mirada mínimamente atenta de un pueblo harto de corrupción.

La Casa Real es una institución relativamente pequeña tanto en cuanto al número de personas que la componen directamente (la propia familia del rey) como por el número de personas de confianza de ese núcleo. Sin embargo, la cercanía de la corrupción es una constante desde su inicio. En un país especialmente sensibilizado con la corrupción, la relación de la Casa Real con los negocios más turbios y con enormes corruptos ha sido una constante y no es un asunto de una persona concreta sino de demasiadas personas en un grupo tan pequeño. Si es evidente la íntima amistad entre el PP y la corrupción por la gran cantidad de casos que le han sacudido (siendo un partido con miles de cargos públicos), ¿cómo no establecer la misma relación en el caso de la Corona?

Volvamos al documental de Victoria Prego. Uno de sus propósitos era hacer descansar solo en la cabeza de Juan Carlos I un plan milimétrico que condujera a la Transición. En él, aparece reiteradamente un hombre de la máxima confianza de Juan Carlos, tanto en su época de príncipe como de rey. Se trata de Manuel Prado y Colón de Carvajal, que aparece por primera vez ante la crisis del Sáhara y la inminente ocupación marroquí. Entonces cuenta cómo el príncipe le pide que vaya (en absoluto secreto y sin papeles) a ver a Henry Kissinger para pedirle que frene la ofensiva marroquí; según la narración de Prado y Colón de Carvajal, a Kissinger no le hace falta ningún tipo de acreditación porque sabe perfectamente que efectivamente ese hombre habla por boca de Juan Carlos de Borbón. El segundo viaje que cuenta (también en secreto y sin acreditación alguna) es a París inmediatamente después de la muerte de Franco para lograr que el presidente de la República francesa, Valéry Giscard d'Estaing, asista a la coronación de Juan Carlos; de nuevo consigue reunirse con el presidente francés y convencerle. Vuelve a aparecer unos meses después en un viaje si cabe más secreto: se reúne en Bucarest con Ceaucescu para transmitirle una petición de tranquilidad y paciencia a Santiago Carrillo, líder de un PCE absolutamente ilegal.

Lo importante de la aparición de Manuel Prado y Colón de Carvajal no es su pericia diplomática (aparentemente solo logró su objetivo en París), sino la exhibición que el documental y él mismo hacen de su íntima complicidad con Juan Carlos I. Hablar con Prado y Colón de Carvajal era hablar con el rey. Llegar a un acuerdo con Prado y Colón de Carvajal era llegar a un acuerdo con Juan Carlos I.

Manuel Prado y Colón de Carvajal fue durante más de dos décadas "administrador de la fortuna del rey"[50]. En 1999, el periodista Jesús Cacho publicaba el libro El negocio de la libertad[51], donde exponía el tejido político-empresarial de una élite que funcionaría como auténtico poder fáctico en España: "la banca, las grandes fortunas, una Corona perfectamente acoplada al felipismo, la propia cúpula socialista y, naturalmente, el único poder fáctico real existente en la España de nuestros días: el grupo Prisa de Jesús Polanco". En este libro se publica por primera vez para un público más o menos amplio lo que años después resumiría el propio Jesús Cacho:

Una mañana del año 1979, el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Fernando Abril Martorell, citó en su despacho a Roberto Centeno, a la sazón consejero delegado del monopolio público CAMPSA. La llamada "segunda crisis del petróleo", provocada por la revolución iraní y la guerra Irán-Irak, había puesto a España al borde del desabastecimiento de crudo, por lo que era urgente localizar los aprovisionamientos necesarios para resolver el problema. A través del entonces embajador español en Kuwait, Fernando Schwartz, Centeno viajó a Oriente Medio regresando con varios cargamentos de petróleo bajo el brazo. Al volver a su despacho, se topó con varias llamadas urgentes de Francisco Fernández Ordóñez, su responsable jerárquico como ministro de Hacienda. "Fui al caserón de Alcalá convencido de que me llamaba para felicitarme y darme un buen bonus". Se equivocaba. Al verle entrar, Pacordoñez levantó los brazos muy escandalizado:

—Pero ¿qué has hecho, Roberto, qué has hecho? ¡Me has buscado la ruina! ¿Cómo se te ocurre ir a Kuwait a comprar petróleo?

—Hombre, Paco, ¿y adónde quieres que vaya, a comprárselo a los Ayatolás? —protestó un Centeno que no entendía qué estaba pasando.

—Pues no sabes la que has liado. Ha estado aquí Manolo Prado y no veas la que me ha montado; me ha dicho que en Oriente Medio solo opera él.

—Sí, pero este golfo nos carga una comisión de 5 dólares barril…

—¿Y eso a ti qué cojones te importa? ¿Acaso la pagas tú?

—Pues, hombre, sí, como consumidor claro que la pago yo, y creo que tú y yo estamos aquí para defender a los consumidores, no para enriquecer a un especulador. No tenemos por qué pagar comisión alguna.

—Eso no es así porque los precios al público no varían, tú sabes igual que yo que el coste lo absorbe la renta de petróleos.

—Eso es verdad, Paco, pero al final lo pagan los contribuyentes.

—Bueno, en todo caso ese es mi problema, no el tuyo, así que ni se te ocurra volver a Kuwait.

—Pero a ver, Paco, dime una cosa: ¿quién narices es el tal Prado y Colón de Carvajal para abroncar al ministro de Hacienda?

—¿Tú no sabes a quién representa Prado?

—Pues no, ni idea.

—La verdad, querido Roberto, es que eres un pardillo, pero te lo reitero: ni se te ocurra volver a Kuwait a comprar petróleo.

Nada más abandonar Hacienda, Centeno fue directo a contar lo ocurrido al vicepresidente del Gobierno. Abril Martorell se mondaba de risa.

—¡Qué razón tiene Paco; tú sabrás mucho de petróleo, pero en política eres un auténtico pardillo!

—Pero fuiste tú quien me envió a resolver un problema muy grave para este país, y tú eres el vicepresidente… ¿Qué es lo que tengo que hacer, entonces?

—Tu jefe es Paco, no yo, Roberto, así que haz lo que te dice tu jefe y no vuelvas por Oriente Medio —le ordenó sin dejar de reírse.

La compra de crudo era cosa de Manolo Prado y Colón de Carvajal, el "intendente" real, y las comisiones del petróleo eran cosa de Juan Carlos I, su amo y señor, y eran muy importantes, porque en un superpetrolero podían caber hasta 1,5 millones de barriles, y para atender el suministro español eran necesarios muchos cargamentos anuales. Una situación que llevó un día a Felipe González a exclamar, mientras hacía antesala en la Zarzuela en compañía de Sabino Fernández Campo: "Y dile a Manolo Prado que se conforme con el 2%, porque eso de cobrar el 20% es una vergüenza…". Sometido a la tutela de Franco, el entonces príncipe pasó unos años muy duros lejos de su familia y de su padre, cuyos consejos le hubieran sido de gran ayuda. Años de penuria económica que están en la raíz de la obsesión del personaje con el dinero. Como Scarlett

O'Hara en Lo que el viento se llevó, Juan Carlos I también puso a Dios por testigo de que jamás volvería a pasar hambre. En El negocio de la libertad (Foca, 1998) se relata el crédito de 100 millones de dólares (unos 10.000 millones de pesetas de la época) que, a pagar en 10 años y sin intereses, le concedió Arabia Saudí. "Parecía claro que la familia real saudí estaba haciendo al rey de España un regalo no inferior al principal de dicho crédito, puesto que, con los tipos de interés vigentes, bastaba colocar ese dinero en un banco para doblar, como poco, esa cifra al cabo de los años pactados". O los 100 millones de dólares, siempre la misma cifra, que Prado reconoció en sede judicial haber recibido del grupo KIO, vía Javier de la Rosa, para atender "el pago de favores políticos realizados en pro de la liberación del emirato" tras la invasión de Kuwait por las tropas de Sadam Hussein[52].

Cuatro años después de haber usado a Manuel Prado y Colón de Carvajal como prueba de la inteligencia estratégica de Juan Carlos I a través de su persona de máxima confianza, el propio documental de Prego se convertía en una explicación involuntaria de cómo Juan Carlos I vinculaba sus funciones políticas con negocios privados ilegítimos. El emisario diplomático del rey era al tiempo su recaudador de mordidas y el administrador de su fortuna. En la España del manto de silencio, disimular era innecesario y Juan Carlos I disimulaba poco.

El libro de Jesús Cacho, junto con La soledad del rey, del periodista José García Abad, fue el que más impacto tuvo en la difusión del amor de Juan Carlos I por el dinero y su falta de escrúpulos en la obtención del mismo. Hubo más libros sobre sus escándalos económicos escritos por personas muy diversas (como el coronel Martínez Inglés, Rebeca Quintáns —Patricia Sverlo— o Iñaki Anasagasti[53]), pero de difusión siempre limitada: era prácticamente imposible que ningún medio de comunicación masivo diera a conocer a su audiencia lo que se estaba publicando.

En 2018 se publicaron las grabaciones de conversaciones entre Corinna Larsen y José Manuel Villarejo[54] que suponían una confesión por parte de Larsen de su implicación y la de algunas otras personas en negocios ilegales por parte de Juan Carlos I. Estos

asuntos llevaron a la fiscalía suiza a investigar las comisiones de Juan Carlos por el AVE saudí que acabaron sacando al rey emérito de España.

Su aparente pulcritud y sorpresa ante el tinglado de su pareja hace pensar que era consciente de que lo que decía podía publicarse literalmente en algún momento. Su interlocutor era José Manuel Villarejo: el comisario que engrasó las cloacas con las que distintos gobiernos atacaban a rivales políticos, con especial obscenidad desde que el ministro Fernández Díaz decidió usar sus servicios para armar dosieres repletos de falsedades contra Podemos y los nacionalistas catalanes, sabiendo que las construcciones de Villarejo serían amplificadas por Eduardo Inda, tertuliano ultra en televisiones y radios y director de una web llamada OK Diario que, casualmente, también tuvo acceso a las grabaciones de las conversaciones.

José Manuel Villarejo llevaba en la cárcel desde algo más de medio año antes. Corinna Larsen debía de llevar apartada de los negocios ilegales de Juan Carlos I desde poco después del accidente de Botsuana. ¿Hay razones para pensar que la publicación de las grabaciones forma parte de un chantaje para obtener prebendas (penitenciarias, judiciales, económicas) del Estado? Por supuesto. ¿Hay razones para pensar que lo que se cuenta en las grabaciones es real? Todas; y la primera es que precisamente ese chantaje es pensable solo si el contenido es real.

En aquellas grabaciones se vincula a Juan Carlos I con el caso Noos; se le atribuye el cobro de comisiones por la construcción del AVE de Arabia Saudí que pagarían constructoras españolas y que después quedaría acreditado con la investigación suiza; se le atribuyen propiedades y cuentas corrientes en el extranjero (que después reconocería el propio Felipe VI a través de su comunicado de 15 de marzo de 2020); y se otorga el papel de testaferro de Juan Carlos I a la propia Corinna Larsen y a Álvaro de Orleans y Borbón, primo del rey.

Ninguna de las personas implicadas, ni tampoco la Casa Real, han desmentido nunca ninguna de las acusaciones. Solo Corinna Larsen emitió un comunicado en el que no desmentía nada (de hecho, ni mencionaba los hechos que ella misma se atribuía, claramente

ilegales):

Desde hace tiempo, ha habido una campaña de descrédito con motivación política contra mi persona. Siempre he actuado correctamente y pretendo continuar viviendo mi vida de forma tranquila, con independencia de los años de acoso constante y de los intentos de descrédito público que he padecido con un sinfín de información falsa. Tengo enorme respeto por las instituciones de España, pero no puedo permitir ser utilizada en un conflicto que no me atañe[55].

En España hubo medios de comunicación que llegaron a llamar "golpe de las fotocopias" a la publicación de los papeles de Bárcenas, que habrían sido falsificados, etc.[56] Pero no ha habido un solo medio, ni un tertuliano o columnista, ni aparentemente nadie que se mostrara escéptico con los hechos atribuidos al rey Juan Carlos I más allá de una vaga apelación a la presunción de inocencia. La estrategia en 2018 fue, sobre todo, silenciarlos tras unos primeros días de inevitable escándalo, y se intentaba discutir más si era un complot que si los hechos denunciados eran reales. En 2020 no había mucha estrategia, especialmente tras la salida de Juan Carlos I de España y el prolongado secreto sobre su paradero. La única estrategia parece ser blindar al rey tras una interpretación mucho más extensiva de lo razonable del artículo 56.3 que constitucionaliza la inviolabilidad de los actos del rey.

Vimos cómo en 1979 el Estado se ponía al servicio de los negocios corruptos de Juan Carlos I. El Gobierno no podía comprar petróleo más barato porque el rey necesitaba que se compraran a Arabia Saudí. No podíamos tener relaciones diplomáticas dignas con una dictadura ferozmente criminal porque a la cabeza del Estado teníamos a una persona cuya fortuna engordaba gracias a nuestra buena relación con la monarquía saudí.

En septiembre de 2018 se publicó que los negocios ilegales que el monarca habría seguido tejiendo con Arabia Saudí treinta años después también eran asistidos por el Gobierno: "Un embajador de

España acompañó a la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein en una reunión celebrada en 2007 en Riad, capital de Arabia Saudí, en la que la empresaria y examante del rey Juan Carlos I se presentó ante el príncipe y multimillonario Al-Waleed bin Talal como 'representante' del entonces jefe del Estado", publicaba eldiario.es. "Que el principal representante del Estado español en Riad estuviera presente eleva el rango de esa reunión, ya que los embajadores solo suelen acompañar a cargos oficiales del Estado y, en ocasiones, a empresarios con grandes intereses económicos y comerciales en los países en los que están acreditados" [57]. ¿De qué se trató en esa reunión avalada por el Estado a través de su embajador? Continúa el medio:

Al Riyad reseñaba que la examante del monarca y el príncipe Al-Waleed analizaron en el encuentro "oportunidades de cooperación e inversión en España y las formas de fortalecer las relaciones bilaterales" entre ambos países. También abordaron la situación del Fondo de Inversión Hispano-Saudí de Infraestructuras y Energía que se presentó dos semanas después en El Pardo, "cuyos esfuerzos apoya desde su creación" Corinna.

Ese fondo, creado en 2006, partió de una "idea" del propio Moratinos, según reconoce el exministro. En él participaron 14 empresas españolas, entre ellas, OHL, ACS, Endesa, Sacyr, Acciona, Iberdrola, La Caixa o Técnicas Reunidas. Acabó siendo un fiasco y las compañías españolas perdieron su inversión, 21 millones de euros, después de que la parte árabe (que debía aportar el 80% del dinero) incumpliera sus obligaciones, aunque no consta que iniciaran reclamación alguna.

Dos de las afectadas (ACS y OHL) acabaron integrando el consorcio que en 2012 se adjudicó el multimillonario contrato del AVE a La Meca por el que, según Corinna, el rey Juan Carlos pidió una comisión "millonaria".

En resumen, en 2007 el Estado seguía al servicio de los negocios privados e ilegales de Juan Carlos I. En este caso se trabajaba por

las comisiones del monarca por conseguir contratos para las constructoras españolas, lo mismo que el PP en los papeles de Bárcenas, con la diferencia de que el negocio se cerraba con una de las dictaduras más feroces del planeta. Obviamente el Gobierno español mantenía esa privilegiada relación diplomática con Arabia Saudí, cuyas violaciones de los derechos humanos nunca se han cuestionado desde España: ese cuestionamiento hubiera sido muy poco rentable para las cuentas de un comisionista; y si ese comisionista es el jefe del Estado se hace harto improbable un giro diplomático hacia la decencia.

La monarquización del Parlamento

Entre 2018 y 2020 Unidas Podemos, Más País, ERC, JuntsxCat, PNV, la CUP, BNG, Compromís y Bildu presentaron solicitudes de comisiones de investigación en el Congreso sobre los escándalos del rey Juan Carlos I. La Mesa del Congreso decidió en 2018 no tramitar la solicitud propuesta por Podemos como haría después con las siguientes propuestas. Lo decidieron de la mano el PP, Ciudadanos y el PSOE, con el añadido posterior de Vox. No es que rechazaran constituir la comisión (algo que debería haberse votado en el Pleno, con debate público), sino que rechazaron siquiera tramitarla: no era, formalmente, una decisión política (discutible pero acaso legítima), sino una supuesta decisión administrativa y que solo podrían tomar si fuera ilegal tramitar la propuesta. Usaron para ello dos argumentos insostenibles[58]:

En primer lugar, que el Congreso controla al Gobierno, pero no pueden decir nada de la Casa Real. Esto, por un lado, no es del todo cierto: según la Constitución, las Cortes Generales (Congreso y Senado) pueden llegar a vetar la boda de un aspirante a monarca, pueden nombrar rey si la sucesión quedase desierta, pueden inhabilitar a un rey y el presidente de las Cortes Generales es el responsable de los actos del rey en determinados momentos. Pero, sobre todo, las comisiones de investigación no son control del Gobierno. Según la Constitución Española (artículo 76), las comisiones de investigación versarán "sobre cualquier asunto de interés público": pueden investigar el cambio climático, la aplicación del VAR en la liga de fútbol, la existencia de vida extraterrestre o lo que consideren que pueda ser interesante para los españoles. Sobre las grabaciones de Corinna Larsen y José Manuel Villarejo, las comisiones ilegales, las sociedades, fundaciones y cuentas opacas en el extranjero del rey Juan Carlos I había dos hipótesis (probablemente, como hemos visto, ciertas ambas): que lo que contaban fuera verdad y que la publicación de las grabaciones fuera un chantaje a las instituciones del Estado de una mafia que

utilizaron los Gobiernos de España y que se desarrolló dentro de las instituciones del Estado. ¿Cuál de estas dos hipótesis no es un "asunto de interés público"? Cuando en 2020 el rey Juan Carlos tuvo que huir de España ya no había demasiadas formas de decir que no se trataba de un asunto de enorme interés público.

La otra excusa era igual de burda, pero algo más reveladora: que los hechos se produjeron durante el reinado de Juan Carlos I, cuando era inviolable y no responsable. Esto, en primer lugar, sería reconocer que los hechos existieron: solo lo que ha pasado tiene un periodo temporal; si nos dicen que el cobro de comisiones, el uso de testaferro, las cuentas suizas… están sometidas a inviolabilidad, están reconociendo que sucedieron, que son hechos ocurridos entre 1978 y 2014. En todo caso, si el rey emérito seguía teniendo cuentas en Suiza ocultas al fisco, que no lo sabemos, la ilegalidad se estaría cometiendo ahora. Y sería algo, por cierto, especialmente relevante para Felipe VI al menos en tanto que heredero de esas cuentas (y de la fortuna obtenida ilegalmente por Juan Carlos I) y de beneficiario de las fundaciones, al menos hasta su renuncia el 15 de marzo de 2020.

Pero, más allá de la torpeza, es ridículo pensar que la inviolabilidad implica que el Congreso no pueda investigar qué sucedió. La inviolabilidad hace que el rey no pueda ser juzgado en un tribunal. Pero obviamente puede ser investigado por la prensa, por ejemplo, y también por el Congreso. Incluso, según la Constitución, un rey en ejercicio tendría la obligación de comparecer como cualquier otro ciudadano ante una comisión de investigación si es citado. Lo único que sucede, por esa inviolabilidad, es que no podría ser juzgado por negarse a acudir como sí sucedería al resto de españoles. Un razonamiento tan absurdo como lo sería el rechazo a la comparecencia de un ministro con la excusa de que, por su condición de aforado, solo puede responder ante el Tribunal Supremo.

Para salvar la cara de la Corona, PSOE, PP, Ciudadanos y Vox, con la ayuda inestimable de los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados, se saltaron la Constitución con argumentos que sabían ridículos. Demostraron que entre la lucha contra la corrupción y la sumisión cortesana era mucho más importante para ellos la

segunda. Pero, sobre todo, evidenciaron que hay mucho que ocultar en los negocios de la Casa Real. Si todo fuera mentira, los partidarios de la monarquía habrían sido los primeros interesados de que el asunto se aclarase, que se demostrase que todo era un invento de un mafioso encarcelado y de una señora resentida. Pero decidieron ocultárnoslo: cómo debe de ser la cosa para que consideren menos lesivo para la Casa Real que pensemos que lo que se empieza a conocer es cierto, que el conocimiento público de la realidad.

Cuando se difundieron las escuchas de Larsen y Villarejo, la Agencia Tributaria informó con una extraordinaria velocidad a la Justicia a principios de septiembre (un mes y medio después de las grabaciones y con agosto en medio) de que el rey Juan Carlos I no tenía ninguna cuenta en Suiza, con una celeridad que hacía barruntar cierta imprudencia. El 7 de septiembre por la mañana la fiscalía anticorrupción solicitaba el archivo del caso porque los hechos habrían sucedido durante el reinado de Juan Carlos I y por tanto se le aplicaba la inviolabilidad; el 7 de septiembre a mediodía el juez archivaba el caso. Fin de la historia judicial sin que nadie (salvo la extraordinariamente diligente Agencia Tributaria) sea capaz de negar los hechos. Finalmente supimos que la Agencia Tributaria no fue muy eficaz en su investigación, pues se limitó a constatar que Juan Carlos I no declaraba tener cuentas en Suiza[59]. Nadie dudaba que no las hubiera declarado. Precisamente ahí estaba el asunto.

En 1979 se habían sacrificado el interés económico y las relaciones exteriores de España a los negocios ilegales de la Corona. En 2007 se habían sometido la política económica, el tejido empresarial español y las relaciones económicas de España a los negocios ilegales de la Corona. En 2018 se burló la legalidad y se sacrificaron los derechos políticos del Congreso de los Diputados, la transparencia y la lucha contra la corrupción para tapar los negocios ilegales de la Corona.

La protección al monarca hacía retorcer (vulnerar) la legalidad hasta extremos que hacían pensar que de una monarquía parlamentaria estábamos pasando a un parlamento monarquizado.

Estos son solo tres ejemplos que nadie ha negado, pero marcan una

línea que abarca los cuarenta años de reinado constitucional. Desde el principio hasta la actualidad, las instituciones se han sometido a los intereses privados de la Casa Real. Porque no son tres ejemplos de corrupción, esto es, de algo condenable moralmente. Son ejemplos de cómo España podría haber funcionado mucho mejor, más digna y democráticamente, con una política económica más racional… pero era más importante engordar las cuentas de su monarca.

En 1979 el petróleo era el principal motivo de una severísima crisis económica. En 2007 las constructoras se habían forrado y estaban a punto de hacer estallar el país. En ambos momentos los intereses del monarca, sus comisiones y negocios ilegales y la complicidad cortesana de nuestros gobernantes y empresas impedían que los problemas más relevantes que conllevaban un intenso sufrimiento social de los españoles de a pie se abordasen con racionalidad y patriotismo: los españoles vivieron peor para que su rey viviera mejor.

Continuidad dinástica:

las malas compañías

¿Ha sido Juan Carlos I la oveja negra de la Casa Real? ¿Se trata de una institución pulcra en la que se coló una manzana podrida? ¿O más bien es una forma estructural instalada en la monarquía española?

El número de corruptos ligados íntimamente a la Zarzuela es abrumador. El caso de Prado y Colón de Carvajal es el más evidente, pero ni mucho menos el único. El nombre de Mario Conde apareció directamente ligado a la fortuna de Juan de Borbón, el conde de Barcelona y padre del rey Juan Carlos I:

Hasta el punto de que, cuando el cáncer acabó con su vida el 1 de abril de 1993, el entonces presidente de Banesto se atribuyó haber sufragado parte de los gastos médicos de don Juan en el Hospital Universitario de Navarra. Sí logró administrar el escaso patrimonio de don Juan de Borbón y parece que logró arrebatar al Banco Central las cuentas del rey cuando Alfonso Escámez se jubiló como presidente del Banco Central en pleno proceso de fusión con el Banco Hispano Americano[60].

Según documenta en La soledad del rey José García Abad, Mario Conde utilizó su íntima cercanía con Juan de Borbón para convertirse en un Rasputín de Zarzuela hasta el punto de lograr que el rey Juan Carlos cesase a Sabino Fernández Campo como jefe de la Casa del Rey y colocara en su lugar a una persona cercanísima al banquero, Fernando Almansa. Javier de la Rosa también se une al grupo de corruptos cercanos a la Zarzuela:

El financiero corrupto Javier de la Rosa fue todavía más osado e intentó utilizar el flujo incesante de petrodólares de los kuwaitíes de KIO para acercarse directamente al monarca. Su interlocutor no era otro que el diplomático Manuel Prado y Colón de Carvajal, amigo íntimo del rey en aquel momento. El primer intento exitoso de De la Rosa se produjo en 1990 cuando, en el último momento, consiguió colarse entre el grupo de empresarios liderado por Pedro de Mir que decidió regalar al monarca un exclusivo prototipo de la alemana Porsche. […] De la Rosa ha repetido en diversas circunstancias que el dinero era para reponer pérdidas generadas por Prado en el patrimonio del monarca. […] Lo cierto es que el dinero acabó en las cuentas de sociedades cuyo titular era Prado. Sin embargo, el juez británico de la Superior Commercial Court británica, Jonathan Mance, en la sentencia civil del caso, no dudó en definir a Prado como "un hombre de negocios muy próximo al Palacio Real español". Durante el juicio, además, quedó claro que Prado había actuado como representante del Estado español, cuando gobernaba Felipe González, en una cumbre con la dirección de KIO en El Cairo para intentar encontrar una solución extrajudicial al conflicto[61].

En las escuchas de Corinna Larsen añade otro nombre: Juan Miguel Villar Mir. Villar Mir fue vicepresidente del Gobierno para Asuntos Económicos y ministro de Hacienda en el primer gobierno de la monarquía, bajo la presidencia de Carlos Arias Navarro. Después se embarcó en los negocios de la construcción con OHL. En 2007, Arabia Saudí anuncia la construcción del AVE entre Medina y La Meca. Diversas empresas españolas lideradas por Villar Mir presentan dos ofertas que finalmente se fusionan en una sola (según algunas fuentes por la gestión del ministro de Fomento, José Blanco[62]). En 2011, Juan Carlos I firma un decreto según el cual "la destacada y dilatada trayectoria de don Juan Miguel Villar Mir, al servicio de España y de la Corona, merece ser reconocida de manera especial, por lo que, queriendo demostrarle mi real aprecio, vengo en otorgarle el título de marqués de Villar Mir, para sí y sus sucesores"[63]. En 2012 se firma el contrato por el que el AVE entre Medina y La Meca lo harán constructoras españolas. El

protagonismo del rey Juan Carlos I en ese contrato no solo no se ocultó, sino que se mostraba con orgullo, como muestra de la capacidad diplomática del rey Juan Carlos I[64].

Villar Mir ha aparecido en múltiples casos de corrupción ligados sobre todo al PP: aparece reiteradamente como uno de los constructores donantes del PP en la contabilidad que manejaba Bárcenas y está siendo investigado en el caso Lezo y en el del tren de Navalcarnero (Madrid). Lo cierto es que, pese al cerco judicial, Juan Manuel Villar Mir envejece sin ser juzgado ni, por supuesto, encarcelado. Cuando le grabaron explicando la falsificación de un certificado médico para eludir una citación judicial, la justicia archivó el asunto sin hacer el menor trámite[65].

Tampoco parece que la corrupción de nuestra Casa Real sea un asunto individual de Juan Carlos I, sino que alcanza a las tres generaciones que han convivido en estos cuarenta años. Según la versión oficial, Juan de Borbón, padre de Juan Carlos I, había sido un personaje extraordinariamente austero y llegó a morir en algo parecido a la pobreza. Esta, de hecho, es una de las excusas que se han dado al comportamiento corrupto de Juan Carlos: al ver el sufrimiento económico de su padre se prometió a sí mismo que nunca más volvería a pasar hambre. Y eso le llevó a robar millones de euros como si no hubiera un mañana.

Sin embargo, el 31 de marzo de 2013 El Mundo publicó una información según la cual Juan de Borbón había muerto con unos mil millones de pesetas de los cuales 728 millones estaban en tres cuentas en Suiza. Juan Carlos I habría heredado 375 millones de esas cuentas: “Los albaceas recomendaron a los herederos no repatriar el dinero acumulado en el extranjero por cuestión de ‘imagen’”, contaba la información[66]. Don Juan había tenido cuentas en Suiza, pero, nos contaban, el rey Juan Carlos I no, o al menos no durante mucho tiempo: el dinero se lo habrían gastado en pagar deudas y obligaciones de los condes de Barcelona, las cuentas suizas se habrían cerrado en 1995 y la Casa Real mostraba su “‘convicción’ [sic] de que los albaceas se ocuparon de liquidarlo, destacando que Hacienda tampoco tiene posibilidad de explicarlo, al tratarse de datos de hace casi 20 años”[67]. Nunca la Casa Real aportó documento alguno que acreditase su versión que, en todo caso,

ratificaba las acusaciones contra el padre del entonces rey.

Si la generación del padre y del abuelo están manchadas por la corrupción no parece muy necesario explayarse con la situación de la menor generación de adultos de la familia del rey. Por primera vez en la historia de España ha sido juzgada la hermana del rey, la hija del rey emérito, que no fue condenada pero sí obligada a devolver el dinero fruto de delitos con el que se había enriquecido. Por primera vez, el cuñado del rey, yerno del rey emérito, ha estado más de dos años en la cárcel condenado por delitos de corrupción. Fueron múltiples las administraciones públicas que entregaron dinero de todos para los negocios de Iñaki Urdangarin. El Ayuntamiento de Madrid pagó, "en concepto de donación", 120.000 euros de fondos públicos en 2007 a la Fundación Deporte, Cultura, Integración Social (FDCIS), presidida por Diego Torres con Iñaki Urdangarin de socio. "Sin que se haya podido hasta ahora justificar a qué servicios corresponde el cobro de las citadas cantidades", decía el ayuntamiento en una carta años después. La excusa era el diseño del logo de la candidatura olímpica de 2016[68]. "Tener a Iñaki Urdangarin en el proyecto para mí era un gran aval", explicaba Jaume Matas, que ligaba obviamente los pagos a Urdangarin a su condición de yerno del rey: "La familia real es fundamental para Mallorca. No sé las cifras, ni las cantidades. Nosotros hemos hecho todo lo posible para que ellos estuvieran bien. Nos interesaba estar bien con Urdangarin y, especialmente, con la familia real"[69].

Las malas compañías de la familia real también afectan al rey Felipe VI y a la reina Letizia como mínimo en la persona de Javier López-Madrid, yerno de Villar Mir y sucesor en OHL hasta que las causas judiciales lo impidieron, además de "compiyogui" de los reyes.

El rey reina, pero también gobierna

No hace falta hacer un análisis exhaustivo de los casos de corrupción que han rodeado (o penetrado) a la Casa Real. Para eso existen múltiples investigaciones que siempre han tenido menos altavoces que los merecidos.

Lo que nos interesa a efectos de discutir si la oposición a la monarquía puede ser un motor de movilización política es que es relativamente fácil instalar la idea (más que obvia) de que la monarquía española tiene un problema estructural de corrupción, que no es solo una cuestión moral, sino que por un lado ha supuesto un paraguas para la corruptela generalizada en la política y la economía españolas; y, por otro, ha condicionado decisiones políticas y comerciales que han supuesto una vida peor para los españoles. Es decir, la monarquía no es una cuestión meramente simbólica ni su corrupción es simplemente estética; afecta a la soberanía democrática española y a la toma de decisiones políticas que deterioran la economía de los españoles.

El rey reina, pero lo peor es que también gobierna. O, al menos, sus intereses condicionan al Gobierno en contra de los intereses de los españoles.

No es inocuo que cuando los españoles sufren las consecuencias de la crisis del petróleo de los setenta, su jefe de Estado condicione su compra a sus intereses particulares como comisionista. Tampoco que cuando España se endeuda con infraestructuras innecesarias y los constructores dirigen el país a través de sobornos, uno de los que recibe comisiones por los negocios de la construcción sea el jefe del Estado. Y mucho menos que un país con un problema de suficiencia energética, que podría corregirse dadas las horas e intensidad de luz solar, los vientos y las mareas que tenemos, tenga en su vértice institucional a alguien que se embolsa una comisión por cada barril de petróleo que compramos a una dictadura y que dejaría de cobrar si hiciéramos la imprescindible transición

energética.

Cada vez está más generalizada la justa idea de que la Casa Real tiene un problema con la corrupción parecido al que tiene el PP. O, más bien, que los españoles tenemos un problema con la corrupción de la Casa Real parecido al que tenemos con la corrupción del PP. Siendo la corrupción el principal problema que tiene España después del paro según las encuestas del CIS, la vinculación de la Casa Real con la corrupción es demoledora para esta y un peso difícil de remontar.

Que la corrupción de la Casa Real es una de las causas que ha ayudado a generalizar la corrupción en España es algo indudable. En primer lugar, porque al poner a los distintos Gobiernos al servicio de esos intereses privados introducía la corrupción en el funcionamiento ordinario de la administración. Segundo, porque probablemente el principal poder del rey es mucho más cultural que político: tiene una inmensa capacidad de impregnar la cultura política del país, pues lo que hace el rey aparece como lo normal; si el rey se lleva unas comisiones por importaciones, contratos, etc., ¿por qué no va a hacer lo mismo el ministro, el director general o el partido de gobierno? Y al verlos a ellos, ¿cómo no va a hacer lo mismo el consejero de Presidencia y el concejal de Urbanismo? Y, en tercer lugar, porque la inviolabilidad de la Corona puede ser en última instancia un aval colosal para los corruptos. ¿Con qué excusa se va a meter en la cárcel a ningún comisionista si se cierran en falso las investigaciones sobre las documentadas comisiones del rey Juan Carlos I por el AVE saudí? ¿Volverían a condenar a Isabel Pantoja por su relación con los negocios de Julián Muñoz tras la absolución de Cristina de Borbón? ¿Y a Urdangarin si no se investiga a Juan Carlos I?

La corrupción de la Casa Real genera corrupción en todas las esferas institucionales y empresariales que dirigen el país. Así, cuando existe una grave crisis institucional que señala la corrupción como uno de los principales problemas de España, la monarquía queda señaladísima. Y, como hemos visto, el tímido intento inicial de acotar la familia real a los escasos miembros de la familia que aún no han sido señalados por comportamientos corruptos parece haber tenido escasísimo éxito en la percepción popular de la monarquía.

El paralelismo con el PP es evidente: nadie cree que con la salida de Mariano Rajoy este haya quedado limpio de corrupción; del mismo modo, la abdicación de Juan Carlos I en Felipe VI ha podido ser inevitable en términos higiénicos, pero no parece haber devuelto oxígeno a la institución monárquica.

Un rey no se mete en política

Probablemente el descrédito de la monarquía tiene mucho que ver con todos los casos de corrupción e impunidad que han vertebrado su trayectoria. Sin embargo, Felipe VI había logrado en los primeros años de su reinado aparentar cierta irrelevancia política, que es lo mejor que se puede decir de un cargo político sin legitimación democrática. Había adoptado la necesaria apariencia de neutralidad y de defensa de valores universales (la concordia, el diálogo, la unidad) siempre con tono integrador y más o menos irreprochables.

Pero todo cambió con el 3 de octubre de 2017 con su discurso tras la movilización soberanista catalana del 1O. Es posible que Felipe VI no tuviera ninguna alternativa que le permitiera seguir apareciendo como el rey de todos. El Gobierno de Rajoy había decidido abdicar de la política para resolver el conflicto territorial más importante que ha tenido España desde la dictadura franquista.

Sin embargo, la monarquía española había sobrevivido gracias a haberse apartado de los conflictos políticos por muy mayoritaria que fuera una posición. En las manifestaciones contra la guerra de Irak se coreaba a menudo un “Que hable el rey” que no fue escuchado por Juan Carlos I (de quien tampoco cabía esperar una posición excesivamente pacifista). Sin embargo, la exigencia de posicionamiento real la dirigía en 2003 la porción del pueblo español que menos identificada se podía sentir a priori con la monarquía. Juan Carlos I nunca opinó públicamente sobre ningún tema espinoso, disfrazaba de neutralidad elementos notablemente ideológicos sin hacer discursos obscenamente reprochables: quien le criticara tomas de posición lo tenía que hacer o bien desde la apariencia de sectarismo o bien desde una interpretación rebuscada próxima a las teorías de la conspiración.

Es evidente que culturalmente la monarquía en España sirve para consolidar los factores culturales e ideológicos más conservadores, tradicionalistas y ligados al catolicismo. Ello tiene un impacto

político incalculable dado que el rey es una figura supuestamente apolítica y neutra. Un ejemplo nítido se dio en los actos de construcción de la legitimidad dinástica en 1977 con el príncipe Felipe, y se repitió en 2018 con la princesa Leonor.

En 1977 se produjo el acto de nombramiento de Felipe de Borbón como príncipe de Asturias. Se celebró en la basílica de Covadonga y "allí [Felipe] recibió una cruz de la victoria y el rey Juan Carlos le dijo 'esta es también tu cruz. Tu cruz de rey'"[70]. Casi cuatro décadas después el ya rey Felipe VI repetía el ritual con su hija mayor, Leonor de Borbón. El nombramiento dinástico como princesa de Asturias se producía de nuevo en la basílica de Covadonga con la entrega del padre a la hija de una joya que representa esa cruz de la victoria.

La leyenda cuenta que don Pelayo se rebeló contra los gobernadores musulmanes tras aparecerse ante él la Virgen María y entregarle una rama de roble que era, según habría explicado la Virgen a don Pelayo, la cruz de la victoria, con la que vencería a los musulmanes. Esa es la misma que Felipe heredaría, según Juan Carlos I, simbólicamente de don Pelayo en 1977. Esa es la cruz de rey de España. El lema que lleva inscrito la joya, del siglo X, es "Hoc signo tuetur pius. Hoc signo vincitur inimicus" ("Con este emblema se defiende al piadoso. Con este emblema se vence al enemigo").

Estos dos actos representan a la perfección la capacidad de influencia ideológica que tiene la monarquía cuando simula "no meterse en política". Estamos ante uno de los actos dinásticos más relevantes de la monarquía, el que da continuidad, el que introduce a un niño (o niña si no hay más remedio) en el ciclo hereditario y en el espacio público. Ni en 1977 ni en 2018 hubo crítica alguna por estos actos. Quien hubiera levantado la voz habría aparecido como alguien histriónico decidido expresamente a criticarlo todo.

Sin embargo, el acto está cargadísimo de ideología y ubica la España oficial, la de 1977 y 2018, en una idea de nación muy específica. Es un relato según el cual España es una comunidad nacional cuya esencia está en la comunidad cristiana asturiana que comandó don Pelayo; que los musulmanes que nacieron, vivieron y murieron en la península ibérica no solo no eran españoles sino enemigos invasores; que la tarea del rey es proteger la España

cristiana (defender al piadoso) y vencer al enemigo, al musulmán. “Esta es también tu cruz. Tu cruz de rey”.

De este tipo de intervenciones con rotundo calado político está trufado un reinado. Esa es su mayor fuerza. La introducción de valores e ideas como neutras, hacer percibir cualquier relato distinto como alternativo, es decir, ajeno a la normalidad. De un tiempo a esta parte viene siendo mucho más habitual considerar exactamente igual de españoles a Maimónides, a Averroes y a Alfonso X el sabio (o todos lo son por nacer en el territorio actual de España o ninguno lo es porque entonces no existía algo así como España). Es una tendencia claramente creciente en la academia. En una sociedad secularizada como la de 2018 y supuestamente hostil al nacionalismo esencialista, lo normal sería considerar histriónico un acto que siga haciendo recaer la historia y la esencia de España exclusivamente en un ADN católico, milagrero y antimusulmán; pero la monarquía tiene la capacidad de colocar lo ideológico como neutral, lo histriónico como natural. Ese poder es inigualable. E impagable.

Es el mismo poder que ha aplicado desde 1975 con mensajes en Nochebuena (el propio hecho de hacerlo en Nochebuena —fiesta vinculada a la tradición religiosa— y no en Nochevieja —fiesta civil — ya es una decisión de carácter ideológico) siempre con la apariencia de neutralidad de cada época.

Teniendo tal capacidad de penetración ideológica, es suicida para la monarquía mostrarse políticamente beligerante en aspectos que no ofrecen la apariencia de neutralidad. Un rey no tiene legitimación democrática. En el siglo XXI la única legitimación que puede tener un rey es negativa: un rey aparece como legítimo si no molesta. Las monarquías que sigue habiendo en Europa generan un notabilísimo consenso en países en cuya historia los reyes no han sido obstáculos relevantes para una exitosa construcción de regímenes democráticos: cuando se dice que muchas de las principales y más exitosas democracias liberales son monarquías se oculta que, precisamente, la relación histórica de esas monarquías con las libertades y la democracia es muy distinta de la que han tenido los Borbones en España desde Fernando VII al propio rey Juan Carlos I.

Pese a todo, como hemos visto, en España durante mucho tiempo la

monarquía generaba algo parecido a ese consenso gracias a la habilidad de Juan Carlos de Borbón. Si bien en la izquierda política más nítida la república ha jugado un papel cohesionador, el apoyo mediático y de los partidos centrales ha sido férreo, al menos hasta la aparición del caso Noos y los primeros suspensos en el CIS.

Del campechano al burócrata invisible

Cuando en 2014 Felipe VI sucedió a Juan Carlos I, el perfil hagiográfico del nuevo monarca no buscaba acentuar rasgos épicos sino todo lo contrario, más bien funcionariales. No era un rey campechano ni populachero sino "el rey más preparado de la Historia de España", un tipo sin la simpatía de su padre pero con capacidad intelectual, formación, estudios y seriedad perfectas para llevar a cabo sus tareas sin estridencias, sin que se le pudiera poner un pero, que es lo mejor que se puede decir de un rey.

Felipe VI no empezó su reinado en unas condiciones idílicas. La abdicación de su padre fue la consecuencia de la suma del deterioro de la confianza en la monarquía y una grave crisis de régimen que brotó con el 15M y se trasladó al espacio político-institucional en las elecciones europeas de mayo de 2014, un mes antes de la renuncia de Juan Carlos I. Desde entonces, Felipe VI fue sorteando las dificultades de la situación política con cierta habilidad.

Los resultados electorales de diciembre de 2015 y junio de 2016 colocaban al rey en una situación compleja. De los pocos actos reglados en los que el monarca tiene cierta libertad política, uno es la propuesta de candidato a la investidura tras unas elecciones generales. Hasta las elecciones de 2015 eso no había supuesto ningún problema porque solo había una alternativa de gobierno viable: la fuerza política con más votos. En 2015 no era así, y ello ponía a Felipe VI bajo el riesgo de aparecer como parcial. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si dos candidatos (Mariano Rajoy y Pedro Sánchez) hubieran reclamado para sí la candidatura a la investidura? Pero no se dio el caso, y Mariano Rajoy fue fiel a sí mismo y rechazó el encargo de intentar lograr la mayoría parlamentaria para ganar tiempo. Esto supuso el incumplimiento de la Constitución (el rey puede elegir el candidato, pero tras la ronda de consulta con los partidos tiene que proponer un candidato y no lo hizo[71]), pero este hecho no pasó de lo anecdótico: solo se criticó

a Rajoy por el desaire y la irresponsabilidad, nunca a Felipe VI por quebrantar su deber constitucional. La actitud de Rajoy facilitó que en la segunda ronda Felipe VI propusiera a Pedro Sánchez la candidatura: ello desatascaba la legislatura, dado que no se podía volver a convocar elecciones sin algún debate de investidura, que es lo que hace correr los plazos. Tras la repetición de las elecciones la crisis del PSOE despejó el camino a Rajoy, único candidato que aparecía como posible (algo que después quedó rotundamente desmentido por la moción de censura de 2018) y se cerró el ciclo de elecciones e investiduras sin que Felipe VI sufriera rasguño alguno en una situación institucionalmente muy compleja.

Fue el conflicto catalán el que provocó que Felipe VI mutara el papel que la monarquía había tenido en España desde 1978 y tomara partido de forma beligerante con una posición que puede que fuera mayoritaria (o no) entre el conjunto de los españoles pero que desde luego no era unánime.

¡Acoso a la Corona!

El 28 de octubre de 2018, el diario conservador y monárquico La Razón titulaba en su portada: “Zarzuela vira el foco a la heredera ante el acoso a la Corona”. Era la constatación de la consciencia del deterioro de la imagen de la monarquía y de Felipe VI entre los españoles.

Lo que La Razón llamaba “acoso” fue una cascada de reprobaciones contra la monarquía en el Parlament primero, en municipios catalanes después (encabezados por Barcelona) y los anuncios de IU y Podemos de expandir por toda España resoluciones análogas.

Pero tal acoso no era la causa del evidente desgaste de la monarquía. Había contribuido mucho más la propia Casa Real y los medios, jueces y partidos cortesanos. La corrupción de Urdangarin, las comisiones, testaferros y cuentas suizas atribuidas a Juan Carlos, el blindaje judicial y la protección política para impedir que se investigasen posibles delitos (convirtiendo las sospechas en evidencias) habían ayudado a señalar a Zarzuela como una escuela para gobernantes corruptos.

El mayor error para la monarquía lo cometió Felipe VI el 3 de octubre al protagonizar una posición nítidamente política y asociada exclusivamente con las posiciones más duras representadas por el PP y Ciudadanos y que nutrirían la salida de Vox de la irrelevancia; de ahí se siguieron astracanadas monárquicas de Pablo Casado o el fervor cortesano en el acto de Vistalegre de Vox. Todo ello contribuyó decisivamente a ubicar con nitidez al rey Felipe VI en un margen político claramente de derechas cuando su difícil legitimidad necesita imperiosamente descansar sobre una apariencia de neutralidad, de asepsia ideológica. Como explicaba Guillem Martínez en un extraordinario artículo, “la última vez que la monarquía hizo eso de manera tan ostensible, inició su cuenta atrás” [72].

El rey de la derecha…

o la república de toda España

El 15M nos dio una lección muy importante de la que deberíamos tomar nota si nos tomamos en serio las posibilidades de que el cambio en el país, la modernización, democratización y las reformas sociales, ecológicas e igualitarias vengan de la mano de la esperanza republicana. Y si es cierto que el 15M y su herencia han arrinconado la cultura de la Transición desde la centralidad hasta el margen derecho, la debilidad de su concreción, el régimen del 78, no puede ser pequeña.

De acuerdo con la enseñanza del 15M, no podemos ser ilusos. No vendrá ninguna república si aparece como el proyecto de una dirección de un partido ni si es percibido como un proyecto de izquierdas. Ni lo hará de la mano de un movimiento republicano cuya base sea la derrota de la II República en el siglo pasado. Protagonizada por los partidos o por quienes ya éramos republicanos hace décadas, la república suena más a histrionismo identitario que a proyecto de un sentido común democrático y modernizador para el futuro del país.

Sin embargo en 2018, al tiempo que los partidos nacionalistas o de izquierdas hacían declaraciones institucionales, surgían movimientos capilares como las consultas en la Universidad Autónoma de Madrid[73] o en Vallecas[74], un tipo de movimiento cuyo efecto político puede ser mucho más importante que el que consiga para el país ningún partido. Al menos en aquel momento.

Cuando IU o, sobre todo, Podemos intentan protagonizar el declive monárquico y la emergencia de un posible movimiento republicano, lo último que hacen es fortalecer un movimiento que necesita aparecer como un fenómeno popular, espontáneo y transversal. Como impulso de partidos, la república tiene una importante

capacidad de reforzar lazos internos. Es la identidad más fuerte y emotiva de la izquierda española. Y ese es probablemente el principal obstáculo para que la república sea el nombre del cambio.

Por ello cabe pronosticar que la república no la traerá ninguno de los partidos que existen en 2021, sino un movimiento difuso que tenga tanta capacidad de identificarse con la España realmente existente como la tuvo el 15M. Por su lado, los partidos republicanos deberían exponer un republicanismo difuso, valores republicanos y no enfrentarse frontalmente al rey, sino más bien mostrarse decepcionados con él, denunciar la toxicidad de la corte, apostar por una modernización de España para la cual la monarquía y todo lo que trae consigo son un obstáculo. Si no es así, la república puede servir como cohesionador de un espacio político de izquierdas, pero no como nombre del cambio en España. Y así estaremos arruinando las posibilidades transformadoras de la república.

Porque no se ha planteado ningún posible nombre del país que queremos construir en el futuro mejor que república; ni hay nada como los privilegios, la falta de transparencia, la impunidad, las omnipresentes certezas de corrupción, el machismo y el arcaísmo de nuestra monarquía para representar el país del pasado que necesariamente dejaremos atrás. La república puede ser la joya del cambio, es el nombre de la democracia y la modernidad. Y tiene todo el potencial para que, de su mano, España mire por encima del hombro al siglo XXI.

TERCERA PARTE

EL EMPERADOR ESTÁ DESNUDO

Aquello inquietó al emperador, pues barruntaba que el pueblo tenía razón; mas pensó: “Hay que aguantar hasta el fin”. Y siguió más altivo que antes; y los ayudas de cámara continuaron sosteniendo la inexistente cola.

Hans Christian Andersen

Con lealtad al rey

Hay un cuento que todo actor político debería tener presente continuamente: el del traje nuevo del emperador, de Hans Christian Andersen. En aquel cuento un emperador vanidoso contrata a dos sastres que le prometen un traje mágico. La magia del traje consiste en que los imbéciles serán incapaces de verlo y por tanto percibirán al emperador desnudo. Pero la gente inteligente verá la preciosidad de traje que luce el monarca. Los sastres, en realidad, son unos estafadores. No hay traje alguno. Pero como nadie quiere pasar por imbécil todo el mundo simula fascinación por la belleza del traje nuevo del emperador. El propio emperador y su corte hacen como que ven un traje maravilloso. Y, por no parecer imbéciles, permiten que el monarca se pasee en pelotas por la ciudad, donde los súbditos esperan ver (o no) el traje mágico anunciado. De nuevo, por no parecer imbéciles, los súbditos aplauden y lanzan exageradas alabanzas a un traje que ninguno de ellos está viendo, no porque sean imbéciles (como les han convencido), sino porque el traje no existe. Solo un niño se atreve a decir la verdad: “El emperador está desnudo”, e inmediatamente todos los súbditos se dan cuenta de que así es, que no es que sean imbéciles, sino que les han mentido.

El cuento original termina ahí. Pero se echa en falta una continuación. ¿Qué pasa con el niño? Porque si es crucial aprender a denunciar la desnudez del emperador por mucho que nos llamen imbéciles, es imprescindible saber qué pasa con quien da el paso de súbdito a ciudadano y se atreve a comunicar esa verdad incómoda.

Con el niño pueden pasar dos cosas: que el emperador lo considere un traidor que rompe la perfecta armonía y lo aparte por tener voz propia. Es lo más habitual, es lo que permitiría al emperador y a la corte a su alrededor una comodidad a corto plazo y es lo que destruiría al emperador en el medio plazo.

La otra opción es que el emperador se dé cuenta de que no necesita cortesanos que le hagan la pelota sino ciudadanos como el niño que

le cuenten lo que ven realmente para evitarle el ridículo. Ese emperador, que habría aprendido del error, despediría a su corte de palmeros y buscaría unos cuantos niños como el bocazas que desveló el fraude del traje para tener consejeros que realmente le ayuden a ser un buen gobernante.

Cuando en la toma de posesión de los altos cargos políticos en España tienen que jurar o prometer “con lealtad al rey”, ¿qué se espera de ellos? ¿Que le hagan la pelota o que se atrevan a decir la verdad?

El traje nuevo de la Transición

El mito de la Transición tuvo bastante que ver con el traje del emperador, especialmente desde su giro aznarista, desde ese martillo de herejes llamado patriotismo constitucional. Quien criticara la Transición (la que nos estaban contando) era un imbécil, era alguien no informado, un frívolo que coqueteaba con la caída de un castillo de naipes sin cuya estabilidad estábamos condenados a otra guerra civil porque los españoles somos así, en cuanto nos dejan nos liamos a garrotazos. Además de imbéciles, los críticos con el mito eran totalitarios, populistas, amigos de los terroristas…

A ello ayudó considerablemente el relato generacional: al ser una obra legada a las generaciones venideras por una quinta lúcida que supo entenderse en vez de matarse, quienes venían detrás criticaban lo que desconocían. No habéis vivido la Transición, no sabéis de lo que habláis. El argumento era completamente simple y quizás por ello eficaz.

El argumento era paradójico, dado que según el relato de la Transición esta fue obra de un grupo muy reducido de personas. Que alguien perteneciera a la misma generación (década arriba o década abajo) que Adolfo Suárez no le daba ningún conocimiento sobre lo que había sucedido en la Transición superior que a alguien que hubiera nacido después pero hubiera estudiado, leído o investigado sobre los hechos de los años setenta. Nadie se imagina que para hablar sobre la Segunda Guerra Mundial o sobre las Cortes de Cádiz se exija haber vivido en aquella época.

Pero sobre todo, si es cierto lo que venimos desarrollando en estas páginas, la Transición con la que discutimos, a la que se aferran unos y quieren superar otros, no son los hechos realmente sucedidos en la España de los últimos años setenta y primeros ochenta del siglo XX, sino el relato construido en la España de mediados de los noventa primero y de los primeros años del siglo XXI después. La Transición de la que hablamos no son unos hechos históricos, sino

un relato construido después, una cultura política vertebrada por ese relato y, finalmente, una estructura política, institucional e ideológica afirmada y condicionada desde y para ese relato. Por lo tanto, haber sido adulto en los años setenta no aporta ni mucho ni poco a la posible crítica al régimen de la Transición entre otras cosas porque lo que se discute no es qué sucedió en aquellos años.

Hasta 2011 las voces críticas con la Transición eran escasas y políticamente muy escoradas. A 2011 los españoles llegan sumidos en una enorme crisis económica internacional que supone una novedad absoluta en la historia de las crisis del capitalismo y que también transforma el tipo de oposición emancipadora.

Reforma es revolución

Al comienzo de la crisis de 2008, se comparaba con la del 29, pero en aquella el poder político reaccionó con medidas contracíclicas, haciendo al Estado protagonista de la recuperación impidiendo el hundimiento del consumo mediante el incremento del gasto público. El New Deal y la socialdemocracia de posguerra fueron muestras de una impresionante capacidad de adaptación del capitalismo. Sin embargo, en el 2008 este había perdido la flexibilidad que garantizaba su supervivencia.

Decían los reformistas clásicos que el capitalismo era altamente elástico porque en momentos de crisis el sistema financiero socorrería al Estado. Todo lo contrario de lo que ocurrió con la crisis de 2008. El sistema financiero mundial colapsó y fue el sector público el encargado de rescatarlo. En España esto fue especialmente dramático con el colapso de las cajas de ahorro, primero privatizadas de facto, luego de iure y finalmente arruinadas. En 2019 el Banco de España cifraba en 65.725 millones de euros el coste del rescate bancario, de los cuales solo el 21,35% sería recuperable[75]. Además, el saqueo de las cajas se convirtió en uno de los símbolos de la alianza de las élites políticas y las financieras, especialmente representadas en personas como Rodrigo Rato y Miguel Blesa y en hechos como la estafa de las preferentes o el uso de las tarjetas black. No, el sistema financiero en el siglo XXI no socorre al Estado cuando hay crisis como pronosticaron los reformistas: en el capitalismo del siglo XXI es el Estado el que socorre al sistema financiero.

Decían también los reformistas de hace un siglo que el capitalismo era altamente flexible porque había conseguido generar unas capas medias muy fuertes a las que se incorporaban crecientemente sectores del proletariado. Sin embargo, la crisis económica destrozó las rentas medias y depauperó a los sectores trabajadores. Según un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y la

Fundación BBVA de 2016[76], en 2007 algo más del 60% de la población española se encontraba en estratos medios de renta y un 26,6% en las rentas bajas. En 2016 el 52,3% se situaba en las rentas medias (tres millones y medio de personas menos) mientras el 38,5% de los españoles tenía rentas bajas (casi seis millones de personas más que en 2007). Según el Observatorio Social de La Caixa, en términos reales "entre 2007 y 2013, la renta media del 10% más pobre disminuyó aproximadamente el 30%"[77]. No, las capas medias no se robustecen e incorporan a los trabajadores como pronosticaban los reformistas. Al contrario, nuestra anterior crisis expulsó de las capas medias a millones de personas que bajaban en la escalera social.

También decían los reformistas que gracias a la fortaleza de la lucha sindical los trabajadores habían logrado conquistas sociales que tenían como consecuencia no deseada la resistencia del capitalismo en épocas de crisis económica. Lo que se hizo en la crisis de 2008 fue simplemente acelerar el ritmo en el constante recorte de derechos laborales de los trabajadores de cada país de Europa. Mostró esta deriva un estudio francés[78] que constataba el armónico y constante recorte de derechos laborales como respuesta no a la crisis de 2008, sino a la globalización económica desde décadas antes. Desde entonces, los derechos de los trabajadores van menguando y los sindicatos no logran tener fuerza siquiera para resistir a los recortes laborales. Hasta tal punto que "reforma laboral" se ha convertido en sinónimo de deterioro (irreversible) de las condiciones laborables.

Diez días después de la caída de Lehman Brothers, en cambio, la fórmula siquiera retórica por la que apostó el poder económico y político fue precisamente esa capacidad de adaptación: su máxima expresión fue la refundación del capitalismo que anunció Nicolás Sarkozy en 2008: "'La autorregulación para resolver todos los problemas se acabó; le laissez faire, c'est fini', proclamó. 'Hay que refundar el capitalismo sobre bases éticas, las del esfuerzo y el trabajo, las de la responsabilidad, porque hemos pasado a dos dedos de la catástrofe', advirtió", contaba la crónica de El País[79].

Aquello no quedó más que en un eslogan. La crisis de 2008 evidenció que el capitalismo ha perdido (o al menos ahora no tiene

disponible) su histórica flexibilidad. La única salida que el capitalismo tuvo para responder al colapso del neoliberalismo fue una radicalización del neoliberalismo. Su reforma ha sido imposible.

No sabemos cómo saldremos de la crisis generada por la COVID-19. Provocada por un agente externo, no por el propio curso de la economía, se trata de una crisis distinta a las que genera el capitalismo de forma cíclica. Son obvias las inmensas diferencias entre un virus y una guerra, pero el repentino colapso económico provocado por el confinamiento de países enteros y el cierre decretado de una gran parte del sector económico tiene más que ver con las consecuencias económicas de una guerra que con otras crisis que hemos vivido. En la zona euro el PIB cayó un 12,5% en el segundo trimestre de 2020; en España, un 18,5%. Es la caída más drástica sufrida en tiempos de paz[80].

La primera respuesta de la Unión Europea parece no tener nada que ver con la de 2008. Lejos de los rescates que imponían a los países un endeudamiento inmenso condicionado a recortes sociales traumáticos para sus poblaciones, en el inicio de la crisis de 2020 parece que la Unión Europea decidió mancomunar la deuda y generar un importante gasto público que permita recuperar la actividad evitando enormes bolsas de pobreza.

Hay dos razones para ser escépticos sobre la firmeza de este nuevo (y razonable) rumbo.

La primera, que posiblemente el giro no tenga tanto que ver con la macroeconomía como con la geoestrategia. De haber repetido el patrón de 2008 y tras la debilidad de la Unión Europea generada por aquella crisis (Brexit incluido) es probable que muchos países hubieran buscado apoyo en otras potencias. Europa se juega en esta crisis la existencia como potencia mundial o la absorción por parte de otras potencias más avispadas (singularmente China) de los países a los que la Unión Europea castigue. La apuesta por una Unión Europea que funcione, proteja a los países e intente salir unida y cohesionada es patente en la compra centralizada de vacunas y su distribución equitativa. Es posible que estemos más ante un giro federalista hacia una Europa más unida y ordenada (lo cual ya es una excelente noticia) que ante algo así como un giro

keynesiano.

La segunda razón para ser escépticos es que contamos con el aprendizaje de la crisis de 2008, a principios de la cual muchos aseguraban que el capitalismo se refundaría, el neoliberalismo había fracasado y había un cierto consenso en la necesidad de un nuevo orden económico. Faltan unos años para poder hacer balance de la respuesta internacional (y nacional) a la COVID-19, pero lo que sí sabemos es que a la última gran crisis del neoliberalismo, el mundo (y singularmente, Europa y España) respondió con más neoliberalismo.

La rigidez inédita del capitalismo es una expresión de su actual debilidad, lo mismo que su flexibilidad era la prueba de su fortaleza. Sin embargo, cualquier reforma que se introduce en el sistema resulta indigesta y se cataloga como revolucionaria. Cualquier reforma es hoy revolucionaria. La revolución hoy consiste en plantar cara, siquiera tímidamente, a los mercados (es decir, a los poderes económicos) y poner las instituciones políticas al servicio del pueblo: eso que en rigor se llama democracia.

República es reforma

Esto afecta intensamente a la propuesta republicana para España. La sustitución de una monarquía parlamentaria por la elección democrática del jefe del Estado no es una medida revolucionaria. Es simple higiene democrática especialmente cuando la monarquía sufre una descomposición que la hace profundamente disfuncional para el sistema político español. Sin embargo, la propia fragilidad del orden actual lo hace tan sensible que un cambio tan moderado y razonable sería indiscutiblemente percibido como revolucionario. Y no solo lo sería para el orden político-institucional, sino también para el orden económico. La corrupción de Juan Carlos I no aparece como un fenómeno personal de un gobernante errado: la hizo al frente de las élites empresariales españolas, fundamentalmente de las energéticas y de la construcción; capitaneó el tipo de capitalismo que hemos sufrido los españoles porque lideraba las peores prácticas corruptas que engrasaban ese funcionamiento económico.

La extraordinaria rigidez del capitalismo ha cristalizado en la desaparición de la tensión entre reforma y revolución: toda reforma económica es revolucionaria porque no existe hoy una posible transformación revolucionaria del sistema económico, pero el sistema económico tampoco tiene capacidad para digerir la más tímida reforma con orientación social.

A 2011 los españoles llegan con un Gobierno del PSOE que desde un año antes había aplicado medidas económicas de recortes sociales y de derechos laborales. Además, había una descomposición evidente del bipartidismo (por el lado del PSOE) a la que la izquierda organizada políticamente (IU) no estaba sabiendo responder.

Tres fotos de familia: El Escorial

La crisis catalana que deriva del Estatut de Catalunya abre la más severa crisis territorial que ha tenido la España de la Transición, incluida la violencia de ETA (que generó infinito sufrimiento, pero no afectó, es más, posiblemente fortaleció, a la unidad de España) y el llamado Plan Ibarretxe. Pero la ruptura de España, la ruptura de una determinada España, no es solo territorial.

La movilización en torno a la memoria democrática (y su reacción, el llamado revisionismo histórico) rompió dos de los pilares básicos del régimen de la Transición: la renuncia a una memoria histórica con bases fuertemente democráticas y antifranquistas y, sobre todo, el relato generacional de la Guerra Civil y la Transición.

Ya con la crisis económica se resquebrajan múltiples cimientos y se genera una sensación de colapso institucional.

Las crisis económicas son un caldo de cultivo excelente para la explosión de casos de corrupción. Según cuentan los expertos, en épocas de bonanza la corrupción casi siempre es conocida por delaciones familiares. Habitualmente el corrupto (varón, pues este esquema responde a las más rancias estructuras patriarcales) abandona a su esposa por otra persona más joven y atractiva y la exesposa, dolida, se venga denunciando lo que sabe (con las peculiaridades necesarias, es un esquema relativamente análogo a la explosión del tinglado corrupto del rey Juan Carlos I al romperse su relación con Corinna Larsen). En un contexto de crisis económica la cosa suele ser menos romántica: cuando menguan los recursos no llegan los sobres para todos, y alguien a quien le habían prometido ingresos no recibe el dinero previsto. Si él no tiene premio, sus compañeros de fechorías tampoco.

Sea como fuere, la sensación (acertada) de que España sufría una corrupción estructural fue demoledora para el compacto edificio del bipartidismo. Mientras subía el paro y los salarios bajaban, los

españoles íbamos conocíamos nombres de tramas nuevas cada semana: Gürtel, Púnica, Palau, Bankia, Malaya, Bárcenas, Pujol, ERE, Pretoria, Fabra, Brugal, Lezo, Noos, Palma Arena, Rasputín, Taula, Pokémon, Guateque, Poniente, Astapa, Campeón, De Miguel, Auditorio… Según El País, entre 2000 y 2017 hubo más de 2.000 casos de corrupción en España[81].

De entre ellos probablemente tres sean los más demoledores para la estabilidad del régimen de la Transición: Gürtel, Bankia y Noos dieron la sensación más evidente de que el régimen político estaba corrupto desde sus cimientos.

El caso Gürtel estalla en noviembre de 2009 y es el que mejor ejemplifica las tramas de corrupción del PP. Sus límites con otras tramas (especialmente con el caso Bárcenas) son difusos. La importancia del caso Gürtel es tal que la primera sentencia de una pieza del caso (en 2018) conllevó la primera moción de censura exitosa en cuarenta años: la que puso de acuerdo al PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, Bildu y Nueva Canaria para desalojar a Mariano Rajoy y al PP de la Moncloa. La sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional afirmaba que la trama del PP había construido un "auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local"[82].

Pero la importancia sociológica del caso es muy superior desde su estallido, especialmente cuando se le unió la publicación de la contabilidad B del PP que manejaba Bárcenas, a principios de 2013. El caso Gürtel permitió reinterpretar la fastuosa boda de la hija de Aznar con Alejandro Agag, un turbio hombre de negocios ligado a Berlusconi y a la Fórmula 1, en El Escorial. Aznar quiso hacer de la boda de su hija una megalómana ceremonia de Estado, con los principales gobernantes mundiales, incluidos los reyes de España. Una boda en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, como inaugurando una dinastía civil. Pero con el estallido de los casos de corrupción asociados al PP la lista de invitados de aquella boda se convirtió en una maldición. Ante cada caso nuevo de corrupción aparecía una foto de los culpables en la boda, empezando por Francisco Correa, de cuyo apellido toma el nombre

la trama Gürtel, testigo de la boda que regaló a la pareja contrayente 32.425 euros en gastos de la organización de la fiesta[83], y acabando por el propio rey Juan Carlos I. La boda de El Escorial pretendía ser una foto del poder y resultó ser una foto de la corrupción. O lo que es lo mismo: facilitó con un simbolismo extraordinariamente potente la comprensión de que el poder en España estaba estructuralmente corrupto.

Los casos Gürtel y Bárcenas permitieron entender cómo la corrupción no solo era inmoral sino que además tenía una importante responsabilidad en la ruina de España. Una parte indiscutible de la crisis venía por el despilfarro en infraestructuras. Y la contabilidad real, que apuntaba Bárcenas, mostraba que los dirigentes del PP cobraban importantes sobresueldos y el propio partido se financiaba ilegalmente gracias a los donativos (es decir, sobornos) pagados por los principales empresarios españoles, especialmente los constructores. Es decir, España no se había arruinado por un mal cálculo ni por delirios de grandeza, sino porque había estado gobernado por corruptos que entregaban el dinero público a los constructores que los sobornaban y blanqueaban el regalo a través de obras públicas innecesarias.

La ofensa popular se agravaba en medio de una crisis de la que habían responsabilizado a los españoles que “habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades”. Y esos españoles veíamos que los dirigentes del PP habían engordado sus altos sueldos legales por arruinar al país.

Tres fotos de familia: Bankia

El segundo caso que marcó a la población española fue el de Bankia. Reunía varias condiciones para ser de radical importancia no solo simbólica sino también material en España.

La consecuencia material directa del saqueo de las cajas de ahorro que conformaron Bankia fue la desaparición de un modelo de entidad financiera que había vertebrado la economía española durante muchísimo tiempo, que tenía en su vocación generar beneficios para los territorios de España. Poco a poco se convirtió en un banco controlado por las élites políticas, empresariales y sindicales, que engrasaba la burbuja inmobiliaria mediante la financiación de operaciones mastodónticas y la concesión de hipotecas para que la ciudadanía pudiera vivir por encima de sus posibilidades. Los miles de desahucios por no poder pagar esas hipotecas y la estafa de las preferentes pusieron cara a la ruina familiar de muchas víctimas de la gestión de las cajas primero y de Bankia después. El rescate de Bankia fue la causa principal del que España tuvo que pedir a Europa. El caso Bankia supuso la ruina individual de cientos de miles de familias y la ruina colectiva de todo el país.

El papel de Rodrigo Rato añadía un poderoso componente simbólico a la caída de Bankia. Rodrigo Rato había sido el hombre del milagro económico español. El ministro de Economía y Hacienda de Aznar, bajo cuyo mandato se superó definitivamente la crisis de 1993 y con cuya Ley del Suelo se generó la burbuja inmobiliaria que primero dio la sensación de país imparablemente rico y rápidamente explotó sumiéndonos en la ruina. Rodrigo Rato fue el hombre al que Aznar no había elegido sucesor porque era más digno que los otros candidatos y se había distanciado de él ante la guerra de Irak. Rodrigo Rato fue el hombre al que puso Rajoy al frente de Caja Madrid porque el otro candidato, Ignacio González, al que pretendía colocar Esperanza Aguirre, era demasiado corrupto

(Rato era “el candidato honrado” del PP para Bankia). Rodrigo Rato fue el hombre de España al mando del Fondo Monetario Internacional, algo que suponía el reconocimiento del mundo a su legado económico en España. El hundimiento de Rodrigo Rato era el hundimiento de una nueva mitología de la derecha económica española. Hasta tal punto que, incluso una vez encarcelado, buena parte del PP intenta distinguir al Rodrigo Rato corrupto del Rodrigo Rato ministro (lo mismo que intentarían después los monárquicos distinguiendo al Juan Carlos I rey del Juan Carlos I corrupto y que también intentaría algún sector del nacionalismo catalán con Jordi Pujol).

El colofón del caso Bankia fue el conocimiento de las tarjetas black. En realidad, cuantitativamente, eran el chocolate del loro: los directivos que se beneficiaron de ellas ya ganaban un dineral. Pero este gasto a costa de la entidad arruinada era una obscena guinda del pastel: comidas lujosas, vacaciones, copas, joyas… Las tablas de gastos con tarjetas black eran humillantes para un país al que esas élites acusaban de vivir por encima de sus posibilidades. En algunos casos tenían la poca vergüenza de pagar una comida a partes iguales con varias de estas tarjetas como si jugaran a que realmente estaban pagando ellos y repartieran educadamente los gastos a escote. Fue la pieza que llevó por primera vez a la cárcel a Rodrigo Rato y otros directivos de Caja Madrid y Bankia.

Sobre todo, las tarjetas black permitieron que muchos españoles comprendieran la complicidad en el saqueo de sectores políticos y sociales cuya misión en teoría era oponerse al PP en Madrid. La clave del éxito mafioso estuvo en que el partido supo compartir una parte minoritaria pero importante del pastel. Supo colocar a sindicalistas y dirigentes de partidos de la oposición que, gracias a ello, dejaban de ser realmente oposición. El PP tuvo la inteligencia de hacer que de su trama de saqueo vivieran también quienes estaban llamados a combatirla. El crimen perfecto.

La consecuencia democrática fue desastrosa. Madrid estuvo muchos años sin oposición real. Se cumplía con el teatro parlamentario, pero los ladrones no tenían nada que temer. Miles de personas honradas no comprendían qué pasaba en la izquierda madrileña. El PP se había infiltrado en sus cúpulas y las había neutralizado:

comprendió que era mucho más inteligente lograr un régimen cleptómano que quedarse solo en un partido estructuralmente corrupto. Y lo hizo con brillantez.

Caja Madrid-Bankia y la complicidad en la estructura mafiosa de dirigentes con mucho peso del PSOE, IU y los sindicatos permitían comprender buena parte de lo que había sucedido en Madrid en los últimos lustros. Era imposible entender el tamayazo sin la Caja Madrid de Blesa y sin las primeras tramas universitarias, aquellas en la Complutense (donde se iniciaban en la política universitaria Cristina Cifuentes e Isabel Díaz Ayuso, que después serían presidentas autonómicas de Madrid). No se podía entender bien la Universidad Rey Juan Carlos (que saltó a la fama en toda España por la organización mafiosa que, entre otras cosas, regaló títulos falsos a Pablo Casado, Cristina Cifuentes, Carmen Montón…) si pensábamos en ella como la universidad del PP en lugar de la universidad de Bankia, donde sus ladrones tenían mano para hacer y deshacer, colocar a amigos y obtener títulos para afines. Era incomprensible la década de furor constructor que arruinó el país sin el protagonismo sobre todo en Madrid de una caja que legalmente no debía tener ánimo de lucro y tuvo sed de rapiña. No había forma de explicar por qué el PP lleva 25 años destrozando la Comunidad de Madrid sin el papel desempeñado por Caja Madrid. Que los autores de estas fechorías además complementaran sus enormes ingresos regulares con todo tipo de compras, viajes, bares, efectivo… como un gracioso extra ilegal resultó demasiado obsceno.

No se puede olvidar que cuando apareció el caso de las tarjetas black Felipe de Borbón y Letizia Ortiz, ya reyes de España, compartían un chat con Javier López Madrid (consejero delegado del Grupo Villar Mir y habitual de los banquillos judiciales por tramas corruptas y otros turbios casos). Al conocer que había sido de los que habían disfrutado de las tarjetas black, los reyes decidieron arropar con todo su cariño al “compiyogui” de la reina Letizia calificando de merde las acusaciones (por las que sería condenado a seis meses menos un día de cárcel) y proponían encontrarse físicamente en vez de seguir hablando por chat, algo que se demostró imprudente… cuando el chat apareció en los medios de comunicación[84].

Las tarjetas black de Bankia fueron el referente inmediato de las tarjetas black de la Casa Real que se descubrieron después[85]. A falta de investigaciones judiciales o de algún tipo, tiene toda la pinta de que en realidad estas tarjetas fueron un instrumento de blanqueo de la fortuna del rey Juan Carlos I: este pasaría su dinero a un millonario amigo para que desde sus cuentas se pagaran los gastos privados de distintos familiares. La regularización fiscal de Juan Carlos I consistió en el pago del impuesto de donaciones como si el millonario donara el precio de los gastos de la familia del rey como quien da dinero a un hijo o a unos niños necesitados. Algo difícil de creer pero de momento oculto bajo el manto de inviolabilidades y protecciones políticas y jurídicas. En todo caso, la reacción de Letizia Ortiz y Felipe de Borbón a las tarjetas black del "compiyogui" López Madrid dejaba claro que en esa familia aquel no era un comportamiento que les resultara insoportablemente ajeno: lo demás, merde.

Tres fotos de familia: Iñaki

El tercer caso que afectó sin duda a los cimientos del régimen de la Transición fue el caso Noos o caso Urdangarin, al que se sumaron pronto los desmanes del propio rey Juan Carlos I. Los chanchullos de Iñaki Urdangarin eran un rumor bastante extendido en lo que tradicionalmente se ha llamado "los mentideros de la Villa": esas cosas que conocen todas las personas que tienen actividad política, periodistas… pero que nadie publica muchas veces porque se sabe el titular ("X es un corrupto") pero no el cuerpo de la noticia (cómo roba X). Cuando Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón se trasladaron a Washington en 2009, esos rumores explicaban que Zarzuela había decidido sacarlos de España porque era excesivamente obvio que sus negocios no eran limpios. De hecho, el caso Noos había empezado a levantarse en 2007, cuando el Gobierno balear presidido por Francesc Antich denunció un descuadre de más de 50 millones de euros en la construcción del Palma Arena, la instalación deportiva que dio nombre al caso. En 2010 empezó a hablarse del Instituto Noos, propiedad de Iñaki Urdangarin, dentro de la investigación judicial. En 2011 ya era un clamor público su participación en el caso de corrupción[86].

El caso Urdangarin rompió el llamado "manto de silencio" sobre la monarquía española. Un estudio de los profesores José Manuel de Pablos y Alberto Ardèvol-Abreu de 2009 al respecto de la publicación de un libro de conversaciones con la reina Sofía de Pilar Urbano[87], sitúa al diario Público (que se publicaba en papel entre septiembre de 2007 y febrero de 2012) como el único periódico impreso abiertamente crítico con la monarquía. Pero más allá de que las informaciones fueran críticas o más bien protegieran a la monarquía, lo que se rompe a finales de la primera década del siglo XXI no es tanto la propaganda cortesana como directamente el silencio sobre cualquier cuestión que pudiera erosionar el prestigio de la Corona.

Durante todo el reinado de Juan Carlos I se había venido conociendo información sobre sus negocios turbios y mucha más sobre sus infidelidades conyugales, pero siempre en espacios periféricos. Ningún gran medio de comunicación informaba sobre las denuncias sobre esos negocios. Y las infidelidades conyugales aparecían solo en algunos rincones de la prensa rosa. El citado libro de Pilar Urbano[88] encendió la polémica al destapar (se diría que sin querer) los planteamientos reaccionarios de la reina frente a los avances que estaba dando la sociedad española. En tal libro, la reina se mostraba partidaria del adoctrinamiento religioso en la escuela ("Se ha de enseñar religión en los colegios, al menos hasta cierta edad: los niños necesitan una explicación del origen del mundo y de la vida"), repetía todos los tópicos homófobos ("puedo comprender, aceptar y respetar que haya personas con otra tendencia sexual, pero ¿que se sientan orgullosos por ser gays? ¿Que se suban a una carroza y salgan en manifestaciones? Si todos los que no somos gays saliéramos en manifestación… colapsaríamos el tráfico. Si esas personas quieren vivir juntas, vestirse de novios y casarse, pueden estar en su derecho, o no, según las leyes de su país: pero que a eso no lo llamen matrimonio, porque no lo es. Hay muchos nombres posibles: contrato social, contrato de unión"), rechazaba el aborto ("en absoluto soy partidaria del aborto") y la eutanasia ("No soy partidaria. La vida y la muerte no están en nuestras manos") y prefería que no se informase sobre la violencia machista ("Ha ocurrido siempre. Ahora se informa más y con todo detalle. En cierto modo, se provoca un contagio, se dan ideas que otros imitan. Los que son propensos tienen un filón en esas noticias"). En 2020 Vox no se atreve a defender las posiciones de la reina Sofía.

Nada de ello debería llevar a sorpresa: la monarquía española (católica) es garante de los valores más conservadores. No hay un miembro de la familia real que no haya cumplido con todos los sacramentos de la Iglesia católica y nadie imagina que se hiciera pública la homosexualidad de ninguno de sus miembros, por ejemplo. La monarquía representa los valores más conservadores de España, desde la afición taurina al machismo, desde el catolicismo más estricto a los devaneos mujeriegos del padre de familia. Es incuestionable hasta el punto de que cuando una persona de trayectoria privada más liberal ingresa en la familia, parte del

tránsito incluye ocultar todo aquello que hiciera de ella una persona normal, con una biografía parecida a la de millones de españoles sin ninguna tacha.

Así, cuando se anunció el compromiso entre el príncipe Felipe y Letizia Ortiz, una mujer casada por lo civil y divorciada, lo primero que se hizo fue borrar todo posible recuerdo de aquella boda, las obras publicadas por su exmarido (profesor de literatura y autor de alguna novela). Poco después supimos por un libro de un primo de Letizia Ortiz que se había puesto especial empeño en hacer desaparecer la prueba de que también había abortado[89]. ¿Qué problema tendría una trayectoria así, toda ella dentro de la legalidad española, si no fuera la monarquía una institución reservada para los valores más arcaicos y antiliberales de nuestra sociedad?

Gürtel, Bankia y Noos son solo tres de la multitud de gravísimos escándalos de corrupción y crimen organizado que se han venido destapando en España desde que empezó la crisis económica de 2008. Pero son tres casos que permiten entender el absoluto descrédito de tres cimientos del régimen político (los partidos políticos, el sistema financiero y la Jefatura del Estado), especialmente cuando ese descrédito se basa en ganar ilegítimamente muchísimo dinero mientras la ciudadanía está acosada por incrementos galopantes del paro, la precariedad y la pobreza. Y permiten entender esa corrupción estructural no como la consecuencia lógica de la supuesta picaresca española, sino como práctica intolerable de una élite podrida: la casta, la corte.

¡Está desnudo!

El 7 de abril de 2011 miles de jóvenes se manifestaban bajo el lema "Sin casa, sin curro, sin pensión. Juventud sin miedo. Recuperando nuestro futuro. Esto es solo el principio". El 15 de mayo de 2011, una semana antes de las elecciones municipales se convocaba una manifestación bajo el lema "Democracia real ya. No somos mercancía en manos de banqueros y políticos". Ambas manifestaciones fueron fruto de la autoorganización de gente diversa que venía o no de militar políticamente, pero desde luego no solo no fueron convocatorias promovidas por colectivos preexistentes, sino que en general era rechazado el protagonismo de toda organización y hasta identidad previa.

La noche del 15 de mayo alguna gente se quedó a dormir en la Puerta del Sol. La tarde del 16 de mayo hubo una asamblea que reunió a un par de cientos de personas y se volvieron a quedar algunas decenas de personas a dormir en Sol. En la noche del 16 al 17 de mayo la policía disolvió a porrazo limpio la pequeñísima acampada. En 2011 ya era imposible que esto sucediera sin que nadie lo grabara y lo difundiera en YouTube. El 17 de mayo la Puerta del Sol se llenó de manifestantes en respuesta a la represión, y esa noche miles de personas construyeron una acampada, allí y en las principales plazas de España… y el resto es historia de nuestro país.

El impacto del 15M en el rumbo político y, sobre todo, en el sentido común de los españoles, es incalculable. Desde el primer momento se intentó desacreditar al movimiento calificándolo de totalitario, violento, sectario, golpista… Los ataques contrastaban tanto con el clima de fiesta, la reivindicación de democracia y las propuestas de sentido común, el impecable pacifismo de la movilización… y se producían en un escenario de descrédito tan absoluto de los partidos políticos y los grandes medios de comunicación que solo incrementaban la simpatía por el 15M, apoyado por entre el 70% y

el 80% de los españoles según las encuestas[90].

Probablemente el culmen del absurdo que reforzó el movimiento lo protagonizó quien pronto fue conocido como “el pijo de Intereconomía”. La cadena de extrema derecha simuló entrevistar a uno de los acampados en Barcelona que explicaba que lo que tenía que haber era un cambio de Gobierno (que el PP ganara al PSOE) y que los acampados tenían bastante razón, sí, pero que se había tenido que salir porque olía mucho a porro. El montaje era tan patético que nadie hizo el menor esfuerzo en desmentirlo. El vídeo se hizo viral inmediatamente provocando una gran hilaridad colectiva.

Más allá de lo chusco de aquel montaje, lo cierto es que lo desmesurado del ataque sirvió como vacuna frente a las manipulaciones políticas y mediáticas; un rasgo de época que tuvo su probable eclosión en España con el 15M: los ataques impostadamente agresivos refuerzan siempre al atacado. La crisis de régimen no afectaba solo a los partidos políticos sino a la credibilidad de los grandes medios de comunicación que habían acompañado un sistema político señalado por los manifestantes. Junto al uso de las redes sociales y de los nuevos medios de comunicación digitales, permitió la rápida construcción de un nuevo sentido común que rompía con el paradigma ideológico de la Transición, que había fabricado los sagrados consensos desde arriba y que digería fatal los disensos relevantes. Desde la propia manifestación del 15 de mayo se hablaba de spanish revolution. No había un catálogo de propuestas ni de reivindicaciones, pero sí la conciencia clara de la ruptura de un clima político estructural.

Son muy relevantes tres aspectos que hacen entender la importancia radical del 15M en el devenir de la cultura de la Transición.

En primer lugar, el factor generacional. La cultura de la Transición se asentó entre otras cosas sobre un relato generacional muy potente. No es que la Transición se asentara sobre la ausencia de memoria histórica; fue que la memoria que se consolidó fue injusta y naif para explicar la Transición, una memoria que contaba España como una familia en la que a veces había terribles disputas. Así, la generación de la II República y la Guerra Civil no había sabido entenderse. En vez de arreglar los conflictos civilizadamente se

mataron los unos a los otros. Sus hijos aprendieron de aquello y se reconciliaron, apartaron las diferencias, se abrazaron, pelillos a la mar. La Transición era una obra generacional, de una generación altruista en la que los demócratas tenían la generosidad de olvidar que los habían matado, encarcelado, torturado… y los franquistas tenían la enorme indulgencia de dejar de matarlos, encarcelarlos, torturarlos…

El relato generacional se consolidó. La mutación del relato de la Transición en la época de Aznar, la conversión de la Transición en martillo de herejes, también funcionó en el eje generacional. No parece muy inteligente decirle a la juventud que la máxima aspiración en su vida es no pisar lo fregao, conservar la magna obra de sus padres. La sacralización arrogante de la Transición la hacía responsable de todo lo bueno que nos pasara; eso garantizaba que también fuera responsabilizada del gran fracaso. La fuerza generacional del 15M es evidente partiendo de su precedente (Juventud Sin Futuro). Cuando la crisis de 2008 llevó a la juventud española ("la primera generación que vivirá peor que sus padres", se repetía insistentemente) a liderar las movilizaciones por un cambio que les permitiera tener futuro, en el centro de la diana estaba la Transición. Como paradigma de esta se ubicó más al bipartidismo que a la Corona, de la que nadie se acordaba (que es lo mejor que le puede pasar a la Corona). Pero la ruptura con la Transición como línea roja infranqueable necesariamente acarrea la desacralización de la monarquía.

Un segundo factor clave de la ruptura cultural que logró el 15M fue la apelación a una "democracia real". La raíz cultural del 15M era profundamente antielitista; una raíz, por cierto, con profundas bases históricas en la España en la que el anarquismo prendió con más fuerza que en ningún lado y en la que es perfectamente compatible el catolicismo con un anticlericalismo visceral.

Ese antielitismo cuajó políticamente en la aparición del primer Podemos que entendió que la dialéctica que podía ser transformadora en España no era la definida por el eje izquierda-derecha, sino por el eje arriba-abajo, los de abajo (el 99%) frente a los de arriba (la casta). En consonancia con lo sucedido en el 15M, no se contaba en esa casta a la monarquía, básicamente no existía y

cuando era inevitable se esquivaba como se pudiera. Así, cuando Juan Carlos I abdica menos de un mes después de las elecciones europeas en las que aparece Podemos, el nuevo partido evita protagonizar conflicto alguno en torno a la sucesión; y cuando el nuevo rey Felipe VI visitó el Parlamento Europeo, el entonces eurodiputado Pablo Iglesias le regaló la serie Juego de tronos, algo que no se podía interpretar desde el punto de vista republicano.

De nuevo el antielitismo podía haber conducido a un señalamiento claro de la Corona como ejemplo de todo aquello que denunciaba el 15M. La Corona tiene exacerbados todos los privilegios que se denunciaban de los políticos, desde el judicial (no es que haya aforamiento, es que hay inviolabilidad), los salariales (el rey de España cobra casi cuatro veces más que el presidente del Gobierno), etc., por no hablar de los supuestos sueldos vitalicios, coches oficiales, gastos pagados y todo tipo de prebendas públicas, privadas, secretas, legales e ilegales de las que goza.

Sin embargo, lo que casi nunca se ha conseguido señalar con eficacia es que el rey de España no solo ocupa el vértice de la élite en sentido formal, sino también en el material. Los casos de corrupción de Juan Carlos I son posibles porque está al frente de la élite empresarial y política española, de esa élite en la que la corrupción ha sido un elemento vertebrador de un modelo de crecimiento económico que comenzó en el periodo tecnócrata del franquismo. Las empresas energéticas, constructoras y financieras son las que más han corrompido la política española y las que más han sometido la economía española. Las conexiones corruptas de Juan Carlos I con la energía (comisiones del petróleo saudí), las constructoras (comisiones por la construcción del AVE por constructoras españolas) y financieras (Mario Conde) tienen su continuidad chusca en aquella conversación entre el “compiyogui” Javier López Madrid (de la constructora OHL y la financiera Bankia) y los reyes de España Felipe VI y Letizia Ortiz.

El tercer elemento que vierte el 15M en la política española y que es fundamental a nuestros efectos es la ruptura no solo con los relatos y propuestas sino sobre todo con la iconografía previa y muy especialmente con los relatos, propuestas (organizaciones) y símbolos de quienes llevaban (llevábamos) toda la vida buscando

un cambio sustancial en España sin éxito. Se acusó al 15M de adanismo por barrer todo lo preexistente, pero lo cierto es que, si se pretendía construir un espacio transformador nuevo y mucho más popular que los que no habían conseguido victoria alguna, era más que razonable plantear un tablero de juego nuevo.

Los primeros días del 15M fueron una especie de Big bang popular, una explosión de materia y energía que daría lugar a algo nuevo pero que no se sabía qué sería. Se desterraron todos los símbolos y lemas previos, fueran republicanos, feministas, LGTB… y se generó una identidad básicamente ex nihilo, cuando no en abierta confrontación con las previas.

En la izquierda republicana eso generó una quiebra emocional que nunca se ha terminado de resolver. No hay muchos países con el conflicto simbólico que tenemos los españoles con la bandera. Hasta el 15M, el lento resurgir de la izquierda estaba acompañado de una emergencia de las banderas tricolor que era muy reconfortante para la izquierda militante e identitaria. Hay muchos factores para que la bandera tricolor no pueda ser un símbolo de futuro y por tanto represente más la nostalgia que la esperanza republicana. El gol de Iniesta (2010) hizo sacar la bandera rojigualda a millones de personas y no lo hacían contra otros españoles, sino como expresión de alegría; los jóvenes inmigrantes se integran en España asumiendo la simbología oficial de una forma natural; la juventud (incluso la juventud no tan joven) no tiene problema alguno con la bandera. Después del 15M la bandera tricolor pasa a ser claramente una bandera del pasado republicano de España, en ningún caso el símbolo del futuro del país.

Ni siquiera cuando en agosto de 2020 el rey Juan Carlos I se va de España, la monumental crisis de la monarquía se traduce en la aparición de banderas de la república.

El 15M ha muerto, viva la república

Un rasgo inequívoco de repliegue es la recuperación por Podemos de todo el repertorio discursivo y simbólico de la izquierda clásica a los que añade más agresividad como para compensar la pérdida de ambición radical. El 15M desapareció hace tiempo. De su legado se nutrió el primer Podemos. Todo eso desapareció.

Tiene mucho sentido que durante el ciclo 15M-Podemos la república no fuera un reclamo constructivo del nuevo país. El propio 15M primero y Podemos después daban nombre a ese país distinto, radicalmente democrático, moderno, joven, feminista… que se quería construir. La deriva izquierdista (en el sentido más peyorativo, el que siempre tuvo la palabra izquierdista) del movimiento abandona la apuesta innovadora, rupturista y transversal que tuvo el 15M y el Podemos de los primeros años.

No es objeto de este libro estudiar las causas de esta deriva, pero lo cierto es que deja una cierta orfandad en quienes sentimos que aquellas apuestas eran las correctas y que los profundos cambios que vivimos casi cada año llevan a adaptar la apuesta, no a abandonarla.

Los principales factores de movilización actuales eran, hasta la paralización total por la COVID-19, el feminismo y el ecologismo. La principal fragilidad institucional de España es la monarquía, hasta el punto de que consigue resquebrajar al Gobierno sin disimulo y unir a la oposición de derecha y ultra derecha con el PSOE y la mayoría de Gobierno. Es, además, una grieta que cohesiona extraordinariamente a la juventud, cuyo rechazo a la monarquía española es abrumador, como hemos visto. Y el factor generacional es la clave en toda esperanza emancipadora en la que pensemos (también es la que da la medida del enorme potencial de las movilizaciones ecologistas y feministas), por lo que parece muy razonable pensar que podría llegar a ser ese motor de movilización para una renovación democrática de España.

Sin embargo, uno se barrunta que ese disenso en el seno del Gobierno pueda incluso estar acordado. Para el PSOE es una forma de mantenerse como partido central, el partido de régimen que se puede entender con la izquierda, pero es garante de la estabilidad institucional, de la Transición, de la Corona. Para el PSOE, es perfecto. Podemos, por su lado, lleva años de declive electoral y de militancia. Hace tiempo que apostó nítidamente por ubicarse en el margen izquierdo que antes ocupaba IU fusionado con esta. Es una opción absolutamente legítima y quién sabe si acertada, pero en todo caso es claramente distinta de la original. Para ese nuevo Podemos (Unidas Podemos), la república es perfectamente útil, pero no como motor del cambio para España sino como factor cohesionador de la izquierda. La república juega el mismo papel en Unidas Podemos en 2020 y 2021 que jugaba en IU antes del 15M.

Para dos partidos que gobiernan juntos pero volverán a presentarse separados a las elecciones, ese conflicto es perfectamente funcional: no afecta a la gobernabilidad práctica pero permite mantener un perfil nítido de cada uno de los dos partidos tal y como esperan sus electorados.

Sin embargo, la república como bandera de la izquierda imposibilita su emergencia como motor del cambio de país. Podríamos contraponer provocadoramente algo así como una república tricolor (identitaria, nostálgica, emocionante… de la izquierda) frente a una república rojigualda en la que intentáramos que cupiera todo un imaginario de una España moderna, democrática, europea, ecologista, feminista, garante de las libertades más avanzadas y de los derechos sociales más ambiciosos, radicalmente enfrentada a la corrupción y profundamente antielitista pero sin ninguna exigencia de pedigrí, sin apelar a las tradiciones e identidades políticas del pasado de España. La primera república del siglo XXI.

CONCLUSIÓN

COMO EL JUNCO QUE SE DOBLA

PERO SIEMPRE SIGUE EN PIE

Perded toda esperanza. No mandaréis la Transición al exilio.

Cayetana Álvarez de Toledo

Durante el confinamiento decretado por el estado de alarma en primavera de 2020 se puso de moda la canción Resistiré, del Dúo Dinámico, hasta el punto de convertirse en una suerte de himno. Una parte de la canción explicaba por qué: aunque los vientos de la vida soplen fuerte soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Quizás la métrica del verso exigía el adversativo pero; sin embargo, en realidad la canción habría tenido más razón explicando que el junco se dobla y por eso sigue en pie.

Al junco le ocurre como a los edificios altos: la mejor forma de que los grandes vientos o incluso los terremotos no generen desastres es que tengan cierta flexibilidad: o se mueven cuando los vientos soplan fuerte… o se parten. La rigidez es la mejor garantía de que algo se parta a la mayor amenaza.

La gran virtud del mito de la Transición de los años noventa y de la monarquía fue su flexibilidad, como el junco que se doblaba y gracias a ello siempre seguía en pie. La Transición era invencible cuando era estrambótico situarse al margen de ella.

Aznar decidió conquistar la Transición (y la Constitución) y mutarla de casa común de los demócratas a martillo de herejes, un espacio cada vez más estrecho del que se expulsaba a todo aquel que no se ajustase a rígidos preceptos políticos. En el caso de Aznar podía tener un sentido: apropiarse de la Transición y de la Constitución del 78 era bueno para su proyecto de partido, en el cual el proyecto de país era irrelevante. Si Aznar podía condenar a los infiernos a los herejes y señalar a los buenos ciudadanos, eso que ganaba.

Felipe VI condujo la monarquía a un rincón. Quizás la propia debilidad de la monarquía le llevó a pensar que era mejor tener sólidos apoyos en la derecha nacionalista española que no tener ningún apoyo. Lo que es seguro es que ese escoramiento condenaba a la monarquía española a una debilidad enorme tras décadas de una gran solidez.

Felipe VI decidió convertir el 1O en su 23F. La derecha española, lógicamente, se apoyó en el giro de Zarzuela para hacer de la monarquía española el referente de su endurecimiento.

La victoria de Pablo Casado en el PP se vivió como una vuelta del partido a las esencias aznaristas. Uno de sus primeros discursos, de esos discursos de Pablo Casado que nos advierten de que debemos estar preparados para cualquier histrionismo, se centró en una sorprendente defensa de la monarquía:

Me parece bueno que nos vayamos acostumbrando a algo muy sencillo y muy natural, incorporando el "viva el rey" a una conversación de la calle, en el mercado, en la oficina, en la universidad. Porque cuando abrimos un colegio o un hospital estamos diciendo "viva el rey", cuando pagamos [sic] las pensiones o pagamos [sic] un subsidio de desempleo o abrimos kilómetros de AVE o carreteras o un aeropuerto también decimos en buena medida "viva el rey"; cuando nuestro sistema de trasplantes salva una vida, cuando se atiende a un dependiente, también se dice "viva el rey" [91].

Como era de esperar, el discurso de Pablo Casado generó sobre todo una enorme colección de bromas. Pero que el nuevo presidente del PP, el de la vuelta a las esencias, hiciese del "viva el rey" una de sus banderas suponía por primera vez bajar la monarquía a la pelea partidaria y ubicar al monarca como trinchera de la derecha.

Un mes después, en el primer acto multitudinario de Vox en Vistalegre, Santiago Abascal situó también al rey y al "espíritu de la Transición española" como los enemigos de las políticas

progresistas: “el propósito final de la exhumación y traslado de los restos del Exmo. Francisco Franco atiende a la intención de derrocar a su majestad el rey Felipe VI y finiquitar el espíritu de la Transición española”[92].

Según lo expuesto en estas páginas, el mito de la Transición se construye entre 1995 y 2002. Era un gran mito político, de una eficacia superlativa, porque su principal virtud era que dentro de él cabía todo el mundo. Salvo fascistas recalcitrantes y terroristas, todos cabíamos en la Transición. Exfascistas, conservadores, monárquicos, liberales, socialdemócratas, nacionalistas de distinto corte, comunistas… Todos bajo la batuta de un rey al que cabía apoyar incluso siendo republicano porque no hacía falta ser monárquico para ser juancarlista. La izquierda daba mil regates retóricos para explicar que se seguía siendo republicano, pero sin cuestionar que el rey fuera el jefe del Estado e incluso se hablaba de que teníamos un rey republicano; los nacionalistas siempre remitían la independencia a un horizonte ideal, casi escatológico.

El 3 de agosto de 2020, cuando la Casa Real anunciaba que el rey Juan Carlos I abandonaba España ante las evidencias de su corrupción, Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados y dirigente de la FAES, tuiteaba: “Perded toda esperanza. No mandaréis la Transición al exilio”[93]. Se hacía a la Transición sinónimo de corrupción (ese tuit era en respuesta a la expatriación de Juan Carlos I por corrupto y ella lo elevaba a “la Transición”) y se convertía a la derecha en garante de la monarquía. Es posible que fuera una buena idea para la derecha corrupta. A la pobre Cayetana Álvarez de Toledo la destituirían apenas unos días después y el PP filtraría que era por ser excesivamente dura con el rey Juan Carlos I, algo intolerable en el PP[94]. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, evidenciaba que la vinculación entre los sectores más duros de la derecha y la monarquía era intensa sin que la corrupción pareciera ser ningún hecho negativo ni relevante: “Quiero subrayar el trabajo histórico de Juan Carlos I por España, a quien debemos los mejores años de nuestra democracia. Y la más firme confianza en la monarquía parlamentaria encarnada por Felipe VI”[95]. Vox ubicaba a la monarquía en la cabeza de la Nación [sic] frente al Gobierno democrático: “El rey Felipe VI es la cabeza de la Nación. Y la

Nación no va a permitir que una pandilla de desalmados, corruptos y blanqueadores de asesinos, le roben el futuro, la libertad y el afán por seguir dando continuidad a nuestra historia"[96]. Y su portavoz en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, se refugiaba en rancios códigos monárquicos: "VERDE" (acrónimo de "Viva el rey de España")[97].

En la misma línea, el modelo económico de las derechas españolas renuncia al componente social de las derechas emergentes europeas. El Frente Nacional francés, la Liga italiana y, en general, lo que se ha venido en llamar la alt-right, tienen un discurso nacionalista y xenófobo que pone en el centro la confrontación de los sectores populares autóctonos frente a las élites por un lado y los inmigrantes por otro. Y en esa defensa del pueblo nacional rechazan las políticas económicas neoliberales y ponen en marcha dispositivos sociales potentes que les ayudan a recoger mucho apoyo de los espacios obreros que tradicionalmente votaran a las izquierdas socialistas y comunistas. Las extremas derechas se suelen nutrir de un discurso antielitista con enorme calado popular; la extrema derecha española, al contrario, exhibe con obscenidad su servilismo con las élites y muy especialmente con la cima de estas: la Corona.

Frente a otras derechas emergentes, la derecha española no es rupturista ni antielitista. De hecho, su radicalización consiste en agarrarse aún más al orden económico y político vigente. Se radicalizan haciéndose más monárquicos, más constitucionalistas, más neoliberales y más católicos (incluso frente al papa cuando este defiende propuestas de componente social, ecológico o igualitario[98]).

En el fútbol se popularizó hace décadas una táctica llamada "achique de espacios" que consistía en desplegar el equipo en el campo rival. En realidad, era más una táctica defensiva que ofensiva, aunque solía facilitar un ataque rápido y con muchos menos obstáculos. Al estar tan adelantados, el rival tenía poquísimo espacio por donde circular la pelota y tendía a perderla inmediatamente; si intentaba pasar al campo rival, al estar tan adelantado el otro equipo acababa siempre estando en fuera de juego.

En buena medida, el achique de espacios ha sido el método con el que funcionó el mito de la Transición y su máximo exponente, la monarquía en su fase más exitosa.

El relato de la Transición que se instaló en los años noventa hacía exactamente lo mismo que los equipos que achican el espacio: era un relato que se desplegaba sobre todo en el campo de la izquierda y dejaba en fuera de juego a cualquier aventurero que intentara pasar a la ofensiva. La Transición era la legalización del PCE, la libertad de Marcelino Camacho, la vuelta de los exiliados, la derrota del 23F, la descentralización autonómica, el derecho a huelga, al divorcio, la democracia, la libertad de prensa, los ayuntamientos democráticos… Ese relato de la Transición solo dejaba fuera a fascistas inadaptados y a organizaciones terroristas: ellos habían sido los máximos enemigos del proceso hacia la democracia y, diluidos los primeros, solo quedaban los segundos.

A ello contribuía el valor de la Transición por antonomasia: el consenso. El consenso en sí mismo es un valor obviamente positivo. Si hay que tomar una decisión es mejor que sea por consenso que de forma conflictiva. Pero al imponerlo como requisito pasa a ser un valor profundamente conservador porque en realidad se convierte en el derecho de veto de los sectores más inmovilistas. La democracia no es el sistema que consigue consensos sino el que canaliza de forma pacífica y legítima los disensos. Una democracia avanza porque nadie tiene derecho de veto frente a la mayoría, cuyo único límite sagrado son los derechos humanos, aunque en las decisiones más graves se puedan exigir mayorías cualificadas.

La Transición más la exigencia de consenso era una suma demoledora contra cualquier cambio sustantivo. En aquellos años no se hablaba de transversalidad, pero el mito de la Transición funcionó como el más eficaz instrumento de transversalidad con el que el poder político estrechaba el margen de movimiento de cualquier disidencia.

Fue Aznar quien decidió acabar con tan inteligente estrategia. Entendió la importancia de no aparecer en los márgenes y, en sus años de oposición y sus primeros años de gobierno, su máximo empeño fue el “giro al centro” y una moderación de su perfil para evitar, sobre todo, dar miedo. Intentaba, de alguna manera,

defenderse pasando al campo contrario.

Al menos desde la llegada de Aznar, el PP ha demostrado no ser un partido de régimen. Ese papel se lo ha dejado en exclusiva al PSOE. Por ello pese a que Aznar había demostrado entender que para su partido era imprescindible el achique de espacio, promovió desde el gobierno exactamente lo contrario para el régimen de la Transición: en vez de llevar el equipo al campo rival y mantener allí la pelota, retrasó el equipo de la Transición, lo puso a defender al borde del área con mucha agresividad obligando al rival a pasar al ataque: lo que vendría a ser un catenaccio.

Hemos visto cómo en 2002 Aznar reconvirtió el mito de la Transición en un frente contra la herejía política llamado constitucionalismo. Frente a un relato en el que cabía todo el mundo sin grandes renuncias retóricas, el patriotismo constitucional de Aznar fue un invento para apropiarse de la Constitución (esto es, del mito de la Transición) para la derecha nacionalista española. Quien no siguiera las directrices políticas de la FAES quedaba fuera del constitucionalismo, esto es, del espíritu de la Transición.

Fundamentalmente, el patriotismo constitucional pretendía dejar fuera del cauce de lo políticamente aceptable al nacionalismo vasco, que, apenas dos años antes, había sido socio de gobierno de Aznar. Mientras uno de los más importantes hitos de la Transición en los años setenta fue la legalización de los enemigos, del PCE, ser constitucionalista pasaba por defender sin matices la ilegalización de los partidos, asociaciones y medios de comunicación próximos a Herri Batasuna, partido que había sido legal durante los años de máxima crueldad de ETA sin que a ningún partido se le hubiera ocurrido la posibilidad de ilegalizarlo.

Si la Transición había triunfado incorporando a los enemigos al redil, el constitucionalismo se imponía excluyendo a enemigos cada vez más amplios. El asunto de las ilegalizaciones es solo un ejemplo evidente de cómo el supuesto constitucionalismo modificaba el relato de la Transición para alojar exclusivamente a quienes defendieran una dinámica antagónica a la que contaba el relato de la Transición pocos años antes.

Pasábamos en pocos años de un país en el que era difícil quejarse

porque cabía todo el mundo a un país que excluía a todo el que no se arrimase a los postulados del PP cada vez más extremos. No era solo la cuestión territorial. Aznar mismo pasó de reivindicar a Manuel Azaña a promocionar la causa franquista a través del llamado revisionismo histórico. Asimismo, aupó un tejido mediático e intelectual de extrema derecha (autodenominados "liberales"), cuya principal cara visible era Federico Jiménez Losantos.

Ello tuvo dos consecuencias. La primera fue agudizar como nunca los conflictos territoriales. En el País Vasco primero fue el Plan Ardanza y luego el Plan Ibarretxe, y años después comenzaría el proceso independentista catalán, cuyas consecuencias en el futuro institucional (no solo territorial) de España aún son imposibles de medir.

La segunda consecuencia fue la desconexión generacional con el mito de la Transición. El relato de los años noventa había tenido una gran virtud en esos términos. Por una parte hacía sentirse artífices de una gran gesta generacional a los contemporáneos de los hechos de la Transición, un periodo que no se había contemplado de forma heroica y mucho menos como mito fundacional ni en los años setenta, ni en los ochenta, ni en los primeros noventa. Por otra, a los nacidos en los años de la Transición (y que comenzábamos entonces nuestra mayoría de edad) se nos adoctrinaba con un relato del que resultaba odioso escapar, no solo en términos políticos, sino muy especialmente en términos generacionales.

La forma en que el mito de la Transición recuerda el golpe del 36, la Guerra Civil y la dictadura los convierte en un fracaso generacional. Una generación torpe (nuestros abuelos) trajo un millón de muertos; una generación brillante (nuestros padres) trajo paz y consenso y con ellos la democracia. ¿Cómo íbamos a ser nosotros? Básicamente se nos ofrecían dos opciones: si éramos unos radicales que nos salíamos del espíritu de la Transición, repetiríamos el fracaso generacional de nuestros abuelos. La alternativa no era ser brillantes y generosos como nuestros padres porque ya no había que pasar de la dictadura a la democracia, del fracaso al éxito; la alternativa correcta era estarnos quietos, recoger la herencia de la Transición y sacarle brillo pero sin tocarla

demasiado. No por nada éramos (internacionalmente) la generación X, una generación perdida, sin más horizonte que no estropear lo que habían hecho nuestros padres. Nuestra generación tenía que recibir lecciones, admirar a la generación precedente y no hacer mucho ruido.

Sin embargo, diez años después, el relato de la Transición modificado por el aznarismo tenía muy poco que ver con eso. Con su promoción del llamado revisionismo histórico Aznar rompió con esa memoria descafeinada, ese relato generacional naif, y recuperó y propagó casi en su literalidad la propaganda franquista. Es imposible saber si hubo una relación de causalidad, pero lo cierto es que en aquellos años comenzaron los movimientos por la recuperación de la memoria histórica que impugnaban el abandono de las víctimas del franquismo y la impunidad de los crímenes de la dictadura. Se recuperaron las exhumaciones que había habido en España hasta 1981 y, por tanto, acabó el pacto de olvido y el relato generacional perdía vigor.

La recuperación de la memoria histórica hizo aparecer por primera vez en la narrativa política española a una generación, la de los nietos, nacidos a partir de finales de los sesenta, que no se refugiaba en los miedos al ruido de sables, al golpismo ni a la Guerra Civil para tapar los crímenes de la dictadura franquista ni abandonar en las cunetas a las víctimas del genocidio franquista. Por supuesto, la memoria histórica se ha contrapuesto con la Transición en una grave injusticia contra esta, pues el olvido es más hijo del 23F (momento en el que acabaron las exhumaciones de fosas comunes) que de los años precedentes.

Pero, ¿qué pasa con la república?

No hace muchos años en Cataluña solo hablaba de independencia un sector de la izquierda (la izquierda independentista ubicada en la pequeña ERC y poco más). Lentamente consiguieron que la independencia fuera un proyecto muy transversal (permitía entenderse a exconvergentes con la extrema izquierda de la CUP y con todo lo que hubiera en medio) que representaba para millones de catalanes la esperanza de una democracia mejor, más próspera, racional, moderna y europea; a estos efectos da igual que esa representación no fuera justa o que ni siquiera quisiera decir lo

mismo para todos. No había un imaginario compartido: obviamente Artur Mas y Anna Gabriel tenían en mente distintas repúblicas catalanas. También resulta obvio que el rediseño de las fronteras estatales no es revolucionario, que no hay ninguna razón esencialista para pensar que una república catalana fuera a suponer automáticamente esos cambios, que los gobiernos catalanes durante mucho tiempo no habían tenido proyectos políticos sustancialmente diferentes de los que había aplicado el PP en la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Pero daba igual. Durante varios años una idea, un proyecto político difuso, la independencia, representaba para enormes sectores de la población catalana sus anhelos políticos diversos que compartían la aspiración a más prosperidad y más democracia. Independencia era el nombre común de muchos proyectos muy distintos entre sí, unificó a sectores políticos tremendamente heterogéneos y supuso el movimiento rupturista que más seriamente ha amenazado el orden del 78 al menos desde el 23F. El sentido democrático que se quiso hacer sinónimo de la independencia se reflejó en la tendencia a usar como reclamo la república catalana cada vez más que la independencia. Y eso escoró a las reconstrucciones de la derecha catalana a posiciones más progresistas en lo económico y en lo político… dejando fuera de juego a quienes se mantenían en las posiciones originarias de CiU (Unió primero y el PDeCAT después). La aspiración democrática se acabó representando con la república; y esta hizo más progresistas a los sectores más conservadores que sobrevivían a la ola independentista.

Más allá de las evidentes diferencias entre un proyecto republicano para España y el independentismo catalán, la capacidad de unificar aspiraciones diversas en un proyecto compartido de futuro es el único camino posible para una alternativa republicana que no busque cohesionar a la izquierda y dejar a España igual, sino cambiar España le pase lo que le pase a las actuales fuerzas de izquierdas.

Si la debilidad de la monarquía y de la Transición vienen de su escoramiento hacia una derecha que las ha patrimonializado, la república como alternativa para la construcción del futuro de España pasa por desvincularla de la izquierda, algo que no va a ser ni mucho menos fácil y que es la principal debilidad de la

alternativa republicana.

Cuando hablamos de la necesidad de una alternativa republicana para España no se trata solo de una alternativa a la monarquía, sino también (casi fundamentalmente) de una alternativa al republicanismo español tradicional.

Para que la propuesta republicana sea el motor del cambio en España tiene que dejar de ser una propuesta militante de la izquierda para convertirse en una alternativa modernizadora de un país que tiene que reconstruirse mirando al futuro y abandonando la trinchera del pasado. Los monárquicos están haciendo todo lo posible por regalarnos ese escenario atrincherando a la Corona en el margen derecho más rancio, corrupto e histriónico.

En el pasado también fue así. La II República llegó gracias a la incorporación de sectores de derecha razonante a la izquierda liberal… El Pacto de San Sebastián no fue una alianza de la izquierda sino un acuerdo entre demócratas españoles que abogaban por la regeneración de España, que solo era posible rompiendo con el régimen de la Restauración a través de un proyecto modernizador y democrático. Que el presidente de la república fuera un católico de talante conservador como Niceto Alcalá-Zamora fue un ejemplo de lucidez republicana por mucho que una izquierda militante hostigase a la II República como proyecto insatisfactorio ajeno a sus anhelos revolucionarios.

Para que la propuesta republicana sea el motor del cambio en España tiene que dejar de ser una propuesta nostálgica. En ningún caso puede pretender una suerte de revancha un siglo después. No se trata de que salga bien en el siglo XXI lo que derrotaron en el siglo XX. Por eso más nos vale hablar de república que de “III República”. Si miramos al pasado tiene que ser para encontrar los ejemplos de siglos de luchas emancipadoras, de españoles vanguardistas, de anhelos democráticos, modernizadores, feministas, científicos, filosóficos. Necesitamos romper con la idea imperiófila de España e identificar un hilo de progreso y libertad en el que las repúblicas se insertan pero que trasciende a las repúblicas.

Uno de los triunfos más importantes de la derecha española y que

garantiza una hegemonía cultural más sólida es habernos convencido de que el ADN de España es el vertebrado por Isabel La Católica, Torquemada, Felipe II, El Cid, Franco o Aznar. Los episodios reaccionarios de nuestra historia constituirían, gracias a esta triunfante imagen de lo español, la normalidad; mientras que los brotes ilustrados, los episodios de democracia, de emancipación, los científicos y pensadores, los luchadores por la libertad, los episodios de convivencia entre diferentes… son anomalías dentro de una línea de continuidad en nuestra esencia reaccionaria, católica, antilustrada y quema-herejes.

La memoria colectiva es lo que da identidad y consigue que nuestra memoria sea la de una tradición reaccionaria que permite que de alguna manera intuyamos que toda lucha por la emancipación es en nuestro país una lucha contra natura. Si queremos construir un nuevo traje político para nuestro país, eso que llamamos república, tenemos que modificar el imaginario colectivo y engarzar nuestras luchas con la memoria que adecenta nuestro país.

No solo tenemos la II República española como fuente de ejemplos históricos, aunque también: desde la propia Constitución de 1931 que nos situaba en la vanguardia democrática, el voto de la mujer, el laicismo… a la resistencia antifascista con el ejemplo de solidaridad internacional más inmenso que ha conocido la humanidad, las Brigadas Internacionales, seguido por la lucha antifascista en la Segunda Guerra Mundial, la Nueve liberando París… También la propia resistencia contra la dictadura franquista es una de las herencias más dignas de las que sentirnos justos continuadores y cuyos protagonistas siguen siendo en muchísimos casos referentes de honestidad, valentía y generosidad. Son héroes que se jugaban la vida y la libertad por su país, mucho más patriotas que los felones que lo gobernaban con la palabra patria en la boca todo el día.

Frente al “España una y no cincuenta y una” tenemos también la I República Española que intentó un avanzado modelo federal de Pi i Margall (“¡España no habría perdido su imperio colonial de haber seguido sus consejos!”, reza la lápida de su tumba en el cementerio civil de Madrid, desmintiendo la imagen desintegradora del federalismo); también de la I República heredamos el ejemplo de

Salmerón que antes que firmar una pena de muerte firmó su dimisión como presidente, ejemplo de que en nuestra historia más digna cabe defender los derechos humanos desde el poder político e incluso dimitir.

Pero el hilo emancipador y digno de la historia de España debe extenderse mucho más allá de los gobiernos de las dos breves repúblicas.

Frente a la España católica intransigente de Santiago Matamoros podemos incluso enarbolar el casi mítico Toledo de las tres culturas; frente a la España cateta tenemos una serie de pensadores musulmanes, judíos y cristianos que habitaron la península durante siglos. Frente a la España del "muera la inteligencia y vivan las cadenas" tenemos a Ramón y Cajal, a Lorca, a Picasso, a Machado, filósofos y científicos de la Edad Media como Maimónides y Averroes, Alfonso X el Sabio, el Dos de Mayo, la Constitución de Cádiz, los comuneros…

La identificación de ese hilo histórico ilustrado, progresista, modernizador, decente… es esencial para que los españoles sientan que con el anhelo republicano están construyendo una parte más de la historia de España trufada de episodios a reivindicar y no una anomalía frágil.

Si se identifica la propuesta republicana como continuadora solo de la I y especialmente de la II República, como hemos hecho los republicanos hasta ahora, el mensaje sería que en España todo proyecto emancipador o al menos el proyecto que estamos proponiendo es anómalo y por tanto destinado al fracaso. Muy al contrario, una alternativa de futuro tiene que estar convencida de que en el ADN de España hay mimbres para la emancipación y son muy extensos. Las repúblicas pasadas, si algo representan en el imaginario popular es su fragilidad: una dura un año y la otra cinco. No podemos plantear que ese es el único referente de nuestro horizonte y desde luego si lo hacemos no va a ser un horizonte transversal. Todos los sectores que buscan una institucionalidad nueva y que funcione huirán de modelos que han durado como mucho cinco accidentados años.

Aznar no fue ningún imbécil cuando puso tanto empeño en

promocionar una serie de intelectuales que reescribieran la Causa General franquista y confrontaran con la superioridad moral de la izquierda. La tarea de recuperar episodios y personajes que permiten fraguar una memoria distinta es esencial para construir un nuevo país que tenga raíces sólidas, para que como pueblo entendamos que la anomalía es entregar nuestro destino a un puñado de grandes fortunas y de élites ajenas al control popular, que lo normal, lo que llevamos en nuestro ADN, es luchar por la libertad, por la emancipación, por la soberanía popular, por los derechos humanos, por el conocimiento. Es una tarea que toca a nuestra intelectualidad. Si la emprende con éxito, el camino quedará muy allanado.

Para ello, casi sobra decirlo, tocará la renuncia a la bandera tricolor como representación de la España que nos toca conseguir. No se trata de desterrarla de nuestro patrimonio histórico y emocional, faltaría más. Pero la bandera tricolor es la bandera de la II República española, representa eso, que no es poco. El objetivo republicano no es modificar los colores de la bandera: los símbolos son un importantísimo instrumento para conseguir objetivos políticos, pero si un símbolo frena más que acelera la consecución de ese objetivo… no es un símbolo útil.

Cuando propongamos la república como modelo del país que queremos en ningún caso podemos permitirnos que parezca que queremos recuperar lo que España perdió entre 1936 y 1939. Muchos podemos sentir la II República española como un orgullo que nos hace emocionarnos con la memoria de nuestros abuelos intentando poner España al día, en primera línea de la Europa ilustrada, de la democracia, la libertad, los derechos y la justicia social. Y muchos (incluso a veces los mismos) pueden sentir la Transición como otro momento de orgullo en el que se consiguió dejar atrás una dictadura extremadamente feroz y se conquistaron libertades, democracia y se dejó atrás el miedo. En uno y otro caso no se trata de no reivindicar un momento del pasado, sino de asumir que, efectivamente, forman parte del pasado. Que ni vamos a retomar aquella república ni está vigente el modelo político de hace cuarenta años, cuyos frutos fueron muchos, pero colapsó hace tiempo.

De lo que se trata es de identificar con la propuesta republicana la construcción de futuro.

Es razonablemente fácil identificar la España monárquica con los lastres que nos han llevado a un cierto colapso y a una grave crisis institucional que arrastra España desde hace al menos una década.

España ha liderado los batacazos económicos en las grandes crisis (fundamentalmente la de la burbuja inmobiliaria y la de la COVID-19) por la ausencia de una economía productiva. La industrialización (verde) de España es una música celestial que se entona en todas las crisis y se olvida en todas las recuperaciones. De esa parte del tejido económico que arruina a nuestro país solo se beneficia la corte empresarial que contenta a Zarzuela con regalos, agasajos y maletas llenas de billetes.

El conflicto territorial que se enquista en España tampoco parece solucionable con un rey como Felipe VI que intentó hacer del 1O su 23F ganándose la simpatía de la derecha española más dura, pero consolidando una antipatía que será muy difícil de olvidar por los millones de ciudadanos españoles que no quieren una España centralista.

El pacifismo arraigado en los españoles encaja mal con una Casa Real vinculada esencialmente a lo militar y con un interés en la compraventa de armas internacional incompatible con la defensa de los derechos humanos.

Mientras el feminismo emerge como gran revolución del siglo XXI, la monarquía española mantiene la única discriminación de género expresa consagrada por las leyes, la sucesión preferente del varón, y se consolida como una institución expresamente patriarcal porque una reforma en ese apartado tendría que someterse a referéndum y los monárquicos temen ese procedimiento, pues igual el pueblo español aprovecha para responder lo que no se le ha querido preguntar. Entre seguir siendo machista y escuchar al pueblo español, la monarquía española prefiere lo primero.

La emergencia ecológica casa mal con una monarquía que se ha llevado comisiones por la compra de petróleo saudí, por la construcción de enormes infraestructuras de transportes; casa mal

con la devoción por la tauromaquia y con la caza de elefantes y osos alcoholizados.

La España que se ha secularizado a toda velocidad choca necesariamente con una monarquía católica al punto de que quien nació ortodoxa tiene que simular su catolicismo, y quien en su vida previa se había casado por lo civil, se había divorciado y había decidido interrumpir voluntariamente un embarazo, imposta una conversión al catolicismo para ingresar en la regia institución.

La España que denuncia la corrupción de partidos e instituciones tiene en el centro de sus miradas a la institución-familia de Juan Carlos de Borbón y de Iñaki Urdangarin, a quienes compadrean con "compiyoguis" caundo ya saben que son sinvergüenzas, a la familia que lo único que ha hecho unida en las últimas décadas es gastar dinero de origen opaco con tarjetas black.

De aquellas dos Españas del mañana efímero de Antonio Machado parece sencillo ubicar en la España monárquica a esa "España inferior que ora y bosteza, vieja y tahúr, zaragatera y triste; esa España inferior que ora y embiste, cuando se digna usar la cabeza".

La alternativa republicana pasa por conseguir que república sea el nombre de la otra España que "nace, la España del cincel y de la maza, con esa eterna juventud que se hace del pasado macizo de la raza"; que república sea el nombre de la España moderna, democrática, incompatible con la corrupción estructural, que se vertebra territorialmente con fraternidad y federalismo, que construye y lidera la defensa de una Europa democrática, justa, pacífica, laica y tolerante, que conquista derechos LGTB, que está en la vanguardia de las luchas feministas, que combate el cambio climático y defiende la naturaleza como nuestro mejor patrimonio y el de nuestros hijos y nietos.

Puede que me equivoque. Pero creo que no solo es posible que república sea el nombre de esa España; es que creo que no hay otro nombre posible.

Hasta la república, ¡viva España con honra!

NOTAS

1 . Fernando Oliván, Para una lectura radical de la Constitución de 1978, Escolar y Mayo, Madrid, 2016, p. 145.

2 . “Comunicado sobre las informaciones referidas a S. M. el Rey don Juan Carlos aparecidas en distintos medios de comunicación”, comunicado de la Zarzuela, 15 de marzo de 2020.

3 . “Spanish king named on offshore fund linked to €65m Saudi ‘gift’”, en The Telegraph, 14 de marzo de 2020.

4 . “Lea la carta de Juan Carlos I a su hijo el rey Felipe”, en El País, 3 de agosto de 2020.

5 . “Veremos en qué quedan todas estas acusaciones: probablemente en nada, habida cuenta de que las declaraciones de la señora Larsen en sede judicial son completamente distintas a las que le atribuyen las cintas. Pero no hay que esperar para entender que el rey Juan Carlos es un hombre extraordinario, la piedra angular que lideró el ejercicio de concordia de 1978, que nos permitió pasar del franquismo a la libertad. Es el hecho más importante y brillante de la historia de España en el último siglo”, decía José Luis Corcuera. Salvador Sostres, “José Luis Corcuera: ‘Pablo Iglesias nunca ha creído en la libertad’”, en ABC, 23 de julio de 2020.

6 . José Antonio Zarzalejos, “El rey baraja ya la abdicación”, en El

Confidencial, 22 de febrero de 2013.

7 . Como, de hecho, AP se excluyó de muchos consensos en el 78, no votó unida la Constitución, se opuso al sistema autonómico… sin que ello frenara la aprobación del texto constitucional.

8 . “Con la Constitución”, en El País, 24 de febrero de 1981.

9 . Eduardo Maura, Los 90. Euforia y miedo en la modernidad democrática española, Akal, Madrid, 2018.

10 . La serie se encuentra actualmente disponible en http://www.rtve.es/archivo/la-transicion-serie/

11 . En la histórica manifestación de Madrid contra el asesinato de Miguel Ángel Blanco, en 1997, Victoria Prego fue la encargada de leer el comunicado. Véase “ETA, escucha, así es como se lucha”, en El País, 15 de julio de 1997.

12 . Rosa Rivas, “Creía que los jóvenes no verían ‘La Transición’, pero me equivoqué”, en El País, 15 de octubre de 1995.

13 . “Algo sencillo”, en ABC, 24 de julio de 1995, p. 124.

14 . Luisa Elena Delgado, La nación singular. La cultura del consenso y la fantasía de normalidad democrática (1999-2011), Siglo XXI, Madrid, 2014, p. 55.

15 . “Sánchez convocará a partidos, agentes sociales y administraciones para alcanzar un gran pacto de reconstrucción económica y social”, comunicado de la Moncloa en su web, 12 de abril de 2020.

16 . Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=vFV0qDSPB4o

17 . José María Aznar, España. La segunda transición, Espasa Calpe, Madrid, 1994.

18 . Josep Ramoneda, “Pequeñas historias con importancia”, en El País, 20 de diciembre de 2013.

19 . Mariángel Alcázar, “La infanta Elena visita al rey Juan Carlos en Abu Dabi”, en La Vanguardia, 24 de noviembre de 2021.

20 . La transcripción entera de la conversación, en la que también participan Santiago Carrillo y Pere Portabella, se puede leer en http://cadenaser.com/ser/2004/03/10/actualidad/1078885761_850215.html

21 . “Última entrevista con Rubalcaba”, en XRey [Pódcast, Spotify], 21 de mayo de 2020.

22 . Con este discurso de 1997 Aznar pretendía situarse a sí mismo

como un nuevo Manuel Azaña. Es imposible leerlo hoy sin esbozar una sonrisilla. Discurso íntegro publicado en: “José María Aznar sobre Manuel Azaña”, en Nueva Revista, s/f.

23 . En el centenario de la muerte de Cánovas, discurso de José María Aznar el 8 de agosto de 1997, disponible en http://www.jmaznar.es/file_upload/discursos/pdfs/00624A0624.pdf

24 . En realidad, la grotesca foto de Aznar disfrazado del Cid es de 1987, en El País Semanal, 20 de diciembre.

25 . “FAES publica la colección Biografías Políticas de figuras liberal-conservadoras españolas”, en Fundación FAES, 27 de mayo de 2013.

26 . Francesco Manetto, “Pablo Iglesias promete acabar con el ‘régimen’ de la Transición”, El País, 16 de noviembre de 2014.

27 . Aparecieron múltiples libros refutando las historias de los llamados revisionistas. Uno de ellos (Alberto Reig Tapia, Anti-Moa, Ediciones B, Madrid, 2006) criticaba que llamáramos revisionistas a estos propagandistas: el revisionismo, explicaba Reig Tapia, es la sana actitud intelectual de no dar ningún conocimiento por cerrado, sino someterlo siempre a revisión y contraste. Nada que ver con el mero reciclado de la propaganda de la dictadura carente de todo rigor intelectual.

28 . “Vacaciones de presidente en la isla de Menorca”, en El Periódico de Aragón, 2 de agosto de 2003.

29 . Pere Rusiñol y Javier Casqueiro, “El PP planea utilizar el patriotismo constitucional contra el PNV”, en El País, 4 de diciembre de 2001.

30 . En la web del PP no parece disponible el documento (no hay ningún documento previo a 2009), pero lo podemos encontrar en la de ABC: https://www.abc.es/contenidos/apoyos/documentos/HTM_48_1.html

31 . Paco Frutos, “Yo soy un traidor al racismo identitario que estáis creando”, en El País, 29 de octubre de 2017.

32 . José Precedo, Raúl Sánchez y Marcos Pinheiro, “Las sentencias por enaltecimiento del terrorismo se multiplican por cuatro desde que ETA dejó de matar”, en eldiario.es, 21 de abril de 2018.

33 . “El equipo de Casado distribuye un comunicado en el que se acusa a Santamaría de excarcelar etarras”, en El País, 21 de julio de 2018.

34 . “Aznar: ‘Nunca he tenido mejor foto que la de las Azores’”, en La Vanguardia, 5 de abril de 2017.

35 . No parece haber datos concretos de cuántos insumisos hubo en España, ni siquiera de cuántas condenas hubo, entre otras cosas porque el movimiento desbordó toda organización y ninguna consiguió hacer un cálculo fidedigno.

36 . Carlos Arroyo Jiménez, “La actuación de Marta Sánchez en la ‘Numancia’ será en puerto y no en alta mar”, en El País, 24 de diciembre de 1990.

37 . “Marta Sánchez canta entre lágrimas el himno español en la nueva plataforma de Cs”, en El Independiente, 20 de mayo de 2018.

38 . Pilar Marcos y Francisco Peregil, “Avalancha sin precedentes contra la guerra”, en El País, 16 de febrero de 2003. En aquella época, El País solía usar un procedimiento riguroso de conteo de manifestantes. Algo parecido a lo que luego popularizó un grupo autodenominado Manifestómetro. Solo aquella vez en una manifestación contra un Gobierno se alcanzaron los 991.000 manifestantes según el cálculo del diario.

39 . “Savater: ‘El 15M me ha servido de tontómetro para medir el nivel de estupidez’”, en Libertad Digital, 13 de julio de 2011.

40 . “Albert Boadella: ‘En España hay 101.557 gilipollas seguros’”, en Periodista Digital, 27 de noviembre de 2011.

41 . José Luis López Aranguren, “El País como empresa e ‘intelectual colectivo’”, en El País, 11 de junio de 1981.

42 . Encuesta disponible en http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=1191

43 . Encuesta disponible en http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=11904

44 . Encuesta disponible en http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14009

45 . Encuesta disponible en http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14179

46 . “Tezanos ‘intentará’ preguntar en el próximo CIS ‘cómo valora y prioriza’ la sociedad el debate sobre la monarquía”, en La Marea, 22 de julio de 2020.

47 . Sato Díaz, “40,9% a favor de la república y 34,9, de la monarquía”, en Cuarto Poder, 12 de octubre de 2020.

48 . Albert Acín, “¿Qué piensan los catalanes de la monarquía?”, en El Nacional.cat, 27 de febrero de 2018.

49 . “Iglesias cree que el horizonte de una ‘república plurinacional’ se abre paso en España a medio o largo plazo”, en infoLibre, 22 de julio de 2020.

50 . “Muere Manuel Prado y Colón de Carvajal, administrador de la fortuna del rey durante décadas”, en El Confidencial, 5 de diciembre de 2009.

51 . Jesús Cacho, El negocio de la libertad, Foca, Madrid, 1999.

52 . Jesús Cacho, “Desenterrando a franco; tratando de enterrar a Felipe VI”, en Vozpópuli, 29 de julio de 2018.

53 . El coronel Amadeo Martínez Inglés ha publicado libros como 23F. El golpe que nunca existió (Foca, 2001) y Juan Carlos I, el último Borbón (Styria, 2008); Rebeca Quintáns publicó con el pseudónimo Patricia Sverlo el libro Un rey golpe a golpe (Ardi Belza, 2000) y sin pseudónimo Juan Carlos I: la biografía sin silencios (Akal, 2016); Iñaki Anasagasti publicó Una monarquía protegida por la censura, (Foca, 2009).

54 . Daniel Montero, “Las cintas en las que Corinna desveló que Juan Carlos I la usaba como testaferro: ‘No porque me quiera mucho, sino porque resido en Mónaco’”, en El Español, 11 de julio de 2018; “Corinna: ‘Juan Carlos ha puesto cuentas de banco en Suiza a nombre de su primo Álvaro de Orleans y Borbón’”, en El Español, 11 de julio de 2018.

55 . “Corinna rompe su silencio tras las grabaciones sobre Juan Carlos I: ‘Hay una campaña de descrédito contra mí’”, en LaSexta.com, 12 de julio de 2018.

56 . Francisco Marhuenda, “El ‘golpe’ de las fotocopias”, en La Razón, 10 de febrero de 2013.

57 . Antonio M. Vélez y Gonzalo Cortizo, “Un embajador español acompañó a Corinna en una reunión oficial como enviada de Juan Carlos I a Arabia Saudí”, en eldiario.es, 5 de septiembre de 2018.

58 . “PP, PSOE y Cs impiden tramitar la comisión de investigación sobre las cuentas suizas del rey Juan Carlos y el cobro de comisiones”, en infoLibre, 4 de septiembre de 2018.

59 . Alicia Gutiérrez, “Hacienda nunca llegó a investigar si el rey emérito posee cuentas en Suiza y se limitó a informar de que no tiene declarada ninguna”, en infoLibre, 20 de septiembre de 2018.

60 . Félix Martínez, “Tres generaciones de malas compañías”, en eldiario.es, 19 de septiembre de 2012.

61 . Idem.

62 . Rafael Méndez, “OHL tensa la cuerda en el consorcio y exige más dinero para limpiar el AVE a La Meca”, en El Confidencial, 8 de marzo de 2016.

63 . Real Decreto 137/2011, de 3 de febrero, por el que se concede el título de Marqués de Villar Mir a don Juan Miguel Villar Mir.

64 . Carlos Hernanz, “El rey salva el contrato millonario de La Meca tras retomar el poder en la Casa Real”, en El Confidencial, 27 de octubre de 2011.

65 . David Fernández y Roberto R. Ballesteros, “Villar Mir falsificó con su médico que tenía gripe para no acudir ante la Guardia Civil”,

en El Confidencial, 24 de marzo de 2018; Miguel Ángel Campos, “La justicia archiva de plano la investigación a Villar Mir por falsedad”, en Cadenaser.com, 19 de julio de 2018.

66 . “Don Juan dejó una herencia de más de mil millones de pesetas”, en El Mundo, 30 de marzo de 2013.

67 . “La Casa Real dice que la herencia suiza del rey se gastó en deudas de los condes de Barcelona”, en RTVE.es, 4 de julio de 2013.

68 . Andreu Manresa y Bruno García Gallo, “Madrid admite que ‘donó’ 120.000 euros a la fundación de Urdangarin”, en El País, 11 de febrero de 2013.

69 . La entrevista de Jordi Évole a Jaume Matas era demoledora y dejó para el recuerdo el sentimiento de obviedad cuando Matas explicaba por qué cualquier petición de Urdangarin debía satisfacerse: “¡Era el duque de Palma!”. “Jaume Matas: ‘Tener a Iñaki Urdangarin en el proyecto para mí era un gran aval’”, en LaSexta.com, 13 de febrero de 2012.

70 . “Leonor sigue los pasos de Felipe en Covadonga”, en La Voz de Asturias, 11 de julio de 2018.

71 . Artículo 99.1 de la Constitución: “Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia del Gobierno”.

72 . Guillem Martínez, “El 27O: ¿Hubo golpe de Estado?”, en Ctxt, 28 de octubre de 2018.

73 . Daniel Sánchez Caballero, “Estudiantes de la Autónoma convocan un ‘referéndum’ sobre la monarquía: ‘Queremos un debate público sobre el sistema’”, en eldiario.es, 25 de octubre de 2018.

74 . “‘Vallekas Decide’: los vecinos del barrio madrileño votan en una consulta si prefieren monarquía o república”, en LaSexta.com, 2 de junio de 2018.

75 . “El Banco de España calcula que solo se recuperará el 21% de las ayudas a la banca”, en Público, 20 de noviembre de 2019. La cantidad de dinero público que se inyectó a la banca aumenta con cada informe del Banco de España; la cantidad de dinero recuperable, por el contrario, disminuye en cada nueva entrega de información.

76 . Manuel V. Gómez, “La clase media pierde tres millones de personas por la crisis”, en El País, 7 de mayo de 2016.

77 . Olga Salido, “Crisis económica y clases sociales: todos perdemos, sobre todo los más pobres”, en Observatorio la Caixa, julio de 2018.

78 . Conseil d’orientation pour l’emploi, “Les réformes des marchés du travail en Europe”, tomo 1, informe general, noviembre de 2015.

79 . José María Marti Font, “Sarkozy propone refundar sobre bases éticas el capitalismo”, en El País, 26 de septiembre de 2008.

80 . “España sufre la mayor recesión de todo el mundo por la crisis del coronavirus”, en El País, 1 de agosto de 2020.

81 . Jordi Pérez Colomé, “Cuáles son los casos de corrupción más graves de España”, en El País, 25 de mayo de 2018.

82 . “La colaboración entre la trama de Correa y el PP llevó a un ‘auténtico sistema de corrupción institucional’”, en Europa Press, 24 de mayo de 2018.

83 . José Antonio Hernández, “La trama Gürtel pagó parte de la boda de la hija de Aznar y Alejandro Agag”, en El País, 21 de mayo de 2013.

84 . Pedro Águeda, “Los reyes de España arroparon a López Madrid cuando estalló el escándalo de las tarjetas black”, en eldiario.es, 8 de marzo de 2016.

85 . Pedro Águeda e Ignacio Escolar, “Anticorrupción investiga al rey Juan Carlos, a la reina Sofía y a varios de sus familiares por el uso de tarjetas de crédito opacas”, en eldiario.es, 3 de noviembre de 2020.

86 . Andreu Manresa y Jesús García,“Iñaki Urdangarin será imputado en el ‘caso Palma Arena’”, en El País, 9 de noviembre de 2011.

87 . José Manuel de Pablos y Alberto Ardèvol-Abreu, “Prensa española y monarquía: el ‘silencio crítico’ se termina. Estudio de caso”, Universidad de la Laguna, Tenerife, 2009.

88 . Pilar Urbano, La reina muy de cerca, Planeta, Madrid, 2009.

89 . David Rocasolano, Adiós, princesa, Foca, Madrid, 2013.

90 . “El 15M tiene el apoyo de más del 80% de los ciudadanos, sobre todo entre la izquierda, pero un 60% cree que no triunfará”, en Europa Press, 6 de junio de 2011.

91 . “‘¡Viva el rey!’, el hilarante discurso de Casado del que se cachondea Twitter”, en El Español, 9 de septiembre de 2018.

92 . “Vistalegre. España Siempre” crónica de Vox Aranjuez, en Aranjuez.es, 7 de octubre de 2019.

93 . Cayetana Álvarez de Toledo [@CayetanaAT]: Perded toda esperanza. No mandaréis la Transición al exilio, tuit del 3 de agosto de 2020, disponible en https://twitter.com/cayetanaAT/status/1290351648724996098

94 . Mariano Calleja, “Casado: ‘No voy a permitir que ningún portavoz del PP critique o pida explicaciones al Rey’”, en ABC, 18 de agosto de 2020.

95 . Isabel Díaz Ayuso [@IdiazAyuso]: Quiero subrayar el trabajo histórico de Juan Carlos I por España, a quien debemos los mejores años de nuestra democracia. Y la más firme confianza en la monarquía parlamentaria encarnada por Felipe VI, tuit del 3 de agosto de 2020, disponible en https://twitter.com/idiazayuso/status/1290323889462161409

96 . Vox [@Vox_es]: Mensaje de @Santi_ABASCAL a los españoles: “El rey Felipe VI es la cabeza de la Nación y la Nación no va a permitir que una pandilla de desalmados, corruptos y blanqueadores de asesinos, le roben el futuro y el afán por seguir dando continuidad a nuestra historia”, tuit del 4 de agosto de 2020, disponible en https://twitter.com/vox_es/status/1290682308958265345

97 . Iván Espinosa de los Monteros [@Ivanedlm]: VERDE, tuit del 3 de agosto de 2020, disponible en https://twitter.com/ivanedlm/status/129036 5777816817665

98 . “Abascal se refiere al Papa como ‘ciudadano Bergoglio’ y rechaza su propuesta de un salario universal”, en 20 Minutos, 29 de abril de 2020.

Índice

PRÓLOGO, por Luis Alegre

INTRODUCCIÓN

PRIMERA PARTE. FORMACIÓN DEL ESPÍRITU DE LA TRANSICIÓN

Régimen

¡Manos arriba! ¡Esto es un consenso!

¡Es la cultura, idiotas!

Transición, tú antes molabas

La Transición ha muerto, viva 1992

El futuro ha muerto, viva la Transición

La Transición comienza hoy

Contra la crispación, Transición

La santa madre Transición

Aznar en tiempos revueltos

González, Pujol… Los hombres de Estado

Cánovas + Azaña = Aznar 1.0

El complejo de inferioridad moral de la derecha

El Cid + Francisco Franco = Aznar 2.0

España es Aznar. La democracia es Aznar. La Transición es Aznar

¡Patriotismo ‘constitucional’!

El candado

Autoritarismo ‘liberal’

La pax americana no es hispana

La generación arrogante

Derrota de la cultura de la Transición, supervivencia del régimen del 78

El intelectual colectivo y la Transición

SEGUNDA PARTE. ¿SUEÑA FELIPE VI CON ESPAÑOLES ELÉCTRICOS?

El rey de todos los españoles

El rey de cada vez menos españoles

El rey suspende, viva el rey

¡No hagas preguntas indiscretas!

La monarquía se jubila

República, ¿para qué?

No habrá reforma de la Constitución en España

La democracia c’est moi

¿Tú no sabes a quién representa Prado?

La monarquización del Parlamento

Continuidad dinástica: las malas compañías

El rey reina, pero también gobierna

Un rey no se mete en política

Del campechano al burócrata invisible

¡Acoso a la Corona!

El rey de la derecha… o la república de toda España

TERCERA PARTE: EL EMPERADOR ESTÁ DESNUDO

Con lealtad al rey

El traje nuevo de la Transición

Reforma es revolución

República es reforma

Tres fotos de familia: El Escorial

Tres fotos de familia: Bankia

Tres fotos de familia: Iñaki

¡Está desnudo!

El 15M ha muerto, viva la república

CONCLUSIÓN. COMO EL JUNCO QUE SE DOBLA PERO SIEMPRE SIGUE EN PIE

NOTAS